

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Vigésimo Tercera Reunión del Comité de Expertos
Del 16 al 20 de marzo de 2015
Washington, DC

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.430/14 rev.4
20 marzo 2015
Original: español

VENEZUELA

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 20 de marzo de 2015)

SUMARIO DEL INFORME

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en la República Bolivariana de Venezuela del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Venezuela en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de la República Bolivariana de Venezuela al cuestionario; la información recabada por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2014 por los miembros del subgrupo de análisis de Venezuela, integrado por Haití y Perú, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Venezuela y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, y académicos sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas, facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas, y brindó a Venezuela la oportunidad de ofrecer y/o requerir asistencia técnica para los propósitos de la Convención.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si este es adecuado, y si producen los resultados esperados; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de Venezuela analizados en este informe son: la Contraloría General de la República (CGR); el Ministerio Público (MP); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI); y la Defensoría del Pueblo (DP).

Algunas de las recomendaciones formuladas a Venezuela para su consideración, en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

En relación con la CGR, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional; la estandarización de los mecanismos de control fiscal para todos los entes y organismos de la administración pública; la evaluación de los plazos para la ejecución de las auditorías; la implementación de un sistema de alarma en el Sistema de Declaración Jurada Patrimonial en línea que permita la identificación de posibles discrepancias en tiempo real; y el fortalecimiento de la institución dotándole de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para asegurar el cabal cumplimiento de sus labores en la prevención, detección e investigación de actos de corrupción.

En relación con el MP, la actualización del Estatuto de Personal del MP; la realización de los concursos públicos de oposición para entrar al servicio de la institución; la creación de la figura de los Fiscales del Ministerio Público en Materia Anticorrupción; el fortalecimiento del MP con los recursos humanos y presupuestarios que se requieran, para que la Fiscalía de Respuesta Inmediata contra la Corrupción (FRICC) pueda expandirse en el ámbito regional en el país; y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional entre el MP y los órganos de investigación penal principales y accesorios.

En relación con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la armonización del artículo 64 de la LOTSJ con el artículo 270 Constitucional, correspondiente a la naturaleza del Comité de Postulaciones Judiciales; la implementación del sistema “Agenda Única” en todos los Estados; y la publicidad de los informes anuales de gestión del Poder Judicial en la página de Internet del TSJ y a través de otros medios que estime conveniente, de manera que la ciudadanía pueda conocer esta información.

En relación con la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), la reanudación de la celebración de concursos de méritos y oposición para el reclutamiento del personal de la institución; conclusión de la revisión del Modelo Organizativo y Manual de Organización de la SUNAI, así como de aquéllos otros de sus manuales y normas de procedimientos internos que se encuentran bajo actualmente bajo este proceso; y la expedición de un manual de normas de control interno específico para la SUNAI, con base en el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente.

En relación con la Defensoría del Pueblo (DP), la conclusión del diseño del subsistema de reclutamiento de los funcionarios del DP; la publicación de todos los informes anuales del DP en la página de Internet de la institución; y la inclusión en las capacitaciones, talleres y otras actividades divulgativas de la DP, de temas orientados a la prevención de la corrupción, así como la difusión de los principios consagrados en la Convención.

Las buenas prácticas sobre las que Venezuela suministró información se refieren sintéticamente a la implementación por parte de la CGR de la Declaración Jurada de Patrimonio en Línea; las capacitaciones por parte del MP en el marco del Plan Nacional de Prevención del Delito, en materia anticorrupción a funcionarios adscritos a distintos órganos de control y prevención; la implementación por parte del TSJ de los Tribunales Móviles Itinerantes y del Sistema de Control Automatizado de Expedientes Judiciales; las capacitaciones por parte de la SUNAI en materia de participación ciudadana y control social a la ciudadanía y a los servidores públicos; y la implementación por parte de la DP del programa “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos” para el desarrollo de políticas públicas en materia de derechos humanos.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a Venezuela en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda Ronda, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Venezuela en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se definieron cuáles de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requerían atención adicional; y cuáles precisaban ser reformuladas, e hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del informe.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Venezuela en la Primera Ronda que quedan vigentes o que fueron reformuladas, apuntan a propósitos tales como la reglamentación del régimen de prevención de conflictos de intereses, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con los altos cargos del Estado; la utilización de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos activos y pasivos para detectar y evitar conflictos de intereses; el

fortalecimiento de las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública; la integración y sistematización en un solo cuerpo normativo de las disposiciones que garantizan el acceso a la información pública; y la derogación de las denominadas “leyes de desacato”.

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN**

**PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DE LA DISPOSICIÓN DE LA
CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADAS EN LA CUARTA RONDA,
Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS A
DICHOS PAÍSES EN LA PRIMERA RONDA ¹**

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del Informe

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en la República Bolivariana de Venezuela de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el Artículo III, Párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, aludirá a las buenas prácticas que en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe, el Estado analizado ha deseado voluntariamente compartir.

[3] En tercer lugar, de conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República Bolivariana de Venezuela por el Comité de Expertos del MESICIC en el informe que adoptó para este país en la Primera Ronda, y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para el mismo en la Segunda y la Tercera Rondas, los cuales se encuentran publicados en la siguiente página en “Internet” <http://www.oas.org/juridico/spanish/ven.htm>

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República Bolivariana de Venezuela ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 22 de mayo de 1997, depositando el instrumento respectivo de ratificación el 2 de junio del mismo año.

[5] Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001.

¹ El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 20 de marzo de 2015, en el marco de su Vigésimo Quinta Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 16 al 20 de marzo de 2015.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

1. Respuesta de la República Bolivariana de Venezuela

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República Bolivariana de Venezuela en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Contraloría General de la República (CGR), la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. La República Bolivariana de Venezuela envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en la siguiente página en “Internet” http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ven.htm

[7] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*, la cual se realizó durante los días 30 de septiembre a 2 de octubre de 2014, por parte de los representantes de Haití y de Perú, en su calidad de integrantes del subgrupo de análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República Bolivariana de Venezuela hasta el día 2 de octubre de 2014, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*. Esta información puede consultarse en la siguiente página de Internet: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm

2. Información recibida de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores.

[9] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.

[10] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada en la República Bolivariana de Venezuela, se recabó información de la sociedad civil y del sector privado, así como de académicos que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita *in situ* que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)

[11] La República Bolivariana de Venezuela cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar los siguientes: la Contraloría General de la República (CGR); el Ministerio Público (MP); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI); y la Defensoría del Pueblo (DP).

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cinco órganos seleccionados por la República Bolivariana de Venezuela que serán analizados en el presente informe.

[13] La Contraloría General de la República (CGR), es el órgano del Poder Ciudadano al que le corresponde el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos.

[14] El Ministerio Público (MP), es un órgano del Poder Ciudadano que tiene por objetivo actuar en representación del interés general y es responsable del respeto a los derechos y garantías constitucionales a fin de preservar el Estado democrático y social de derecho y de justicia. Entre sus atribuciones se encuentra la de ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal, así como la de ejercer, en nombre del Estado, la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no sea necesario instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes.

[15] El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es el máximo órgano rector del Poder Judicial, al que le corresponde la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, incluyendo la elaboración y ejecución de su presupuesto y el del Poder Judicial, así como la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas.

[16] La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), es el órgano rector del sistema de control interno del sector público a cargo de la supervisión, orientación y coordinación del control interno, así como de la dirección de la auditoría interna en los organismos que integran la administración central y descentralizada funcionalmente.

[17] La Defensoría del Pueblo (DP), es el órgano del Poder Ciudadano que tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en los artículos 19 al 31 de la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio, y de estos cuando están sujetos a la jurisdicción de la República en el exterior.

1. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.

[18] La Contraloría General de la República (CGR) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[19] En lo que corresponde a su naturaleza, objetivos y funciones, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 287 establece que *“La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control”*.

[20] Adicionalmente, el artículo 289 de la CRBV, el cual dispone que son atribuciones de la CGR *“1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos, en el caso de los estados y municipios, de conformidad con la ley; 2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos en el caso de los estados y municipios, de conformidad con la ley; 3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley; 4. Instar al fiscal o a la fiscal general de la República a que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones; 5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes; y 6. Las demás que establezca la Constitución y la ley”*.

[21] Por lo que respecta al ámbito de sus funciones, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) establece que están sujetos al control, vigilancia y fiscalización de la CGR *“1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional. 2. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estatal. 3. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos. 4. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 5. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales. 6. Los institutos autónomos nacionales, estatales, distritales y municipales. 7. El Banco Central de Venezuela. 8. Las universidades públicas. 9. Las demás personas de derecho público nacionales, estatales, distritales y municipales. 10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas. 11. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto. 12. Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma*

contraten, negocien o celebren operaciones con cualesquiera de los organismos o entidades mencionadas en los numerales anteriores o que reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos públicos”.

[22] De conformidad con el artículo 85 de la LOCGRSNF, la CGR podrá formular reparos *“cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta ley, como consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos”.*

[23] Asimismo, el artículo 94 determina que la CGR podrá imponer multas y el 105 dispone que, a partir de la responsabilidad administrativa, *“(…) de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto del perjuicio ocasionado, corresponde al Contralor o Contralora General de la República, de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes”.*

[24] Por lo que toca a la manera en la que se adoptan sus decisiones, éstas se toman de manera unipersonal y según lo dispuesto en la LOCGRSNCF, en el Capítulo II, artículo 10: *“La Contraloría General de la República actuará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor o Contralora General de la República (...)”.* Asimismo, el artículo 12 establece que el Contralor o Contralora General podrá delegar algunas tareas en el Sub-Contralor o Sub-Contralora.

[25] Las decisiones de la CGR que impliquen sanciones serán recurribles mediante recurso de revisión o reconsideración, la vía administrativa o la vía judicial según corresponda (Artículos 79, 107, 108, 109 y 110 de la LOCGRSNCF).

[26] En relación con la coordinación interinstitucional, el artículo 136 de la CRBV establece que: *“(…) Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.*

[27] Asimismo, el artículo 4 de la LOCGRSNCF dispone que los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal se encuentran bajo la rectoría de la CGR², y que interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de

² El Artículo 26 de la LOCGRSNCF dispone que son órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal: la Contraloría General de la República; la Contraloría de los Estados, de los Distritos, Distritos Metropolitanos y de los Municipios; la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; y las unidades de auditoría interna de las entidades a que se refiere el artículo 9, numerales 1 al 11, de la LOCGRSNCF.

control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y organismos sujetos a esta Ley, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública.

[28] En lo que respecta a los mecanismos para obtener el apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus funciones, el artículo 75 de la LOCGRSNCF dispone que el Contralor o Contralora General dictará las normas destinadas a fomentar la participación de los ciudadanos y ciudadanas.

[29] El Contralor o Contralora General de la República, junto con el Defensor o Defensora del Pueblo y el o la Fiscal General, hace parte del Consejo Moral Republicano, que es el órgano que ejerce el Poder Ciudadano (artículo 273 de la CRBV). En ese sentido, el nombramiento de los miembros del Poder Ciudadano y por ende el Contralor o Contralora General de la República, se rige por lo dispuesto en el artículo 279 de la CRBV que dispone que el Consejo Moral Republicano *“convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; tras lo cual se convoca a un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta última, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.”*

[30] El mismo artículo 279 agrega que *“En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente”*.

[31] Al respecto, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (LOPC) dispone que *“El Comité de Evaluación de Postulaciones se integrará con representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes deberán ser venezolanos por nacimiento, y en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en un número no mayor de veinticinco (25) integrantes, y cuyos requisitos serán establecidos en el Ordenamiento Jurídico Interno del Consejo Moral Republicano, que lo convocará sesenta días antes del vencimiento del periodo para el cual fueron designados los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, a efectos de seleccionarlos mediante proceso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”*.

[32] En su siguiente párrafo, el citado artículo 23 de la LOPC agrega que: *“En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano en el lapso indicado, la Asamblea Nacional procederá a la designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano en un tiempo no mayor de treinta (30) días continuos”*.

[33] La instancia competente para exigir al Contralor o Contralora General responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo será la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (Artículos 276 y 279 de la CRBV). El Contralor o Contralora General de la República deberá ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años y comprobada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo. Su designación será para un período de siete años (Artículo 288 de la CRBV).

[34] En lo que se refiere a la manera en que se determinan los recursos humanos de la CGR, el Estatuto de Personal de la CGR³ (EPCGR), en su artículo 5 dispone que “*Son funcionarios de la Contraloría quienes ingresan al servicio del Organismo mediante nombramiento, superan satisfactoriamente el período de prueba establecido en el artículo 15 de este Estatuto y desempeñen funciones de carácter permanente*”.

[35] El artículo 6 del mismo EPCGR establece que “*Los cargos de la Contraloría General de la República, a excepción del auditor interno, son de confianza en consecuencia, de libre nombramiento y remoción...*” Por otra parte el personal obrero y contratado se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

[36] El proceso de selección de candidatos para optar a cargos en la Contraloría se encuentra contemplado en la Sección Segunda del EPCGR (artículos 10-11), y el período de prueba en la Sección Sexta del EPCGR (Artículos 15-18).

[37] El régimen de prohibiciones, incompatibilidades, inhibiciones y responsabilidades a que está sujeto el personal de la CGR se encuentra contemplado en los artículos 87-99 del EPCGR.

[38] El Estado analizado, en su respuesta, puso de presente que cuenta con el Sistema de Clasificación de Cargos, según lo establecido en el artículo 9 del EPCGR. Adicionalmente, existe una resolución por la cual se disponen los cargos de la CGR, así como el grado a que corresponden en el Tabulador de Sueldos para los Grupos Técnico Fiscal, Administrativo y de Apoyo⁴.

[39] En lo concerniente a capacitación, la CGR cuenta con el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE), que es el Centro de Altos Estudios de la CGR. El Instituto trimestralmente anuncia la programación de actividades de capacitación que se dictan en sus sedes para poder atender las necesidades de desarrollo académico de las regiones y que puedan acudir los funcionarios que pertenecen a los órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal. Las actividades de capacitación están divididas en áreas y según la competencia que tenga el funcionario se orienta su formación a los siguientes temas: Control Fiscal, Auditoría de Estado, Gerencia de Estado, Participación Ciudadana y Jurídico Fiscal.⁵ Igualmente, la CGR establece convenios de capacitación con organismos internacionales y entre los cursos impartidos en ese sentido se destaca el curso virtual “Convención Interamericana contra la Corrupción”.

[40] El Estado analizado, en su respuesta, pone de presente que la CGR cuenta con una serie de manuales que definen la estructura de la institución y señalan las funciones que deben realizar cada una de las unidades que la conforman, siendo la Dirección de Sistemas de Control la unidad encargada de coordinar con las distintas dependencias la elaboración de estos documentos que reflejan el desarrollo de sus actividades⁶.

[41] En lo referente a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, la CGR cuenta con la Dirección de Informática, encargada entre otras

³ Gaceta Oficial N° 383.326, de fecha lunes 7 de febrero de 2011. Resolución N° 01-00-000033 de fecha 4 de febrero de 2011.

⁴ Respuesta de Venezuela al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, p. 54.

⁵ *Ídem*, pp. 55-56.

⁶ *Ídem*, pp. 56-57. Ver también Anexo 9 de la Respuesta de Venezuela al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, “Índice de Manuales”.

cosas de planificar el desarrollo, implementación y operación de los sistemas de información, evaluar los sistemas existentes e introducir las modificaciones que se considere convenientes. Entre sus avances tecnológicos, la CGR posee una plataforma de Intranet para la gestión de las relaciones internas de la institución, así como el sistema de Declaración Jurada de Patrimonio en línea⁷.

[42] La CGR cuenta con diferentes medios para suministrar a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones, darles a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientación acerca de cómo realizar gestiones, entre ellos Dirección de Comunicación Corporativa, la Oficina de Atención al Ciudadano y el portal de Internet de la institución⁸.

[43] En relación con los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionados con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR informaron que cuentan con un instructivo para el trámite de denuncias, además de los servicios ofrecidos a través de la Oficina de Atención al Ciudadano.

[44] Adicionalmente, en su respuesta, el Estado analizado informó que cuentan con las Normas Generales de Control Interno de la CGR y con una unidad de auditoría interna⁹.

[45] Por lo que toca a la manera en que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el artículo 17 de la LOCCGRSNCF dispone que la Contraloría preparará cada año su proyecto de presupuesto de gastos, el cual será remitido al Poder Ciudadano para su presentación al Ejecutivo Nacional e incorporación sin modificaciones al correspondiente proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal que se someterá a la consideración de la Asamblea Nacional; y que sólo la Asamblea Nacional podrá introducir cambios en el proyecto de presupuesto que presente la Contraloría.

[46] Sin perjuicio de ello, el artículo 18 de la LOCCGRSNCF dispone que las disposiciones del artículo 17 anterior no impiden a la Contraloría hacer uso de los mecanismos establecidos en la ley para cubrir gastos imprevistos que se presenten en el curso de la ejecución presupuestaria, o para incrementar los créditos presupuestarios que resulten insuficientes, a cuyos efectos seguirá el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

[47] En relación con los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones y la forma en que ésta se hace pública para que los ciudadanos puedan tener acceso a la misma, de conformidad con el artículo 276 de la CRBV dispone que los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, del cual la CGR hace parte, deberán presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional en sesión plenaria, además de presentar los informes que en cualquier momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional.

[48] Asimismo, el Estado analizado en su respuesta informa que la CGR, como máximo órgano de control fiscal, presenta anualmente un informe de gestión de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numeral 13 de la LOCCGRSNCF; que todo el proceso de su elaboración se desarrolla en el Instructivo para la Elaboración del Informe de Gestión cuyo producto final servirá como instrumento, de rendición de cuentas, a ser evaluado por los

⁷ *Ídem*, pp. 57.

⁸ *Ídem*, pp. 57-58.

⁹ *Ídem*, pp. 58-59.

ciudadanos, y la misma puede consultarse en la página Web de la CGR¹⁰; y que en dicha página aparecen publicados los informes de gestión anuales, informes de actuación, informes especiales, circulares, dictámenes, entre otros¹¹.

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[49] La Contraloría General de la República (CGR) tiene un conjunto de disposiciones y/u otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1. de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[50] En primer lugar, en lo que se refiere al nombramiento del Contralor o Contralora General, el Comité observa que, como ha quedado registrado en la sección de existencia del marco jurídico anterior, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 279, prevé un proceso para su selección a través de un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad, quien seleccionará una terna mediante proceso público para la consideración de la Asamblea Nacional.

[51] Por otra parte, el Comité toma nota de que este mismo artículo de la CRBV también prevé la posibilidad de que *“En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente”*.

[52] En ese sentido, el Comité también observa que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (LOPC) dispone que el Consejo Moral Republicano, que es quien tiene la responsabilidad convocar el Comité de Evaluación de Postulaciones, tiene un plazo de 60 días previo al vencimiento del período para el cual fueron designados los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, que incluye al Contralor o Contralora General, para convocar a dicho Comité y que, de no convocarlo en el plazo indicado, la Asamblea Nacional procederá a la designación de los titulares de los órganos del Poder ciudadano en un tiempo mayor de 30 días continuos.

[53] Sobre el particular, durante la reunión del Estado analizado con los miembros del subgrupo de análisis, los representantes de Venezuela pusieron de presente que en la práctica sí se ha dado el caso de que el Consejo Moral Republicano no ha convocado al Comité de Postulaciones dentro del plazo indicado, y que la Asamblea Nacional ha procedido a la designación del Contralor General y los otros titulares del Poder Ciudadano.

[54] Al respecto, agregaron que en estos casos la Asamblea Nacional ha procedido a crear procedimientos de selección *ad hoc* caso por caso a los fines de asegurar la transparencia del proceso, y que se han guiado asimismo por el Reglamento de Debates de la Asamblea.

[55] En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere la creación de un procedimiento de selección para los titulares del Poder Ciudadano que tenga como base los principios de publicidad, equidad y eficiencia, para ser utilizado por la Asamblea Nacional en los todos los casos en que el Consejo Moral Republicano no convoque el Comité de Postulaciones dentro del plazo indicado por ley, de manera que no se vea en la necesidad de diseñar y utilizar procedimientos *ad hoc*, cada vez que se presenta esta contingencia. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.4. del Capítulo II de este informe).

¹⁰ www.cgr.gob.ve

¹¹ Respuesta de Venezuela al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, p. 61.

[56] En segundo lugar, en relación con la previsión de los recursos humanos de la CGR, el Comité observa que el artículo 6 del Estatuto de Personal de la CGR, expedido en 2011, dispone que *“Los cargos de la Contraloría General, a excepción del auditor interno, son de confianza y en consecuencia de libre nombramiento y remoción del Contralor o Contralora General...”*

[57] Sobre el particular, el Comité advierte que el artículo 4 del anterior Estatuto de Personal de la CGR expedido en 2000 y vigente en 2007, año en que se adoptó el Informe de Venezuela correspondiente a la segunda ronda de análisis, disponía que *“Los cargos de la Contraloría General de la República son de carrera, salvo los de libre nombramiento y remoción. Se consideran cargos de libre nombramiento y remoción, los de alto nivel y los de confianza...”*

[58] Al respecto, el Comité toma nota de que el actual Estatuto de Personal de la CGR elimina el acceso al servicio de carrera para todos los cargos de la Contraloría. Sin embargo, siendo que este es un tema de la segunda ronda y que la implementación de las recomendaciones que se le formularon al Estado analizado en relación con el sistema de contratación de funcionarios al servicio de la CGR será analizado en la quinta ronda, el Comité no se pronunciará al respecto en esta ocasión.

[59] En tercer lugar, el Comité toma nota de que la CGR cuenta con el Sistema de Clasificación de Cargos y con el Tabulador de Sueldos para los Grupos Técnico Fiscal, Administrativo y de Apoyo. Al respecto, durante la visita *in situ* los representantes de la CGR manifestaron que en este momento está en proceso de reforma del Sistema de Clasificación de Cargos, debido a que ha habido cambios en los tipos de cargos en la entidad, así como la necesidad de efectuar ajustes significativos en las remuneraciones del personal a los fines de evitar la migración de funcionarios calificados a otras instancias de control fiscal.

[60] Efectivamente, la CGR en su Plan Operativo Anual 2014, identifica entre sus dificultades que *“La asignación presupuestaria original aprobada a la CGR y el mecanismo mediante el cual se cubren las necesidades de recursos de la organización durante el año, trae como consecuencia la imposibilidad de ejecutar adecuadamente la programación de ingresos del personal y el mantenimiento constante en el tiempo de una política salarial atractiva. Esta situación ocasiona la migración de personal calificado a otras instancias de control fiscal, y que el mismo no pueda ser sustituido bien sea con nuevos ingresos o capacitando adecuadamente al personal que se queda en la institución”*.¹²

[61] Sobre el particular, el Comité observa que el tema de la remuneración equitativa para los funcionarios públicos está contemplada en el párrafo 12 del Artículo III de la Convención, el cual será analizado en la quinta ronda y por lo tanto no se pronunciará al respecto en esta ocasión. Sin embargo, el Comité sí formulará recomendaciones con respecto a la necesidad de fortalecer a la CGR dotándola para ello de los recursos humanos y financieros necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, así como concluir a la brevedad la revisión del Sistema de Clasificación de Cargos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendaciones 1.4.2. y 1.4.3. del Capítulo II de este informe).

[62] En este mismo orden de ideas, el Comité toma nota de que en el Plan Anual 2014 de la CGR, se identifica entre sus debilidades la falta de un sistema de evaluación continua del personal para los propósitos de evaluar la eficacia del trabajo después del período inicial. Durante la sesión plenaria del Comité de Expertos, el Estado analizado agregó que esto serviría también como base para aplicar la escala salarial en los grados y pasos establecidos en la reglamentación interna; y

¹² Plan Operativo 2014 – Matriz DOFA

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_dofa_poa_cgr_2014.pdf

posteriormente para el llamado a concurso público. Sobre el particular, el Comité estima que sería beneficioso que el Estado analizado considerara la implementación de un sistema de evaluación continua del personal, a los fines de fortalecer el recurso humano de la CGR y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.4. del Capítulo II de este informe).

[63] En cuarto lugar, en lo que se refiere a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, el Comité toma nota de que si bien la CGR cuenta con una red modular de sistemas informáticos y el Sistema de Declaración Jurada de Patrimonio en Línea, durante la visita *in situ* los representantes de la CGR pusieron de presente entre sus necesidades que se requiere apoyo presupuestario para adquirir recursos tecnológicos a fin de interconectar todo el sistema y para poner en línea todo el proceso de auditoría, incluido su seguimiento, así como ponerlo a la disposición de los Municipios más remotos en los que solamente puede accederse por agua.

[64] En efecto, en la Matriz del Plan Operativo 2014 de la CGR, se pone de presente entre las posibles amenazas¹³ que “...se observa con preocupación la posibilidad de rezago tecnológico bien sea por la no disposición de los recursos financieros necesarios para la adquisición de los equipos tecnológicos adecuado o para la contratación y retención del personal especializado y necesario en la materia”, y en la sección correspondiente a debilidades que “Se requieren sistemas de manejo de la información que permitan actualizar oportunamente el estado de cada caso en vía judicial y se necesita culminar el desarrollo y aplicación de los sistemas informáticos para la gestión de los procesos medulares de la organización, como actuaciones, potestad investigativa y determinación de responsabilidades, así como un sistema de evaluación del personal”.¹⁴

[65] Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere fortalecer a la CGR dotándola de los recursos presupuestarios y tecnológicos que requiere para los propósitos arriba citados, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.5. del Capítulo II de este informe).

[66] En quinto lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta pone de presente entre sus dificultades las respuestas tardías de los organismos de la administración pública nacional a las solicitudes de información emitidas por la CGR; limitaciones en cuanto a la obtención de la información necesaria para sustentar la labor de auditoría y demoras en el suministro de la información por parte del ente u organismo auditado¹⁵.

[67] Durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR manifestaron que parte del problema de la demora en la obtención de información deriva de la alta rotación de personal en los organismos de la administración pública. Asimismo, en el Plan Operativo Anual 2014 de la CGR, se pone de presente que existe una “Escasa cultura de control en las organizaciones sujetas a control, que se evidencia a través de limitaciones en cuanto a la obtención de la información necesaria para sustentar la labor de auditoría, retraso en el suministro de la información requerida, baja calidad de la información suministrada, pocos receptivos ante las sugerencias para mejorar los mecanismos de control, etc.”

¹³ La Matriz DOFA del Plan Operativo 2014 cuenta con cuatro columnas: Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades.

¹⁴ Plan Operativo 2014 – Matriz DOFA

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_dofa_poa_cgr_2014.pdf

¹⁵ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, p. 68.

[68] Al respecto, el Comité toma nota de que si bien el Estado analizado tanto en su respuesta como en la visita *in situ* puso de presente que cuentan con mecanismos de coordinación interinstitucional, y que la misma Constitución establece que “*los órganos del Poder Público colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado*” y que el artículo 4 de la LOCGRSNCF establece que los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal interactúan coordinadamente bajo la rectoría de la CGR, el Comité estima que sería beneficioso que el Estado analizado considerara fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional cuando sea pertinente, a los fines de optimizar la fluidez y calidad de la información entre la CGR y los organismos de la administración pública nacional. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.6. del Capítulo II de este informe).

[69] En ese mismo sentido, el Comité estima que sería conveniente para el Estado analizado considerar el fortalecimiento y la estandarización de los mecanismos de control para todos los entes y organismos de la administración pública, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.7. del Capítulo II de este informe).

[70] Adicionalmente, el Comité advierte que el Plan Operativo 2014, Matriz DOFA de la CGR lista entre las debilidades de la institución la necesidad de corregir algunas disposiciones que por uso o costumbre han quedado establecidas en la cultura organizacional, tales como la limitación de tiempo para la ejecución de las auditorías. Sobre el particular, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado establecer plazos razonables para la ejecución de las auditorías (ver recomendación 1.4.8. del Capítulo II de este informe).

[71] En sexto lugar, en relación con los mecanismos de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la CGR y con el desempeño del personal a su servicio, el Comité toma nota de que si bien el Portal de Internet de la entidad incluye información al público en su sección de preguntas frecuentes en el sentido de que “*los ciudadanos pueden interponer denuncias, quejas, reclamos y peticiones ante cualquier Órgano o Ente, vale decir, Contraloría General de la República, Contralorías Estadales, Distritales, Municipales, Unidades de Auditoría Interna, o ante cualquier Oficina de Atención al Ciudadano de los organismos y entidades del sector público*”, no cuenta con un buzón de quejas, denuncias y sugerencias específicamente designado para este propósito.

[72] En efecto, la página de Internet de la CGR contiene un buzón de contacto para comunicarse con la entidad, pero para hacerlo el sistema solicita una clave de usuario y contraseña, lo que puede dificultar la comunicación del ciudadano común que desea formular una queja, denuncia o sugerencia utilizando este medio. Al respecto, el Comité estima que sería de utilidad que el Estado analizado considerara incluir un buzón para quejas y denuncias de más fácil acceso para el usuario común e incluir la información sobre su uso en la sección de preguntas frecuentes; así como establecer una línea telefónica gratuita para que las personas que no tengan acceso a la Internet puedan denunciar los actos de corrupción que lleguen a su conocimiento o formular reclamaciones contra los presuntos autores de los actos de corrupción de los que ellas sean víctimas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendaciones 1.4.9. y 1.4.10. del Capítulo II de este informe).

[73] Finalmente, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que la mayoría de las necesidades de cooperación que requiere la CGR está enfocada a “*garantizarle, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, el funcionamiento de manera eficiente y eficaz de los entes que conforman el sistema*”. Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por la CGR, de la necesidad de que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, especialmente a sus Instituciones de Control Financiero, así

como a otras organizaciones de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.11. del Capítulo II de este informe).

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[74] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados de la Contraloría General de la República (CGR), de la cual se destaca la siguiente:

[75] Tanto en su respuesta al cuestionario como en la visita *in situ*, el Estado analizado presentó información relativa a sus funciones de prevención de la corrupción, de la cual se destaca la siguiente¹⁶:

[76] *“En materia de prevención contra la corrupción, la Contraloría General de la República le ha dado gran importancia a la capacitación como medio de prevención y ha realizado innumerables actividades formativas tanto a nivel de la propia institución, como del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Administración Pública general.*

[77] *“A título ilustrativo, en el año 2.009, continuando con la labor de asesorar la creación de oficinas de atención ciudadana en todos los organismos de la Administración Pública, tal como lo prevé el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción, la Contraloría General, con el apoyo del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE), dictó cursos destinados a fomentar la participación ciudadana y la creación de dichas oficinas. En estos cursos participaron funcionarios de 17 entes y organismos del Estado...*

[78] *“Con el fin de no extender esta presentación, en el Anexo N° 10 se incluye un cuadro con las actividades de capacitación realizadas por la CGR durante el periodo 2010-2013.”*

[79] Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR suministraron información adicional relativa a los cursos realizados en la materia a través de la COFAE. Esta información y el Anexo No. 10 de la respuesta al cuestionario a la que se hace referencia en el párrafo anterior pueden consultarse en los siguientes enlaces de Internet:
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ven.htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_pres_cgr_mar_jau.pdf.

[80] El Comité estima que la anterior información sirve para demostrar que en la CGR se han desarrollado acciones de prevención de actos de corrupción, en cumplimiento de las funciones que les corresponden en esta materia.

[81] Por otra parte, el Estado analizado, tanto en su respuesta al cuestionario como en la visita *in situ*, presentó información estadística con respecto a los resultados de sus funciones de detección, investigación y sanción de actos de corrupción, de la cual se destaca la siguiente¹⁷:

Cuadro No.1

¹⁶ Respuesta de Venezuela al cuestionario relativo a la Cuarta Ronda, p. 62.

¹⁷ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 62-67.

La información estadística suministrada con ocasión de la visita *in situ* puede consultarse en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ven.htm

Resumen Cuantitativo de la Gestión de Control realizada por la CGR, años 2009-2014

Año/Concepto	Actuaciones¹⁸ de Control	Declarados responsables	Multas derivadas de las declaratorias de responsabilidad¹⁹(Bs)	Monto en Reparos Formulados²⁰ (Bs)	Sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad²¹	Expedientes e Informes remitidos al Ministerio Público	Declaraciones juradas de patrimonio Recibidas	Auditorías patrimoniales	Medidas preventivas dictadas	Multas derivadas de la Declaración Jurada Patrimonial (Bs)
2009	164	60	174.195,40	78.992.419,44	166	55	136.513	14	-	182.372,38
2010	158	58	218.289,10	8.822.824,79	150	26	283.089	10	12	587.437,50
2011	115	41	385.584,30	2.951.504,02	199	18	302.772	7	8	1.481.525,00
2012	98	77	1.153.352,40	8.545.390,11	22	25	302.638	12	-	753.750,00
2013	75	65	1.158.919,55	43.911.323,00	107	38	386.934	6	-	20.585.462,50
2014	-	-	-	-	-	6	317.230	7	-	-
Total	610	301	3.090.340,75	143.223.461,36	644	168	1.729.176	56	20	23.590.547,38
Montos en US\$ a razón de Bs. 6,30 por dólar²²			490.530,28	22.733.882,76						3.744.531,33

Fuente: Informe de Gestión de la CGR ante la Asamblea Nacional

[82] Asimismo, cabe resaltar que el Estado analizado presentó también información estadística desagregada con respecto a cada uno de los conceptos registrados en el cuadro estadístico anterior, la cual puede consultarse en los siguientes enlaces de Internet:
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_pres_cgr_arm_gue.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_pres_cgr_may_riol_mal.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_pres_cgr_mor_mill_loy.pdf

[83] En primer lugar, el Comité toma nota de que la información sobre resultados ofrecida por el Estado analizado no muestra el número de decisiones sobre responsabilidad administrativa que resultaron en absoluciones o pronunciamientos de sobreseimiento que facilitarían un análisis más profundo sobre el tema. Al respecto, el Comité estima que el Estado analizado podría considerar la posibilidad de complementar su información estadística a los fines de mostrar cuántas decisiones resultaron en absoluciones o en sobreseimiento y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.12. del Capítulo II de este informe).

¹⁸ Esta columna se refiere a auditorías de cumplimiento, auditorías de gestión, auditorías de tecnología de información y comunicación, auditorías operativas, auditorías financieras, exámenes de cuentas y seguimiento a las acciones correctivas.

¹⁹ Multas resultantes de responsabilidad administrativa de conformidad con el artículo 94 de la LOCGRSNCF.

²⁰ Reparos formulados por la CGR cuando en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control se detecten indicios de daño al patrimonio de un ente u organismo bajo las condiciones establecidas en el artículo 85 de la LOCGRSNCF.

²¹ Sanciones resultantes en inhabilitación o destitución del cargo resultantes de responsabilidad administrativa de conformidad con el artículo 105 de la LOCGRSNCF.

²² Tasa de cambio oficial efectiva al 30 de septiembre de 2014.

[84] En segundo lugar, el Comité toma nota de que de conformidad con la información contenida en el cuadro estadístico anterior, el número de actuaciones de control ha disminuido, de 164 en 2009 a 75 en 2013. Sobre el particular, el Comité considera que sería de utilidad para el Estado analizado llevar a cabo un estudio sobre el volumen de actuaciones de control de la CGR, a los fines de identificar la causa de esta disminución, en orden a de identificar retos y de ser necesario adoptar medidas correctivas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.13. del Capítulo II de este informe).

[85] Por otra parte, el Comité observa que si bien el cuadro estadístico muestra el monto de las sanciones pecuniarias impuestas por la CGR en la forma de multas y reparos, no indica cuál fue el monto que ingresó actualmente al erario público como resultado de dichas multas y reparos. Al respecto, el Comité considera que sería útil que el Estado analizado lleve estadísticas que permitan hacer una comparación entre las multas y reparos impuestos y el monto ingresado al erario público como resultado de los mismos, a los fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario (ver recomendación 1.4.14. del Capítulo II de este informe).

[86] En relación con la información de los expedientes e informes remitidos al Ministerio Público que aparece en el cuadro anterior, el Comité toma nota de que el Estado analizado presentó información adicional desagregada con ocasión de la visita *in situ*, que se transcribe a continuación:

Cuadro No. 2

Expedientes remitidos al Ministerio Público							
Órgano/Año	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
CGR Derivadas de la DJP*	22	11	5	9	5	6	58
SNCF Informes de auditorías	34	36	38	35	68	52	263
Total	56	47	43	44	73	58	321
* Presunto falseamiento u ocultamiento de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) / Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)							

[87] Sobre el particular, el Comité advierte que los totales del Cuadro No. 2 anterior, correspondientes a “Expedientes remitidos al Ministerio Público”, por mostrar indicios de hechos punibles no corresponden a los totales de la columna correspondiente a “Expedientes e Informes remitidos al Ministerio Público” por las mismas razones que aparecen en Cuadro No.1, no quedando claro si es que en el último se tomaron en cuenta otros informes o expedientes adicionales a los del Cuadro No. 2.

[88] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité toma nota que el número de los expedientes remitidos al Ministerio Público registrados en el Cuadro No. 2, derivados de los hallazgos relacionados con las Declaraciones Juradas de Patrimonio, específicamente sobre presunto falseamiento u ocultamiento de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación o presunto enriquecimiento ilícito han ido disminuyendo a partir de 2009

(22) a 2013 (5), a pesar de que el número de declaraciones juradas recibidas ha ido en aumento, habiéndose recibido 136,513 declaraciones en 2009 y 386,934 en 2013.

[89] Al respecto, durante la visita *in situ* los representantes de la CGR manifestaron que el Sistema de Declaración Jurada de Patrimonio en Línea, si bien ha constituido un importante avance en el índice de cumplimiento para su presentación por parte de los funcionarios obligados tal como puede evidenciarse en la octava columna del Cuadro No. 1, no cuenta con un sistema de alarmas que permita identificar instantáneamente las discrepancias que pudieran darse entre una declaración y la otra y que la verificación de declaraciones patrimoniales se hace de manera aleatoria y por muestreo. Adicionalmente, informaron que no todos los funcionarios obligados se encuentran aún incorporados en el Sistema de Declaración Jurada de Patrimonio en Línea, y que se espera que el número de declaraciones aumente según como se vayan incorporando estos funcionarios.

[90] En ese sentido, el Comité considera que sería de utilidad para el Estado analizado considerar el fortalecimiento del Sistema de Declaración Jurada Patrimonial en Línea mediante la implementación de un sistema de alarmas que identifique en tiempo real discrepancias entre declaraciones juradas patrimoniales. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.15. del Capítulo II de este informe).

[91] En ese mismo orden de ideas, en relación con la séptima columna del Cuadro No. 1, relacionada con el número total de informes y expedientes remitidos al MP, el Comité advierte que ha habido también una disminución a partir de 2009 en que se remitieron 55 expedientes, habiéndose remitido 38 en 2013. Sobre el particular, el Comité estima que sería de utilidad para el Estado llevar a cabo un estudio a los fines de identificar las causas de esta disminución, con la finalidad de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver recomendación 1.4.16. del Capítulo II de este informe).

[92] Por otra parte, el Comité observa que no hay información sobre el curso de los casos una vez que son remitidos al Ministerio Público por mostrar indicios de hechos punibles. En efecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR pusieron de presente que, si bien es posible solicitar y obtener la información del MP, no existe un mecanismo de coordinación interinstitucional para dar seguimiento a estos casos entre la CGR, el MP y el Poder Judicial. El Comité considera que sería de gran utilidad que el Estado analizado considerara la posibilidad de implementar un mecanismo de esa naturaleza entre estos órganos de control, de manera que pueda facilitarse el seguimiento de estos casos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.17. del Capítulo II de este informe).

[93] En relación con la información que aparece en el Cuadro No. 1 respecto a las sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa impuestas a ciudadanos, de conformidad con el artículo 105 de la LOCGRSNCF, el Comité toma nota que la información muestra una marcada disminución en el año 2012, donde estas sanciones bajaron de 199 en 2011 a 22 en 2012, y si bien suben a 107 en 2013, la cantidad es aún inferior a los resultados de 2011. Al respecto, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado que considere la realización de un estudio para determinar las causas de ello, a los efectos de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.18. del Capítulo II de este informe).

[94] Asimismo, el Comité toma nota que el Estado analizado, durante la visita *in situ*, ofreció la siguiente información desagregada respecto de las referidas sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa, misma que se transcribe abajo en el Cuadro No. 3:

Cuadro No. 3

Ciudadanos con sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa (art. 105 LOCGRSNCF) años 2009-2013						
Sanción/Año	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ciudadanos suspendidos para el ejercicio de cargos públicos	18	36	51	15	6	126
Ciudadanos destituidos de cargos públicos	-	2	6	-	-	8
Ciudadanos inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos	148	112	142	7	101	510
TOTAL	166	150	199	22	107	644
Fuente: Informe de Gestión de la CGR						

[95] En relación con el cuadro estadístico anterior, el Comité toma nota que de conformidad con el artículo 105 de la LOCGRSNCF, si bien corresponde al Contralor o Contralora General acordar en atención a la entidad del ilícito cometido la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable, la ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta un máximo de quince años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes.

[96] Sobre el particular, el Comité observa que la CGR ha estado imponiendo las sanciones a que se refiere el citado artículo 105 de la LOCGRSNCF. Sin embargo, no es posible conocer el grado de implementación de estas sanciones por parte de las autoridades de las entidades en que ocurrieron los hechos y debido a ello el Comité estima que sería de utilidad para el Estado analizado considerar la compilación de estadísticas referentes al grado de implementación de estas sanciones por parte de los entes y organismos del Estado, y de encontrarse casos en que pudiera no haber sido implementadas, cuál es la causa de ello, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.19. del Capítulo II de este informe).

[97] Finalmente, en relación con medidas preventivas, el Comité advierte que la información contenida en la décima columna del Cuadro No. 1 muestra que se dictaron 12 medidas de esta naturaleza en 2010 y 8 en 2011, y ninguna en 2009, 2012 y 2013. Al respecto, el Comité considera que sería beneficioso para el Estado analizado efectuar un estudio sobre la causa de ello a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.20. del Capítulo II de este informe).

1.4. Conclusiones y recomendaciones

[98] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Contraloría General de la República (CGR), en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[99] **La República Bolivariana de Venezuela ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Contraloría General de la República (CGR), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[100] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 1.4.1. Considerar la creación de un procedimiento de selección para los titulares del Poder Ciudadano que tenga como base los principios de publicidad, equidad y eficiencia, para ser utilizado por la Asamblea Nacional en los todos los casos en que el Consejo Moral Republicano no convoque el Comité de Postulaciones dentro del plazo indicado por ley, de manera que no se vea en la necesidad de diseñar y utilizar procedimientos *ad hoc*, cada vez que se presenta esta contingencia (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe)..
- 1.4.2. Fortalecer a la CGR dotándola de los recursos humanos y presupuestarios que se requieran para asegurar el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.3. Concluir a la brevedad la reforma del Sistema de Clasificación de Cargos de la CGR, para su implementación (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.4. Implementar un sistema de evaluación continua del personal, para los propósitos de evaluar la eficacia del trabajo después del período inicial (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Fortalecer a la CGR dotándola, dentro de los recursos disponibles, de los recursos presupuestarios necesarios para la adquisición de equipos tecnológicos adecuados y sistemas de manejo de la información que permita culminar el desarrollo de los sistemas informáticos para la gestión de los procesos medulares de la organización; así como para desarrollar aquellos otros que considere necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, y para contratar y retener el personal especializado en la materia (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional cuando sea pertinente, a los fines de optimizar la fluidez y calidad de la información entre la CGR y los organismos de la administración pública nacional (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.7. Tomar las medidas pertinentes a los fines de fortalecer y estandarizar los mecanismos de control fiscal para todos los entes y organismos de la administración pública (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.8. Establecer plazos razonables para la ejecución de las auditorías (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).

- 1.4.9. Incluir en el Portal de Internet de la CGR un buzón para quejas, denuncias y sugerencias que sea de fácil acceso y uso para ciudadano común, y agregar la información sobre su utilización (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.10. Poner a disposición de la CGR una línea telefónica gratuita para que las personas que no tengan acceso a la Internet puedan denunciar los actos de corrupción que lleguen a su conocimiento o formular reclamaciones contra los presuntos autores de los actos de corrupción de los que ellas sean víctimas (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.11. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer a la CGR, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), con la cooperación técnica necesaria para garantizar el funcionamiento eficiente y eficaz de los entes que conforman el SNCF (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.12. Complementar las estadísticas relativas a las decisiones de la CGR relacionadas con la responsabilidad administrativa, de manera que pueda conocerse cuántas de ellas resultaron en absoluciones o sobreseimientos, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.13. Llevar a cabo un estudio sobre la causa de la disminución del volumen de actuaciones de control de la CGR en los últimos cinco años, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.14. Llevar información estadística que permita hacer una comparación entre los montos resultantes de sanciones pecuniarias impuestas por la CGR y los montos ingresados al erario público como resultado de las mismas, a los fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.15. Tomar las medidas necesarias a los fines de dotar al Sistema de Declaración Jurada Patrimonial en línea de un sistema de alarma que permita la identificación de posibles discrepancias en las declaraciones en tiempo real, a los fines de optimizar el proceso de verificación de las mismas (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.16. Llevar a cabo un estudio a los fines de identificar las causas de la disminución del número de informes expedientes que muestran indicios de hechos punibles remitidos al Ministerio Público, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.17. Implementar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre la CGR, el MP y el Poder Judicial, a los fines de dar seguimiento a los expedientes que han sido remitidos a la autoridad competente por mostrar indicios de hechos punibles y poder conocer cuáles fueron los resultados (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).

- 1.4.18. Llevar a cabo un estudio para conocer la causa de la disminución de sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa a partir de 2011, a los fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.19. Compilar estadísticas referentes al grado de implementación por parte de los entes y organismos del Estado de sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa impuestas por la CGR, y de encontrarse casos en que pudiera no haber sido implementadas, cuál es la causa de ello, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).
- 1.4.20. Llevar a cabo un estudio para conocer la causa por la cual no se han dictado medidas preventivas a partir de 2012, a los fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).

2. MINISTERIO PÚBLICO (MP)

2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.

[101] El Ministerio Público (MP) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[102] Por cuanto a la naturaleza del Ministerio Público (MP), el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), establece que el MP, junto con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), demás tribunales que determine la ley, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio, constituyen el Sistema de Justicia.

[103] Asimismo, el artículo 273 de la CRBV establece que el MP es un órgano del Poder Ciudadano, junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República; y que el Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el o la Fiscal General, y el Contralor o Contralora General de la República.

[104] De conformidad con el artículo 285 de la CRBV, son atribuciones del MP: “1. *Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República;* 2. *Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso;* 3. *Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración;* 4. *Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o seguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley;* 5. *Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones;* y 6. *Las demás que establezcan esta Constitución y la ley”.*

[105] Por otra parte, la Ley contra la Corrupción (LCC) dispone que, con respecto a delitos contra el patrimonio público, el Ministerio Público practicará de oficio las diligencias conducentes a la determinación de la responsabilidad civil de quienes aparecieran como copartícipes en el delito (Artículo 87 de la LCC).

[106] En relación con la autonomía del MP, el Artículo 273 de la CRBV dispone que el Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), dispone que *“El Ministerio Público es independiente de todos los Poderes Públicos, y goza de autonomía funcional, organizativa, presupuestaria, financiera y administrativa. En consecuencia, no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus atribuciones por ninguna autoridad”*.

[107] En lo que concierne a la coordinación interinstitucional, el artículo 136 de la CRBV, dispone que *“Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”*; mientras que el artículo 5 de la LOMP establece que *“Los Poderes Públicos, las entidades públicas y privadas y los ciudadanos y ciudadanas deberán colaborar con el Ministerio Público cuando sean requeridos para ello”*.

[108] Por lo que respecta a la manera en que se toman las decisiones, el artículo 6 de la LOMP dispone que *“El Ministerio Público es único e indivisible. Estará a cargo y bajo la conducción del Fiscal o la Fiscal General de la República o del que haga sus veces, quien ejercerá sus atribuciones de manera directa o a través de los funcionarios o funcionarias debidamente facultados o facultadas mediante delegación”*.

[109] Contra las decisiones internas adoptadas podrán interponerse los recursos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), que son el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, el recurso de revisión y el recurso contencioso-administrativo (artículos 85 a 99 de la LOPA).

[110] En lo que tiene que ver con la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, como se señaló anteriormente, el o la Fiscal General hace parte del Consejo Moral Republicano que ejerce el Poder Ciudadano (artículo 273 de la CRBV), y a su vez hace parte del Sistema Judicial (artículo 253 de la CRBV).

[111] En ese sentido, el artículo 284 de la CRBV dispone que *“Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal o la Fiscal General de la República será designado o designada para un período de siete años”*.

[112] Lo anterior quiere decir que para ser Fiscal General de la República se requiere: *“1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad. 2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. 3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. 4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley”* (artículo 263 de la CRBV).

[113] Por otra parte, el nombramiento de los miembros del Poder Ciudadano y por ende el o la Fiscal General de la República, se rige por lo dispuesto en el artículo 279 de la CRBV. Este artículo dispone que el Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; tras lo cual se convoca a un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta última, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

[114] En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente.

[115] La instancia competente para exigir al o la Fiscal General responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo será la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (Artículos 276 y 279 de la CRBV).

[116] En lo que corresponde a la manera en que son previstos sus recursos humanos, el artículo 93 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), dispone que *“Se crea la carrera del funcionario o funcionaria del Ministerio Público, cuyas normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión, estabilidad y retiro, se regirán por las disposiciones de la presente Ley y del Estatuto de Personal del Ministerio Público”*.

[117] Asimismo, el artículo 94 de la misma LOMP dispone que *“Para ingresar a la carrera se requiere aprobar un concurso público de credenciales y de oposición”* y que *“El Fiscal o la Fiscal General de la República, mediante resolución, establecerá las bases y requisitos del concurso, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”*.

[118] En ese mismo sentido, el artículo 99 de la LOMP dispone que *“El Fiscal o la Fiscal General de la República convocará a un concurso público de credenciales y de oposición para la provisión de los cargos de fiscales del Ministerio Público y sus suplentes ...”*

[119] Al respecto, el Estatuto de Personal del Ministerio Público (EPMP) regula todos los aspectos concernientes al régimen laboral, aplicables a los fiscales, procuradores de menores, funcionarios y empleados del Ministerio Público, quedando excluido del ámbito de aplicación del presente Estatuto, el personal obrero al servicio del Ministerio Público, el cual se regirá por las disposiciones previstas en la correspondiente contratación colectiva de trabajo (artículo 1º del EPMP).

[120] Por otra parte, el EPMP dispone en su artículo 3 que *“Son funcionarios o empleados de carrera, quienes ingresen al servicio del Ministerio Público mediante nombramiento, superen satisfactoriamente el periodo de prueba establecido en el Artículo 8º y desempeñen funciones de carácter permanente”* y que *“Se consideran cargos de libre nombramiento y remoción aquellos que sean determinados como tales en el nombramiento del funcionario o empleado, o los que así sean considerados por resolución que al efecto dicte el Fiscal General de la República. Entre otros, se consideran cargos de libre nombramiento y remoción por parte del Fiscal General de la República, excluidos de la aplicación del régimen de carrera, los siguientes: los Directores del Despacho del Fiscal General de la República, Sub-Directores, Coordinadores, Jefes de División,*

Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Auditores, Registradores de Bienes y materias, Almacenistas, Supervisores de Servicios Generales, Supervisores de Servicios de Reproducción, Operadores de Máquinas de reproducción, Comunicadores Sociales, funcionarios y empleados que presten servicios relacionados con la seguridad del Fiscal General de la República y de las dependencias del Ministerio Público”.

[121] Igualmente, el artículo 4 del EPMP dispone que la finalidad de la carrera del MP es asegurar la estabilidad de los fiscales, funcionarios y empleados de la Institución, regular las condiciones para el ingreso, permanencia y cese en el ejercicio de sus cargos y establecer las sanciones y el procedimiento a seguirse para imponerlas.

[122] El artículo 7 del EPMP dispone que cuando el Fiscal General de la República lo considere pertinente, la provisión de los cargos profesionales podrá hacerse mediante evaluación de credenciales a concurso de oposición, pero que la designación para el ejercicio de los cargos del Fiscal Superior del Ministerio Público, Fiscales del Ministerio Público y Procuradores de Menores, deberá ser necesariamente producto de concurso de oposición, de conformidad con las regulaciones contenidas en la LOMP y el mismo EPMP.

[123] En ese sentido, durante la visita *in situ*, los representantes del MP manifestaron que para poder postularse para los concursos para fiscales, los candidatos deberán haber completado el programa formación para el ingreso a la carrera fiscal a través de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, que tiene una duración de dos años.

[124] Los requisitos de elegibilidad para los fiscales se encuentran previstos en los artículos 9 a 16 del EPMP, mientras que el artículo 87 de la LOMP dispone que *“Los cargos de los funcionarios o funcionarias del Ministerio Público son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, profesión o actividad pública o privada, excepto las académicas, accidentales, asistenciales o docentes...”*.

[125] En lo concerniente a la responsabilidad de los funcionarios del MP ésta se encuentra prevista en el Título VIII de la LOMP, denominado “De las Sanciones Administrativas y Disciplinarias”, el cual desarrolla en el artículo 117 las causales por las cuales los funcionarios del Ministerio Público, previo el debido proceso, podrán ser sancionados disciplinariamente por el o la Fiscal General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad por los delitos o faltas en que incurran.

[126] Igualmente el EPMP, en su Capítulo II, *“Del Régimen Disciplinario”*, contempla todo lo concerniente a las sanciones impuestas por el MP (artículos 108-132). Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes del MP informaron que el órgano encargado de establecer la responsabilidad disciplinaria de los Fiscales, Abogados y demás profesionales del MP denunciados y generar los correctivos de las sanciones pertinentes es la Dirección de Inspección y Disciplina. Por lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria del personal administrativo del MP, el órgano encargado de ello es la Coordinación de Asuntos Laborales y Funcionariales.

[127] En lo que tiene que ver con la existencia de manuales u otros documentos en los que se describen las funciones del personal a su servicio, durante la visita *in situ*, los representantes del MP informaron que la Institución cuenta con un Manual de clasificación y descripción de cargos y con su correspondiente escala de sueldos. Adicionalmente, tanto en la respuesta al cuestionario como en la visita *in situ*, el Estado analizado informó que se imparte capacitación periódica al personal del MP en relación con sus funciones a través de la Escuela Nacional de Fiscales, que

incluye cursos, talleres, jornadas y foros discriminados en las distintas tareas de competencia de la Institución²³.

[128] El MP también cuenta con procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, tales como el Manual de Organización de la Oficina del Fiscal del MP, el Manual de Actuación del Fiscal del MP en el Proceso Penal y el Manual único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas²⁴, entre otros.

[129] En relación con las acciones de fortalecimiento institucional o mejoramiento de la calidad implementadas, el Estado analizado en su respuesta indica que han desarrollado planes destinados a atacar el retardo procesal tales como la creación de salas de flagrancia, fiscalías de juicio; programas de descongestionamiento a través de la creación de Unidades de Depuración Inmediata de Casos hasta el año 2011; sistemas de Guardias en comisarías y órganos policiales y la creación de Fiscalías Municipales²⁵.

[130] Asimismo, en cuanto a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, el Estado analizado en su respuesta informa que “Plan Estratégico 2008-2014” estableció directrices y líneas estratégicas destinadas a la reorganización estructural y funcional, revisión y automatización de procesos administrativos, instalación de tecnología avanzada orientada a una plataforma única a nivel nacional, y pautó la concreción de acciones tales como: la dotación de recursos tecnológicos a escala nacional; interconexión de las sedes del Ministerio Público en todo el territorio nacional; inducción al personal sobre el alcance y normativa de la plataforma tecnológica; implantación del Sistema de Gestión Institucional bajo una plataforma tecnológica única, y diseño de múltiples sistemas para la agilización de procedimientos²⁶.

[131] En lo que tiene que ver con la manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones, se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones, y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos, el Estado analizado en su respuesta informa que esto se lleva a cabo a través de varios medios, entre los cuales se cuenta las Oficinas de Atención al Ciudadano, las Unidades de Atención a la Víctima, las Unidades de Depuración Inmediata de Casos (UDIC) y la Coordinación de Gestión Social, el servicio de “Atención en línea 0800- FISCA -00”, y el portal de Internet del MP²⁷.

[132] Finalmente, respecto a la manera en que se garantizan los recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento del MP, la CRBV dispone en su artículo 273 que “*El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable*”, y el Ministerio Público es un órgano del Poder Ciudadano. Asimismo, el Estado analizado en su respuesta informa que “*los recursos presupuestarios se solicitan mediante la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, el Plan Operativo Anual y la distribución de los recursos presupuestarios que forman parte del Proyecto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal, ello en función del Plan Estratégico 2008-2014 del Ministerio Público*”²⁸.

²³ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, p. 34.

²⁴ *Ídem*, pp. 34-35.

²⁵ *Ídem*, pp. 35.

²⁶ *Ídem*.

²⁷ *Ídem*, pp.35-37.

²⁸ *Ídem*, pp. 38-39.

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[133] El Ministerio Público (MP) tiene un conjunto de disposiciones y/u otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1. de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[134] En primer lugar, en lo que se refiere al nombramiento del o la Fiscal General, el Comité observa que, como ha quedado registrado en la sección de existencia del marco jurídico anterior, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 279, prevé un proceso para su selección a través de un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad, quien seleccionará una terna mediante proceso público para la consideración de la Asamblea Nacional.

[135] Por otra parte, el Comité toma nota de que este mismo artículo de la CRBV también prevé la posibilidad de que no se convoque el citado Comité de Evaluación de Postulaciones, en cuyo caso la Asamblea Nacional procederá directamente a la designación del o la titular de la CGR, obviando el proceso público de selección de la terna de candidatos.

[136] En ese sentido, el Comité observa que la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (LOPC), regula el artículo 279 y que el procedimiento para conformar el Comité de Evaluación de Postulaciones se encuentra contemplado en sus artículos 23 a 27. Sin embargo, el Comité advierte que la LOPC no especifica cuáles serían las circunstancias bajo las cuales el Comité podría ser no convocado. Al respecto, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado que considerara tomar las medidas normativas correspondientes a los fines de prever cuáles podrían ser las circunstancias específicas por las cuales el Comité de Evaluación de Postulaciones podría no ser convocado, para lo cual ha formulado una recomendación en la sección correspondiente a la Contraloría General de la República (CGR), que es pertinente también para el MP debido a que se encuentra en la misma situación (ver recomendación 1.4.1. del Capítulo II de este informe).

[137] En segundo lugar, en lo correspondiente a la manera en que son provistos sus recursos humanos, el Comité toma nota de que la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), expedida en 2007, establece la carrera fiscal para todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público y establece el concurso público de credenciales como requisito *sine quan non* para acceder al servicio del MP.

[138] Sin embargo, el artículo 7 del Estatuto de Personal del MP (EPMP), expedido en 1999, dispone que si bien el concurso de público de oposición para la designación de los cargos de Fiscal Superior del Ministerio Público, Fiscales del Ministerio Público y Procuradores de Menores es obligatorio, en el caso de los cargos profesionales del MP estos concursos se llevarán a cabo cuando el o la Fiscal General lo considere pertinente. Adicionalmente, no se hace ninguna mención al requisito de acceder al servicio del MP mediante concurso para los funcionarios administrativos.

[139] Sobre el particular, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del MP pusieron de presente que esta inconsistencia se debe a que la LOMP fue expedida en 2007, mientras que el EPMP data de 1999 y no ha sido actualizado y que actualmente la regla aplicable es llevar a cabo los concursos públicos de oposición para todo el personal que, una vez nombrado de esta manera, pasa a ser personal de carrera. Esto teniendo en cuenta que la LOMP tiene jerarquía jurídica sobre el EPMP.

[140] Sin perjuicio de las recomendaciones que se le formularon al Estado analizado durante la segunda ronda sobre la discrecionalidad del Fiscal General relativa a los concursos para los cargos profesionales del MP, cuyo seguimiento será analizado durante la quinta ronda, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado actualizar el EPMP, de manera que armonice con lo dispuesto en la LOMP. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.1. del Capítulo II de este informe).

[141] De la misma manera, el Comité toma nota de que el artículo 8 del EPMP establece que “*Se consideran cargos de libre nombramiento y remoción aquéllos que sean determinados como tales en el nombramiento del funcionario o empleado, o los que así sean considerados por resolución que al efecto dicte el Fiscal General de la República...*” y procede a dar una lista de algunos de los cargos considerados como de confianza. Al respecto, el Comité considera que esta disposición deja un margen muy amplio de discrecionalidad a el o a la Fiscal General para determinar cuáles serán los cargos de libre nombramiento y remoción. Sin perjuicio de las recomendaciones que se le formularon al Estado analizado respecto de este artículo durante la segunda ronda, que consistieron en revisar la lista de cargos de confianza y cuya implementación será objeto de análisis en la quinta ronda, el Comité estima que sería beneficioso que el Estado analizado considere la revisión de esta disposición de manera que la determinación de cuáles serán los cargos de libre nombramiento y remoción no quede a la total discreción del o la Fiscal General. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.2. del Capítulo II de este informe).

[142] Igualmente, durante la visita *in situ*, los representantes del MP pusieron de presente que si bien la LOMP había sido publicada desde 2007, estableciendo los concursos como requisito indispensable para acceder al servicio del MP, estos concursos no se estaban llevando a cabo. Al respecto, agregaron que a partir de 2011 se comenzaron a llevar a cabo los concursos y que como resultado de ello ya se contaba con Fiscales de carrera.

[143] Al respecto, el Comité toma nota de que si bien ya se han comenzado a llevar a cabo los concursos para el ingreso a la carrera fiscal, los representantes del MP manifestaron que desde la expedición de la LOMP en 2007 hasta el momento, solamente han ingresado 4 fiscales a través de este proceso. Por otra parte, el Comité advierte que el informe anual del MP correspondiente a 2013 muestra que hubo un ingreso de 157 fiscales provisorios y auxiliares al servicio del MP²⁹ solamente en ese año, los que fueron reclutados a través de un método diferente al concurso público de oposición de la referencia y no accedieron a la carrera fiscal. Durante la visita *in situ*, los representantes del MP manifestaron que tienen entre sus planes llevar a cabo un concurso público de oposición más amplio a los fines de contar con un mayor número de fiscales de carrera.

[144] Al respecto, el Comité estima que el Estado analizado podría considerar fortalecer al Ministerio Público mediante la realización de concursos públicos de oposición para entrar al servicio del MP a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la LOMP y que este órgano de control pueda contar con los fiscales y otro personal de carrera necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.3. del Capítulo II de este informe).

[145] En tercer lugar, el Comité observa que durante la visita *in situ*, los representantes del MP informaron que uno de los requisitos para poder postular a los concursos públicos de oposición para los cargos de fiscales es el haber completado el programa formación para el ingreso a la

²⁹ Ver Informe Anual 2013 del MP en http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=017b714e-2c2c-4f03-9de6-0e73c72840bc&groupId=10136

carrera fiscal a través de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, que tiene una duración de dos años, a tiempo parcial. Esto mismo también fue puesto de relieve en la respuesta al cuestionario³⁰. Sin embargo, el Comité advierte que este requisito no se encuentra estipulado en la LOMP. Consecuentemente, el Comité estima que sería útil para el Estado analizado considerar tomar las medidas legislativas necesarias a los fines de incluir en la normativa de rango legal el requisito de la compleción del programa de formación para el ingreso a la carrera fiscal para postular a los concursos de selección para fiscales. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.4. del Capítulo II de este informe).

[146] En cuarto lugar, el Comité advierte que la LOMP prevé la existencia de fiscales especializados, tales como Fiscales del Ministerio Público de Proceso; Fiscales del Ministerio Público en el Sistema de Protección del Niño, Niña, Adolescente y la Familia; y Fiscales del Ministerio Público en Defensa Ambiental, entre otros. Sin embargo, no contempla la existencia de Fiscales del Ministerio Público en Materia Anticorrupción, a pesar de que el MP cuenta con una Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público³¹. Al respecto, el Comité estima que sería de utilidad para el Estado analizado considerar incluir dentro de la LOMP la figura de los Fiscales del Ministerio Público en Materia Anticorrupción, a los fines de fortalecer el trabajo que está llevando a cabo en esta materia. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.5. del Capítulo II de este informe).

[147] En quinto lugar, en relación con los mecanismos de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del MP y con el desempeño del personal a su servicio, el Comité toma nota que el Portal de Internet del MP, en la sección de atención al público contiene información sobre dónde puede la ciudadanía presentar sus denuncias³². Sin embargo, la opción electrónica de un buzón de quejas, denuncias y sugerencias no se encuentra entre las mencionadas, ni tampoco aparece en la página Web. Al respecto, el Comité estima que sería de utilidad que el Estado analizado considerara incluir un buzón para quejas y denuncias de fácil acceso para el usuario común en la página Web del MP, e incluir la información sobre su uso y propósito. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.6. del Capítulo II de este informe).

[148] En sexto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del MP pusieron de presente que cuentan con una propuesta de creación de la Fiscalía de Respuesta Inmediata contra la Corrupción (FRICC)³³, cuyo objetivo es la *“atención inmediata a las denuncias formuladas por ciudadanos que son objeto de inducción o constreñimiento por parte de funcionarios públicos, principalmente funcionarios policiales, con ocasión a sus funciones, exigiendo o haciéndose prometer cantidades de dinero u otras dádivas indebidas, para no perjudicarlos o involucrarlos en procesos penales y/o administrativos o de cualquier otra índole”*. Asimismo, agregaron que quisieran implementar estas fiscalías por región y no solamente en el área metropolitana de Caracas.

[149] Sobre el particular, los representantes del MP indicaron que si bien este proyecto ha sido aprobado, la FRICC aún no ha sido creada. Al respecto, el Comité considera importante que el Estado analizado considere apoyar al MP con los recursos humanos y presupuestarios que se

³⁰ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, p. 33.

³¹ La Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público es la dependencia que supervisa la actuación de los fiscales en casos de delitos contra el patrimonio público, bancos, seguros y mercado de capitales. También le compete el ejercicio de las acciones civiles para el resarcimiento del daño patrimonial. <http://www.mp.gob.ve/web/guest/165>

³² Ver <http://www.mp.gob.ve/web/guest/138>

³³ Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_pre_con_def.pdf

requieran, dentro de los recursos disponibles, a los fines de que la FRICC pueda entrar plenamente en funciones a la brevedad³⁴ y que pueda expandirse en el ámbito regional. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.7. del Capítulo II de este informe).

[150] En séptimo lugar, el Estado analizado en su respuesta pone de presente entre de sus dificultades, *“la desorganización de la información, la complejidad y lentitud en los procedimientos administrativos existentes y destinados al suministro de los recursos dirigidos a cumplir con dichas tareas, deficiente calidad y utilidad de datos suministrados al Ministerio Público, la vulnerabilidad de los sistemas de control anticorrupción que permiten la alteración de la información...”*³⁵. Sobre el particular, los representantes del MP informaron que para atender este problema se hallan en proceso de implementación varias medidas, entre las cuales se encuentra un sistema de Registro Único de Casos desde el 1º de enero del año 2013, pero su uso es exclusivo en las distintas dependencias del Ministerio Público en todo el territorio nacional y que se encuentran realizando convenios interinstitucionales para que el sistema incluya a todos los órganos receptores de denuncias.

[151] Al respecto, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado considerar el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional entre el MP y los órganos de investigación penal y auxiliares, a los fines de asegurar que todos ellos se encuentren incorporados en el sistema de número único de denuncias. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.8. del Capítulo II de este informe).

[152] En octavo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ* los representantes del MP pusieron de presente entre sus dificultades la falta de recursos presupuestarios suficientes para la creación de divisiones de experticias contables y financieras dentro del MP, así como para aumentar el número de fiscalías tanto en el área metropolitana como en el campo a los fines de descentralizar los servicios, aumentar la capacidad del MP y contribuir a la agilización de procedimientos.

[153] En efecto, entre los esfuerzos del MP para fortalecer la investigación penal, incluidos los delitos de corrupción, se encuentra la creación de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal en mayo de 2014, para lo cual se contrataron 7 expertos contables, 8 expertos de avalúos y un investigador criminalista, asignados a la División de Análisis Financiero, Contable y Avalúos³⁶. No obstante lo anterior, el Comité toma nota de que los representantes del MP pusieron de presente que a pesar de este avance tienen que apoyarse en gran parte en la colaboración de los órganos de investigación penal del Estado, que les hace falta contar con un mayor número de expertos propios con presencia en todo el país, y que una de sus metas es la

³⁴ El Estado analizado, en su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar, puso de presente lo siguiente: *“Venezuela desea informar al Comité que según Resolución N° 1648 de fecha 16 de octubre de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 del 24 de octubre de 2014, se creó la Fiscalía 93ª del Ministerio Público en el ámbito Nacional con competencia en materia Contra la Corrupción, (de respuesta inmediata) que se encuentra plenamente en funcionamiento desde el 11 de noviembre de 2014”*.

³⁵ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, p. 47.

³⁶ Al momento de la visita *in situ*, la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, creada en mayo de 2014, contaba con 7 expertos contables, 8 expertos de avalúos y 1 investigador criminalista, habiéndoseles asignado 91 casos en materia contra la corrupción. Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_pre_con_def.pdf

creación de una Megafiscalía³⁷ con una estructura más fortalecida y personal propio especializado para que el proceso de investigación sea más rápido y eficiente.

[154] Sobre el particular, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado considerar el fortalecimiento del MP, dotándole de los recursos humanos y presupuestarios necesarios, dentro de los recursos disponibles, para el cabal cumplimiento de sus funciones, y para contribuir a la descentralización del sistema y a la agilización de los procesos de investigación. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.9. del Capítulo II de este informe).

[155] Finalmente, en lo que tiene que ver con las necesidades de cooperación técnica, durante la visita *in situ*, los representantes del MP manifestaron que les sería de gran utilidad el intercambio de experiencias con otros Ministerios Públicos sobre temas comunes anticorrupción. Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por el MP, de la necesidad de que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Ministerios Públicos de los Estados Parte, así como a las organizaciones de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.10. del Capítulo II de este informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[156] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados del Ministerio Público (MP), de la cual se destaca la siguiente:

[157] Tanto en su respuesta al cuestionario³⁸ como en la visita *in situ*, el Estado analizado presentó información relativa a sus funciones de prevención de la corrupción, de la cual se destaca la siguiente:

[158] El Estado analizado en su respuesta lista una serie de acciones preventivas, partiendo del año 2007 a 2012, entre las que se encuentran la creación de comisiones de enlace con distintos organismos de la administración pública para lograr que las instituciones comprometidas se auxiliasen mutuamente (2007); la realización del seminario regional “*La Lucha contra la Corrupción*” coauspiciado por la Embajada de Francia (2008); diversos cursos y talleres sobre prevención de la corrupción dirigido a funcionarios públicos, entre ellos a los funcionarios de la Guardia Nacional sobre los tipos penales contemplados en la Ley Contra la Corrupción (LCC) y programas de preparación académica relevantes al tema para los funcionarios que van a ingresar a la Policía Nacional (2009); capacitación anticorrupción dirigida a los delegados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel); capacitación a funcionarios de la Contraloría del Municipio de Sucre y miembros de consejos comunales de dicho municipio sobre los actos tipificados en la LCC y las irregularidades en que pueden incurrir los miembros de los Consejos Comunales en esta materia; capacitación a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana sobre “Prevención del Delito y la Corrupción” (2011); y talleres a funcionarios adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, así como a

³⁷ En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar, el Estado analizado puso de presente lo siguiente: “*Venezuela desea informar al Comité que según Resolución N° 1647 de fecha 16 de octubre de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 del 24 de octubre de 2014, se creó la Fiscalía 67° en el ámbito Nacional con competencia en materia Contra la Corrupción, (Megafiscalía)...*”

³⁸ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 42-43.

integrantes de las diversas instancias del Poder Comunal, a los fines de evitar posibles desviaciones de recursos otorgados por el estado venezolano (2012).

[159] Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes del MP proporcionaron la siguiente información estadística con respecto a las actuaciones del Equipo Técnico contra la Corrupción, según tipo de actuación:

Cuadro No. 1

Actuaciones del Equipo Técnico contra la Corrupción según tipo de actuación Años 2013 y 2014	
Tipo de actuación	Cantidad
Asesorías presenciales	2405
Reportes técnicos generados	211
Apoyo al Plan de Descongestionamiento de Casos	199
Resultados de Experticias analizadas	108
Entrevistas apoyadas	41
Asesorías telefónicas	25
Participantes como consultores técnicos en juicios	13
Asesorías a los expertos	1

[160] Al respecto, El Comité estima que la anterior información sirve para demostrar que en el MP se han desarrollado acciones de prevención de actos de corrupción, en cumplimiento de las funciones que les corresponden en esta materia.

[161] Sin perjuicio de ello, el Comité también toma nota que esta información no está completa y que por ejemplo, el Cuadro No. 1 anterior únicamente cubre los años 2013 a 2014 y no está desagregada por año; mientras que la información relativa a capacitación y sensibilización destacada en el párrafo anterior se remonta únicamente hasta 2012 y no incluye información sobre 2010.

[162] Por otra parte, el Estado analizado en su respuesta indica que la Dirección de Inspección y Disciplina también cumple funciones de orientación y de prevención para lo cual cuenta con instrumentos importantes como son: “i) Las observaciones y exhortos que buscan fundamentalmente hacer llamados de atención o advertencias al funcionario para que enmiende o corrija su conducta, adecuándola a la normativa vigente; ii) Las recomendaciones que se le hacen al funcionario como producto de una inspección ordinaria cuando se detecta alguna irregularidad menor, orientándole sobre la normativa interna con la finalidad de que se hagan los correctivos necesarios; iii) Las circulares e instructivos que buscan regular procedimientos internos o emitir lineamientos u orientaciones sobre materias específicas con la finalidad de unificar criterios de actuación institucional; iv) La evacuación de consultas en materia

*disciplinaria; y v) Las presentaciones, informes y charlas difundiendo la labor de la Dirección.*³⁹

[163] Al respecto, el Comité advierte que el Estado analizado no ofreció información estadística en cuanto a estas tareas de prevención ni en la respuesta al cuestionario ni durante la visita *in situ*. Sobre el particular, el Comité estima que sería importante que el MP considere completar sus estadísticas, desagregadas por año, sobre las actividades de prevención de la corrupción que lleva a cabo, incluida la relativa a las actividades preventivas de la Dirección de Inspección y Disciplina, de manera que esta información pueda ser utilizada para identificar retos y recomendar, si corresponde, medidas correctivas. En atención a ello, formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.11. del Capítulo II de este informe).

[164] Por otra parte, el Estado analizado, tanto en su respuesta al cuestionario como durante en la visita *in situ*, presentó siguiente información estadística con respecto a los resultados de sus funciones de detección, investigación y sanción de actos de corrupción, de la cual se destaca la siguiente:

Cuadro No. 2

Relación de Actos Conclusivos en Materia de Corrupción desde el año 2008 hasta el año 2013						
Acto Conclusivo	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Acusaciones	356	594	596	1184	1327	1115
Sobreseimientos	1081	1820	2443	4103	5502	5549
Archivos Fiscales	203	176	171	57	156	136
Total	1640	2590	3210	5344	6985	6800

[165] En primer lugar, en relación con el cuadro estadístico No. 2 anterior, el Comité toma nota que esta información muestra un alto número de sobreseimientos en relación con el número de acusaciones, que se aprecia ha ido aumentando año con año. Sobre el particular, el Comité considera que sería de utilidad para el Estado analizado llevar a cabo un estudio sobre la causa del alto número de sobreseimientos de los casos atendidos por el MP, a los fines de identificar retos y de ser necesario adoptar medidas correctivas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.12 del Capítulo II de este informe).

Cuadro No. 3

Relación Estadística Año 2014 Dirección contra la Corrupción	
ITEMS	DEL 01 DE ENERO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014

³⁹ Respuesta de Venezuela al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 44.

PERSONAS APREHENDIDAS	1058
PERSONAS IMPUTADAS	646
PERSONAS ACUSADAS	926
PERSONAS CONDENADAS POR ADMISIÓN DE HECHOS	547
PERSONAS CONDENADAS EN JUICIO ORAL Y PÚBLICO	41
CANTIDAD DE ALLANAMIENTOS	116

[166] En relación con el cuadro No. 3 anterior, el Comité toma nota de que solamente contiene información relativa al año 2014, y por lo tanto no es posible hacer un análisis integral con base a ella.

[167] Sin perjuicio de las observaciones que se han formulado en los párrafos anteriores, el Comité toma nota que con respecto a las funciones de investigación de actos de corrupción del MP, la información suministrada por el Estado analizado no permite conocer el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años; cuántas se encuentran aún en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; ni cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión. Al respecto, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado considerar llevar información estadística sobre el tema que contenga esta información, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver recomendación 2.4.13. del Capítulo II de este informe).

[168] Por otra parte, en relación con los expedientes remitidos al MP por parte de la Contraloría General de la República (CGR) por mostrar indicios de hechos punibles, o aquéllos remitidos por el MP a la autoridad judicial como resultado de sus investigaciones, el Comité observa que no existe un mecanismo de coordinación interinstitucional para dar seguimiento a estos casos entre la CGR, el MP y el Poder Judicial y que de esa manera estos órganos de control puedan contar con información sobre el destino final de estas causas. El Comité considera que sería de gran utilidad que el Estado analizado considerara la posibilidad de implementar un mecanismo de esa naturaleza entre estos órganos de control. Para ello, el Comité ha formulado una recomendación en la sección correspondiente a la CGR, que es pertinente también para el MP (ver recomendación 1.4.16. del Capítulo II de este informe).

[169] Finalmente, en relación con las funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, el Comité toma nota de que el MP cuenta con la Dirección de Inspección y Disciplina, la cual tiene entre sus funciones la de instruir los procedimientos que sean procedentes con miras a hacer valer la potestad disciplinaria que ejerce el o la Fiscal General de la República sobre los fiscales y demás funcionarios del MP, de conformidad con lo previsto en el artículo 25, numeral 16 y en el artículo 117 de la LOMP. Sin embargo, el Comité observa que el Estado analizado no suministró información estadística, ni en la respuesta al cuestionario ni en la visita *in situ*, que permita conocer el número total de casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en

imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos; ni el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en cada uno de los últimos cinco años. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.14. del Capítulo II de este informe).

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[170] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Ministerio Público (MP), en los acápite anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[171] La República Bolivariana de Venezuela ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al Ministerio Público (MP), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe.

[172] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Considerar la actualización del Estatuto de Personal del Ministerio Público (EPMP), expedido en 1999, de manera que armonice con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), expedido en 2007, sobre todo en el tema de los concursos públicos de oposición como requisito fundamental para entrar al servicio del Ministerio Público (MP) (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Considerar la revisión del artículo 8 del EPMP de manera que la determinación de cuáles serán los cargos de libre nombramiento no quede a la total discreción de el o la Fiscal General (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.3. Fortalecer al Ministerio Público mediante la realización de los concursos públicos de oposición para entrar al servicio del MP a los fines de dar cumplimiento a la LOMP y que este órgano de control pueda contar con los fiscales y demás personal de carrera necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.4. Considerar tomar las medidas legislativas pertinentes a los fines de incluir dentro de la normativa de rango legal el requisito de la compleción del programa de formación para el ingreso a la carrera fiscal para postular a los concursos para fiscales (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.5. Considerar tomar las medidas legislativas que se requieran a los fines de incluir en la LOMP la figura de los Fiscales del Ministerio Público en Materia Anticorrupción (ver sección 2.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.6. Incluir en el Portal de Internet del MP un buzón para quejas, denuncias y sugerencias que sea de fácil acceso y uso para ciudadano común, y agregar la información sobre su utilización (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).

- 2.4.7. Apoyar al MP con los recursos humanos y presupuestarios que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los fines de fortalecer la Fiscalía de Respuesta Inmediata contra la Corrupción (FRICC) y de que pueda expandirse en el ámbito regional en el país (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.8. Fortalecer los mecanismos de cooperación interinstitucional entre el MP y los órganos de investigación penal y auxiliares, asegurando la incorporación de estos últimos en su totalidad en el sistema único de control de casos del MP (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.9. Fortalecer al MP dotándole de los recursos humanos y presupuestarios necesarios, dentro de los recursos disponibles, para el cabal cumplimiento de sus funciones, así como para contribuir a la descentralización del sistema y a la agilización de los procesos de investigación (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.10. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer al MP la cooperación técnica necesaria para facilitar el intercambio de experiencias entre este órgano de control con los Ministerios Públicos de otros Estados Parte del MESICIC, sobre temas comunes anticorrupción (ver sección 1.2. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.11. Completar sus estadísticas, desagregadas por año, sobre las actividades de prevención de la corrupción que el MP lleva a cabo, incluida la relativa a las actividades preventivas de la Dirección de Inspección y Disciplina, de manera que esta información pueda ser utilizada para identificar retos y recomendar, si corresponde, medidas correctivas (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.12. Llevar a cabo un estudio sobre la causa del alto del número de sobreseimientos de los casos atendidos por el MP, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.13. Compilar información estadística relativa a las funciones de investigación de actos de corrupción del MP que permita conocer el número total de investigaciones iniciadas; cuántas se encuentran aún en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; ni cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).
- 2.4.14. Compilar información estadística relativa a las funciones de sanción disciplinaria y administrativa del MP, de manera que permita conocer el número total de casos investigados que se encuentran listos para su decisión; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos

establecidos; ni el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 1.3. del Capítulo II de este informe).

3. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)

3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.

[173] El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[174] En relación con la naturaleza, objetivos y funciones del TSJ, el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que “...*Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias*”, y que “...*El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio*”.

[175] Asimismo, el artículo 4 de la Ley del Sistema de Justicia (LSJ) dispone que “*El Estado, a través del Sistema de Justicia, garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y reposiciones inútiles, preservándolas como un fin y un valor del Estado que no se sacrificará en su desarrollo por la omisión de formalismos innecesarios*”.

[176] Asimismo, el artículo 254 de la CRBV establece que “*El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional...*”

[177] Por otra parte, el artículo 1º de la Ley Orgánica del TSJ (LOTSJ) establece que “...*El Tribunal Supremo de Justicia constituye parte del Sistema de Justicia, es el máximo órgano y rector del Poder Judicial, y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. En su carácter de rector del Poder Judicial y su máxima representación, le corresponde la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, incluyendo la elaboración y ejecución de su presupuesto, así como la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas, todo de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de Ética del Juez o Jueza Venezolanos y la presente Ley, atribuciones que ejercerá a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura...*”

[178] En lo que tiene que ver con su organización, el artículo 2 de la LOTSJ establece que “*El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto y funcionará en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, así como por la Sala Plena que estará integrada por los Magistrados o Magistradas de todas las Salas señaladas...*”

[179] Las atribuciones del TSJ se encuentran contempladas en el artículo 266 de la CRBV y son las siguientes: “1. *Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución.* 2. *Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces y, en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.* 3. *Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.* 4. *Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal.* 5. *Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.* 6. *Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley.* 7. *Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico.* 8. *Conocer del recurso de casación.* 9. *Las demás que establezca la ley.* La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5, en Sala Políticoadministrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley”.

[180] Por cuanto a los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia, el artículo 24 de la LOTSJ, en su numeral 3 dispone que entre las competencias de la Sala Plena del TSJ se encuentra la de “*Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre los tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos*”.

[181] Al respecto, el Estado analizado en su respuesta al cuestionario informa que atendiendo a la referida disposición “*mediante Resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 2013-0010 del 13 de junio de 2013, publicada en Gaceta Judicial N° 29 del 4 de julio de 2013, se crearon dos (2) Salas Especiales para el conocimiento y decisión de expedientes que sean remitidos para la correspondiente regulación de competencias o resolución de conflictos de esta naturaleza, que hayan surgido entre Tribunales que no tienen un superior común y que pertenecen a ámbitos de competencia distintos*”.⁴⁰

[182] En relación con la manera en que se adoptan las decisiones del TSJ, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que “*El tribunal Supremo de Justicia adopta sus decisiones, a través de sus tribunales ordinarios. Es solo luego de haber cumplido con una serie de requisitos y procedimientos que este máximo órgano interviene a través de sus salas, según la materia en cuestión.*”⁴¹

⁴⁰ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, p. 5.

⁴¹ *Ídem*, p. 7.

[183] Por otra parte, el artículo 3 de la LOTSJ establece que *“El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República; contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone en la presente Ley”*.

[184] Cabe agregar que las decisiones relativas a procesos disciplinarios judiciales sí son recurribles mediante recursos de apelación, amparo o revisión de sentencia según sea el caso.

[185] En lo que tiene que ver con la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, el artículo 264 de la CRBV dispone que: *“Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva. Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional.”*

[186] Por otra parte, el artículo 270 de la CRBV establece que *“El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria.”*

[187] Sobre el particular, el artículo 64 de la LOTSJ dispone que *“El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor de la Asamblea Nacional para la selección de los candidatos o candidatas a Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente asesorará a los Colegios Electorales Judiciales para la elección de los jueces o juezas de la competencia disciplinaria. Su sede estará en la Asamblea Nacional y sus gastos correrán a cargo de ese mismo órgano. El Comité de Postulaciones Judiciales dictará su reglamento interno de organización y funcionamiento⁴²”*.

[188] Asimismo, para ser magistrado del TSJ, se requiere *“1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad. 2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. 3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. 4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley.”* (Artículo 263 de la CRBV).

[189] Por cuanto a la autoridad competente para exigir a los magistrados del TSJ responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo, el artículo 265 de la CRBV dispone que *“Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o*

⁴² El Reglamento del Comité de Postulaciones Judiciales fue publicado en Gaceta Oficial No. 40.535, el 6 de noviembre de 2014, y fue remitido a la Secretaría Técnica el día 7 de noviembre de 2014.

interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.”

[190] En lo referente a la manera en que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, el artículo 255 de la CRBV establece que *“El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o removidas o suspendidos o suspendidas de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley...”*

[191] Por otra parte, el artículo 36 de la LOTSJ dispone que entre las atribuciones del TSJ se encuentra el nombrar y juramentar a los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas del Poder Judicial, cuya designación le atribuya la ley y recibir el juramento de aquéllos que deban prestarlo ante él; así como dictar las normas concernientes a los derechos y obligaciones de los empleados o empleadas a su servicio, y organizar el sistema de administración de dicho personal (párrafos 6 y 10 del artículo 36).

[192] Asimismo, el Estado analizado en su respuesta puso de presente que *“El Tribunal Supremo de Justicia es responsable de nombrar o juramentar a los jueces o juezas, quienes ingresan a la carrera judicial por concursos de oposición público, según el artículo 255 de la CRBV y el artículo 36 numeral 6 de la LOTSJ o son designados en condición de provisorios”*.⁴³

[193] La Ley de Carrera Judicial (LCJ) tiene por finalidad *“asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces y regular las condiciones para su ingreso, permanencia y terminación en el ejercicio de la Judicatura, así como determinar la responsabilidad disciplinaria en que incurran los jueces en el ejercicio de sus funciones”* (artículo 1º).

[194] Asimismo, el artículo 3 de la LCJ dispone que *“Los jueces gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser removidos o suspendidos en el ejercicio de sus funciones en los casos y mediante el procedimiento que determina esta Ley...”*

[195] Por otra parte, durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ informaron que también se cuenta con las Normas de Evaluación y Concurso de oposición para el Ingreso y Ascenso a la Carrera Judicial.

[196] Con respecto a los requisitos para acceder a los cargos del TSJ, el artículo 13 y el artículo 36 numeral 19 de la LOTSJ, prevén que los Secretarios o Secretarias deben ser abogados o abogadas, mayores de treinta años y haber ejercido la profesión o tener carrera dentro del Poder Judicial, por un mínimo de diez (10) años y corresponde al Tribunal Supremo de Justicia designar a quienes deban suplir a los Secretarios o Secretarias y Alguaciles, en caso de falta absoluta⁴⁴.

[197] El régimen de incompatibilidades se encuentra previsto en el artículo 39 de la LOTSJ que establece que los Magistrados o Magistradas podrán ejercer cargos académicos y docentes siempre y cuando no sea a tiempo completo o no resulten incompatibles con el ejercicio de sus funciones, y ser miembros de comisiones codificadoras, redactoras o revisoras de leyes, ordenanzas y reglamentos que, según las disposiciones que las rijan, no constituyan destinos

⁴³ Respuesta de Venezuela al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 8.

⁴⁴ Respuesta de Venezuela al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 9.

públicos remunerados. No podrán ser designados o designadas simultáneamente Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, quienes estén unidos entre sí por matrimonio, unión estable de hecho, adopción o parentesco en línea recta o en línea colateral, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En caso de que ocurriese este supuesto, la Asamblea Nacional revocará la última designación y procederá a una nueva selección⁴⁵.

[198] El régimen disciplinario para los magistrados y magistradas se encuentra contemplado en varias disposiciones de carácter constitucional y legal, a saber:

[199] El artículo 265 de la CRBV dispone que *“Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca”*.

[200] Asimismo, el artículo 267 de la CRBV dispone en su tercer párrafo que *“El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El Procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley.”*

[201] Por otra parte, el artículo 273 de la CRBV establece el Consejo Moral Republicano, y el 275 dispone que *“Los o las representantes del Consejo Moral Republicano formularán a las autoridades, funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Moral Republicano podrá imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano presentará un informe al órgano o dependencia al cual esté adscrito o adscrita el funcionario público o la funcionaria pública, para que esa instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley”*.

[202] En ese sentido, el artículo 62 de la LOTSJ establece las causales de remoción de los magistrados y magistradas del TSJ y de acuerdo al artículo 63 de la misma ley, corresponde al Consejo Moral Republicano la calificación de la falta y a la Asamblea Nacional resolver sobre la remoción de los magistrados, en seguimiento de lo establecido por los artículos 273 y 275 de la CRBV.

[203] Igualmente, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (LOPC), lista en sus seis apartados cuáles son las faltas graves de los Magistrados y Magistradas.

[204] En lo referente al régimen disciplinario aplicable a los funcionarios y obreros al servicio del TSJ, éste está regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de Carrera administrativa para los funcionarios del TSJ; y la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras.

[205] En relación con la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su servicio, el Estado analizado en su respuesta informa que cuentan con

⁴⁵ *Ídem*, p. 9.

el Manual descriptivo de Cargos del Tribunal Supremo de Justicia y otros manuales organizativos en los cuales se complementa la descripción, funciones y perfil de cada uno de los funcionarios⁴⁶.

[206] Por cuanto al tema de la capacitación periódica al personal en relación con sus funciones, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que esto se hace a través de la Escuela Nacional de la Magistratura, la cual constituye el centro de formación de los jueces, juezas de la República, así como de los demás servidores del Poder Judicial, conforme a las políticas dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia⁴⁷.

[207] Por otra parte, el TSJ cuenta con diversos procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, entre los cuales se encuentran una serie de manuales y reglamentos que se encuentran listados en el Anexo No. 1 de la respuesta al cuestionario⁴⁸, así como el sistema automático de gestión “Agenda Única,” *“creado por el Poder Judicial con el propósito de vincular a los actores del sistema de justicia que intervienen en los procesos penales, a los fines de centralizar e intercambiar la información relativa a las actuaciones procesales, generando seguridad jurídica y difusión de las funciones en el marco de las competencias asignadas. Además favoreciendo el control de la posible comisión de ilícitos de corrupción y la celeridad de los procesos”*.⁴⁹

[208] En lo que se refiere a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de la calidad implementados, el Estado analizado, tanto en su respuesta como durante la visita *in situ*, puso de presente que entre otras cosas se han *“implementado nuevos Tribunales en la República creados por la Sala Plena, con diversas competencias en cuanto a la materia, el grado y el territorio”*.⁵⁰

[209] En lo que tiene que ver con la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, el TSJ ha implementado una serie de herramientas entre las que se destacan las siguientes: El Sistema de Información Estadística del Poder Judicial; el Programa Agenda Única, que se había mencionado anteriormente; y la Plataforma Tecnológica para la práctica de videoconferencias, como medio para fortalecer la celeridad procesal; entre otros.

[210] Por lo que se refiere a la difusión de los objetivos y funciones del TSJ a la ciudadanía, y la orientación sobre cómo realizar gestiones ante el mismo, además de contar con una página de Internet, el TSJ cuenta con el Centro de Información Documental que entre otras cosas permite la consulta electrónica de causas y acceso a la Gaceta Judicial; asimismo, cuenta con una Oficina de Orientación al Ciudadano, y celebra “Encuentros del Sistema de Justicia con Consejos Comunales, Comunas y Movimientos Sociales”, entre otros.

[211] En relación con los mecanismos de control interno, el Estado analizado en su respuesta puso de presente que *“La Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia se encarga de realizar el examen del control posterior de las actividades administrativas y financieras de los órganos y dependencias que conforman el Poder Judicial venezolano, sin menoscabo, de la obligación que tiene cada uno de estos órganos y dependencias de realizar su propio control interno sobre sus funciones, organización, administración de su personal y*

⁴⁶ *Ídem*, p. 9.

⁴⁷ *Ídem*, pp. 10-11.

⁴⁸ Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_anexo_1-8.pdf

⁴⁹ Ver presentación del TSJ en el marco de la visita *in situ*, pp. 11

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf

⁵⁰ *Ídem*, pp. 33.

gestión administrativa.” La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del TSJ se rige por el Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia, expedido en abril de 2013.⁵¹

[212] Asimismo, en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que en agosto de 2010 entró en vigencia el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, que contempla el régimen disciplinario y sanciones para jueces y magistrados, que a la vez se implementó la Jurisdicción Disciplinaria Judicial como instancia del Poder Judicial, que se encarga de aplicar el referido código, y que los artículos 52 y 53 del citado Código prevé que la Oficina de Sustanciación será el órgano instructor del procedimiento disciplinario, el cual iniciará de oficio o por denuncia las investigaciones contra los jueces y juezas, y de considerarlo procedente lo remitirán al Tribunal Disciplinario Judicial.⁵²

[213] Por otra parte, en relación con el procedimiento disciplinario para los funcionarios del Poder Judicial, durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ manifestaron que el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que *“Las faltas de los secretarios, alguaciles y demás empleados de los tribunales serán sancionadas por el Juez Presidente del Circuito o el juez”, según sea el caso (LOPJ)*, que las causales de sanción se encuentran contempladas en los artículos 40-43 del Estatuto del Personal Judicial y que en diciembre de 2013 se adoptó el Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos.

[214] En lo que tiene que ver a los mecanismos de atención de reclamos, quejas o denuncias, el Estado analizado en su respuesta informa que la UAT cuenta con un mecanismo *“que permite a los interesados formular las denuncias, que pueden estar relacionadas con sus funciones propias o con las llevadas a cabo por los órganos sobre los cuales ejerce control, presentándolas mediante comunicación escrita y/o a través del formulario elaborado a tal fin, cuyo enlace se encuentra disponible en la Página Web del Tribunal Supremo de Justicia”*.⁵³

[215] Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ explicaron que el mecanismo de la referencia está de acuerdo con *“los lineamientos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y, se encuentra en el Manual de Organización, mediante el cual se ha creado una unidad especial, denominada Departamento de Auditorías Especiales, que entre otras funciones tiene la de gestionar las denuncias recibidas, sea de particulares, de funcionarios o servidores, tanto en la Institución como ajenos a ella, con ocasión a actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal relacionadas con la administración manejo o custodia de bienes o fondos públicos...”*.⁵⁴

[216] En ese sentido, informaron también que en la página de Internet del TSJ, en la sección denominada INFOSERVICIOS, se encuentra un vínculo a la sección “Auditoría Interna”, dentro de la cual se encuentra el acceso “Formulario de Denuncias”.⁵⁵

[217] Por otra parte, el Estado analizado en su respuesta puso de presente que *“En adición a los instrumentos jurídicos referidos, el artículo 22 numerales 14 y 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, consagra dentro de las atribuciones de su Presidente o Presidenta,*

⁵¹ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 18.

⁵² *Ídem*, pp. 18-19.

⁵³ *Ídem*, pp. 18.

⁵⁴ Ver presentación del TSJ durante la visita *in situ*, pp- 35-36.

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf

⁵⁵ *Ídem*, pp. 36.

*decidir sobre las quejas por demoras o cualesquiera otras faltas en el despacho de los asuntos e informar acerca de ellas a la Sala Plena, cuando así lo exija su gravedad, así como de las quejas que formulen las partes contra los funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas, o viceversa.*⁵⁶

[218] Sobre el particular, durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ manifestaron que *“Las quejas y denuncias recibidas por la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia son estudiadas y remitidas a tres instancias fundamentalmente: Comisión Judicial, Inspectoría General de Tribunal y la Gerencia de Participación Social e Institucional.”* Y que *“Cuando corresponde a la Gerencia de Participación Social e Institucional, luego de recibida la queja o denuncia remitida por la Presidenta de este alto tribunal, es estudiada directamente por el gerente, quien posterior a su recibimiento asigna la situación problema a un analista según sean las características del caso.”* Al respecto, agregaron que a partir de este punto se sigue un procedimiento que consta de tres fases y que en caso de que la solicitud pueda dar lugar a una investigación disciplinaria, el caso es remitido al superior jerárquico del funcionario o funcionaria denunciada, o a la Inspectoría General de Tribunales en el caso de jueces, para dar apertura a la investigación.⁵⁷

[219] Asimismo, la ciudadanía podrá presentar quejas y denuncias a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, de conformidad con las *“Normas y Procedimientos de la Oficina de Atención al Ciudadano”*, y estas quejas y denuncias se tramitan ante el Inspector de Tribunales o Analista (IGT).⁵⁸

[220] Finalmente, en lo que tiene relación con los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera en que esta información se hace pública y que la ciudadanía pueda tener acceso a la misma, el párrafo 8 del artículo 10 de la Ley del Sistema Judicial dispone que entre las atribuciones de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia se encuentra la de *“Presentar anualmente un informe de la gestión del Sistema de Justicia ante la Asamblea Nacional con la concurrencia de todos y todas sus integrantes, de conformidad con lo establecido en la ley y reglamentos”*.

[221] Por otra parte, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que *“Ciertamente el Poder Judicial, a través de las dependencias competentes para ello, tiene la obligación de llevar a cabo la recolección de datos estadísticos, definición de indicadores de gestión y elaboración del informe anual de gestión, no solo del Tribunal Supremo de Justicia, sino de todas las instituciones que conforman el Poder Judicial...”*

[222] Asimismo, manifiesta que *“Dicha información, debe reportarse anualmente ante la Asamblea Nacional y resumirse en un informe anual de gestión, presentado por la Máxima Autoridad del Tribunal Supremo Justicia, el cual generalmente se hace público en el acto de apertura de las actividades judiciales, según lo establecido en el artículo 26⁵⁹ de la Ley Orgánica del Poder Judicial...”*⁶⁰

⁵⁶ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 18.

⁵⁷ Ver presentaciones Power Point http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_lam_pan_10.pdf y http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf, pp. 39.

⁵⁸ Ver presentación Power Point http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_lam_pan_10.pdf

⁵⁹ El artículo 26 de la LOPJ dispone lo siguiente: *“El día 7 de enero de cada año, o el más inmediato posible, se celebrará en la capital de la República la solemne apertura de las actividades judiciales. Presidirá este acto el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el mismo día se celebrará la solemne apertura de las labores en la sede de las demás Circunscripciones Judiciales, bajo la dirección del Juez*

3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[223] El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene un conjunto de disposiciones y/u otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1. de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[224] En primer lugar, en relación con la naturaleza del Comité de Postulaciones Judiciales, el Comité advierte que mientras que el artículo 270 de la CRBV dispone que “*El Comité de Postulaciones es un órgano asesor del Poder Judicial⁶¹ para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia...*”, el artículo 64 de la Ley Orgánica del TSJ (LOTSJ) dispone que “*El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor de la Asamblea Nacional⁶² para la selección de los candidatos o candidatas a Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia...*”.

[225] Al respecto, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere tomar las medidas legislativas correspondientes a los fines de armonizar el artículo 64 de la LOTSJ con el artículo 270 Constitucional, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.1. del Capítulo II de este Informe)

[226] En segundo lugar, en relación con lo concerniente los recursos humanos del Poder Judicial, el Comité toma nota de que si bien el Estado analizado ha adoptado la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), cuyo artículo 3 dispone que “*Los jueces gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser removidos o suspendidos en el ejercicio de sus funciones en los casos y mediante el procedimiento que determina esta Ley...*”, durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ indicaron que la Ley de la Carrera Judicial es aplicable a los jueces titulares, pero no a los provisorios.

[227] Sin embargo, puesto que este es un tema de la segunda ronda, durante la cual se le formularon recomendaciones al Estado analizado y cuyo seguimiento a su implementación será llevado a cabo durante la quinta ronda, el Comité no se referirá a ello en esta ocasión.

[228] En tercer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado ha creado el sistema automático de gestión “Agenda Única”, que de forma automatizada centraliza las audiencias de los tribunales, comparecencia de los sujetos y efectiva realización de los actos jurisdiccionales para la programación procesal de las causas, involucrando al sistema penitenciario, el Ministerio Público, la Defensa Pública y los Jueces, lo que contribuye a solventar el retraso judicial. Sin embargo, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ* los representantes del TSJ manifestaron que este sistema aún no se encuentra implementado en todos los Estados. Sobre el particular, el Comité estima que sería de utilidad para el Estado analizado que considere tomar las medidas que sean del caso a los fines de implementar el sistema “Agenda Única” en todos los Estados. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.2. del Capítulo II de este Informe).

[229] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta indica que la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del TSJ cuenta con un formulario electrónico de

Presidente del Circuito Judicial, o en ausencia de éste, del más antiguo en la magistratura. Los jueces, salvo por motivo justificado, están en el deber de concurrir a los referidos actos”.

⁶⁰ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp.22.

⁶¹ El subrayado es nuestro.

⁶² El subrayado es nuestro.

denuncias disponible en la página de Internet del TSJ⁶³. Este formulario está diseñado para recibir denuncias específicamente de actos de corrupción y cualquier persona puede hacerlo por este medio.

[230] Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ manifestaron que *“Importa destacar, que del uso de tal herramienta en un período que excede de un lustro, se ha podido verificar que la ciudadanía en general no interpone denuncias, vía internet, relativas a casos de corrupción dirigidas a los órganos de control fiscal, puesto que a la fecha no se ha producido la primera denuncia – en esta materia – utilizando el mecanismo informático puesto en funcionamiento por la Unidad de Auditoría Interna...”*⁶⁴

[231] Sobre el particular, el Comité estima que sería de utilidad que el Estado analizado considerara efectuar un estudio para identificar las posibles causas por las cuales la ciudadanía no utiliza este mecanismo de denuncia a los efectos de identificar retos y adoptar medidas correctivas de ser necesario. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendación 3.4.3. del Capítulo II de este Informe).

[232] Adicionalmente, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, en todas las reuniones con los representantes de los órganos de control se puso de presente que las quejas y denuncias deben hacerse presentando identificación y que la protección de la identidad del denunciante es limitada o no se encuentra contemplada. Sin embargo, debido a que este es un tema de la segunda ronda sobre el que ya existen recomendaciones y cuyo seguimiento a su implementación será llevado a cabo en la quinta ronda, el Comité no se pronunciará en esta ocasión.

[233] En quinto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ pusieron de presente que, con relación a los trámites de atención de reclamos, quejas o denuncias por parte de la UAI, cuentan para ello con un procedimiento que está contemplado en su Proyecto de Manual de Organización, que crea una unidad especial, denominada Departamento de Auditorías Especiales, que entre sus funciones se encuentra la de *“gestionar las denuncias recibidas, sea de particulares, de funcionarios o servidores, tanto en la Institución como ajenos a ella, con ocasión a actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal relacionadas con la administración manejo o custodia de bienes o fondos públicos...”*⁶⁵

[234] Sin embargo, el Comité advierte que el citado Proyecto de Manual de Organización de la UAI, aún estaba en proceso de aprobación por parte de la Máxima Autoridad al tiempo de la visita *in situ*.⁶⁶ Sobre el particular, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado considerar la aprobación del Proyecto Manual de Organización de la UAI a la brevedad posible y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.4. del Capítulo II de este Informe).

[235] En esa misma línea, durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ manifestaron que la ciudadanía puede presentar quejas y denuncias relativos al cumplimiento de los objetivos de este órgano de control y sobre el desempeño del personal a su servicio, a través de la Gerencia de Participación Social e Institucional, cuyas atribuciones están establecidas en el respectivo

⁶³ Ver <http://www.tsj.gov.ve/infoservicios/controlfiscal/denuncia.asp>

⁶⁴ Ver presentación PowerPoint http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf pp.36.

⁶⁵ Ver presentación del TSJ durante la visita *in situ*, pp- 35-36.
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf

⁶⁶ Ver presentación del TSJ durante la visita *in situ*, pp- 35, nota al pie No. 63.
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf

proyecto de Manual que está pendiente de aprobación por la Máxima Autoridad, para lo cual existe un procedimiento específico para dar curso a estos casos.⁶⁷

[236] Sobre el particular, el Comité toma nota de que el proyecto de Manual de Organización de la Gerencia de Participación Social e Institucional está también pendiente de aprobación y que por tanto no ha entrado en vigencia. En vista de lo anterior, el Comité estima que sería de utilidad al Estado analizado considerar la pronta aprobación del citado Manual de Organización de la Gerencia de Participación Social e Institucional y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.5. del Capítulo II de este Informe).

[237] En sexto lugar, el Comité toma nota de que el TSJ, en la Matriz FODA de su plan operativo anual 2014, lista bajo el rubro de “Amenazas” el “*Desconocimiento por parte de los usuarios y usuarias del servicio de justicia del funcionamiento operativo del Tribunal Supremo de Justicia*”.⁶⁸

[238] Sobre el particular, el Comité considera que sería de beneficioso para el Estado analizado tomar las medidas que sean del caso a los efectos de diseminar más ampliamente la información sobre el funcionamiento de los servicios que presta el TSJ a los usuarios del sistema judicial, ya sea a través la página de Internet del TSJ u otros medios que considere conveniente. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.6. del Capítulo II de este Informe).

[239] En séptimo lugar, en lo que se refiere a la obligación de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre el cumplimiento de sus funciones y a la manera en que esta información se hace pública y que la ciudadanía pueda tener acceso a la misma, el Comité advierte que el Estado analizado en su respuesta pone de presente que informes anuales de gestión se hacen públicos generalmente en el acto de apertura de las actividades judiciales que el artículo 26 de la LOPJ dispone deben celebrar cada año. Sin embargo, el Comité no ha encontrado evidencia que estos informes se hagan públicos de ninguna otra manera y advierte que tampoco se encuentran disponibles en la página de Internet del TSJ. Adicionalmente, el Comité toma nota de que el TSJ, en la Matriz FODA de su plan operativo anual, pone de presente en la columna correspondiente a “Oportunidades” la “*Creciente demanda del Poder Popular para optimizar la rendición de cuentas y transparencia de la gestión judicial*.”⁶⁹

[240] En vista de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado podría hacer públicos los informes de gestión del Poder Judicial en la página de Internet del TSJ y a través de otros medios que estime conveniente, de manera que la ciudadanía pueda conocer esta información. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendación 3.4.7. del Capítulo II de este Informe).

[241] En octavo lugar, el Comité advierte que no toda la legislación pertinente al Poder Judicial se encuentra fácilmente disponible en la página de Internet del TSJ, como por ejemplo el Estatuto del Personal Judicial, entre otros, y estima que sería conveniente que el Estado analizado considerara colocar dicha legislación en su página de Internet a los efectos de que la ciudadanía pueda tener fácil acceso a esta información. Para ello, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.8. del Capítulo II de este Informe).

⁶⁷ Ver presentación del TSJ durante la visita *in situ*, pp- 35, nota al pie No. 65.

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf

⁶⁸ Ver Matriz FODA -2014 del TSJ en

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_mat_foda_tsj_2014.pdf

⁶⁹ Ver Matriz FODA -2014 del TSJ en

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_mat_foda_tsj_2014.pdf

[242] Finalmente, en lo que tiene que ver con necesidades de cooperación técnica, durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ manifestaron que les gustaría ser parte de los esquemas de observación de las fórmulas exitosas en la lucha contra la corrupción de los Estados Parte para poder adoptarlo. Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por el TSJ, de la necesidad de que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Poderes Judiciales de los Estados Parte, así como a las organizaciones de cooperación, a compartir experiencias y asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.9. del Capítulo II de este informe).

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[243] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la cual se destaca la siguiente:

[244] En lo que se refiere a actividades de prevención de las prácticas corruptas, el Estado analizado en su respuesta presenta información de la cual se destaca la siguiente:

[245] Presentaciones de la Unidad de Auditoría Interna del TSJ, durante los años 2012-2013, *“dirigidas a las servidoras y servidores públicos de esta Institución, específicamente a las altas autoridades, a saber: Personal Directivo y Supervisor, adscrito a las Direcciones Administrativas Regionales de los estados Trujillo, Carabobo, Mérida, Zulia, Falcón, Nueva Esparta y Monagas, unidades administradoras desconcentradas, así como a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), inherentes al Sistema de Control Interno. En virtud que entre los factores que favorecen los espacios para la corrupción, se identifican la ausencia de controles internos efectivos y/o de seguimiento, y además a los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, considerando que la misma se deriva de los actos, hechos u omisiones contrarios a normas expresas en que incurren funcionarios públicos, con ocasión del desempeño de sus funciones, del correcto o inapropiado manejo o custodia de fondos o bienes públicos, los cuales se encuentran tipificados en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.”*

[246] *“Aunado a lo anterior, resaltan las charlas que se han efectuado a las servidoras y servidores públicos con cargos Directivos y Gerenciales de otros órganos y entes de la Administración Pública, en representación del Tribunal Supremo de Justicia, como son el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR) y el Instituto Nacional de Tierras (INTI); igualmente, en materia de control interno y supuestos generadores de responsabilidad administrativa, en atención al principio de cooperación entre las distintas instituciones del Estado venezolano.”*⁷⁰

[247] Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere fortalecer los controles internos y/o de seguimiento del sistema judicial, a los fines de evitar oportunidades de corrupción. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación (ver recomendación 3.4.10. del Capítulo II de este informe).

[248] Adicionalmente, el Comité advierte que el Estado analizado únicamente ofrece información desagregada a partir de 2011. Al respecto, el Comité estima que sería de utilidad que Estado analizado considere llevar estadísticas detalladas y desagregadas por año sobre las actividades de prevención de la corrupción que el TSJ lleva a cabo, de manera que esta

⁷⁰ Respuesta de Venezuela al Cuestionario, pp. 23-25.

información pueda ser utilizada para identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario (ver recomendación 3.4.11. del Capítulo II de este informe).

[249] En lo que tiene que ver con las funciones de sanción de actos de corrupción relativas a las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial, el Estado analizado, tanto en su respuesta como en la visita *in situ* presentó información estadística de la cual se destaca la que se resume a continuación:

Cuadro No. 1

TRIBUNALES PENALES ORDINARIOS EN FUNCIÓN DE CONTROL DELITOS SENTENCIADOS Y DELITOS SENTENCIADOS DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN⁷¹

Año	Delitos Sentenciados	Ley Contra la Corrupción	Porcentaje Delitos Ley contra la Corrupción
2009	101,961	306	0.59%
2010	77,724	692	1.89%
2011	47,733	536	1.13%
2012	30,457	406	1.33%
2013	28,860	357	1.24%
2014 ⁷²	13,836	284	2.05%
Total	300,371	2,878	0.96%

Cuadro No. 2

TRIBUNALES PENALES ORDINARIOS EN FUNCIÓN DE JUICIO DELITOS SENTENCIADOS Y DELITOS SENTENCIADOS DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN⁷³

Año	Delitos Sentenciados	Ley Contra la Corrupción	Porcentaje Delitos Ley contra la Corrupción
2009	12,972	106	0.82%
2010	11,749	151	1.29%
2011	9,719	109	1.12%

⁷¹ Ver presentación PowerPoint, pp. 60-65.

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf

⁷² De enero a agosto de 2014

⁷³ Ver presentación PowerPoint, pp. 60-65.

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf

2012	11,667	128	1.10%
2013	12,135	141	1.16%
2014 ⁷⁴	8,547	125	1.46%
Total	66,789	760	1.14%

[250] En relación con el Cuadro No. 1, el Comité advierte que existe una disminución entre el número de sentencias relativas a delitos en general a partir de 2009 y el 2013. En el caso de las sentencias relativas a los delitos derivados de la Ley contra la Corrupción, esta disminución comienza a partir de 2010 y, si bien el porcentaje de sentencias sobre delitos de corrupción en comparación con los delitos comunes sube, esto es proporcional al número de sentencias más reducido en ambas columnas. Sobre el particular, el Comité considera que el Estado analizado se beneficiaría de la realización de un estudio a los fines de determinar la causa de esta disminución, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.12. del Capítulo II de este informe).

[251] Adicionalmente, el Comité advierte que la información anterior no permite conocer cuántos de los casos investigados se encontraban listos para su decisión en los últimos cinco años; cuántas de estas sentencias resultaron en imputación de la responsabilidad o absolución; y el número de casos que resultaron en la prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.

[252] En vista de lo anterior, el Comité estima que sería beneficioso que el Estado analizado lleve información estadística con respecto a su función jurisdiccional de sanción de actos de corrupción, que permita conocer cuántos de los casos investigados se encuentran listos para su decisión y cuántas de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en relación con actos de corrupción resultaron en imputación de la responsabilidad o absolución, y el número de casos que resultaron en la prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.13. del Capítulo II de este informe).

[253] En lo que se refiere a las funciones de investigación y sanción de las prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, el Estado analizado tanto en su respuesta como en la visita *in situ* proporcionó información estadística de la cual se resalta la que se resume a continuación:

[254] En primer lugar, cabe recordar que de conformidad con el Código de conducta del Juez y Jueza Venezolanos los órganos encargados del procedimiento disciplinario son la Oficina de Sustanciación, que tiene entre sus funciones el procedimiento de investigación preliminar, ya sea de oficio o por denuncia; el Tribunal Disciplinario Judicial, que tiene entre sus funciones la investigación y está a cargo del procedimiento disciplinario y de determinar responsabilidades e imponer sanciones⁷⁵; y la Corte Disciplinaria Judicial ante quien se interponen las apelaciones⁷⁶.

⁷⁴ De enero a agosto de 2014

⁷⁵ En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar, el Estado analizado puso de presente lo siguiente “Venezuela debe señalar, que conforme lo establece el fallo N° 516 del 7 de mayo de 2013 y su aclaratoria N° 1088, proferidos por la Sala Constitucional del TSJ, en ejercicio del control concentrado constitucional, se decidió suspender normas del Código de Ética del Juez Venezolano y la

[255] Cabe señalar que estos órganos entraron en funciones a partir de 2011, y que anteriormente los procedimientos disciplinarios se encontraban a cargo de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial.

[256] En relación con las estadísticas relacionadas con la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, tanto en la respuesta al cuestionario⁷⁷ como en la visita *in situ*⁷⁸ el Estado analizado presentó la siguiente información:

Cuadro No. 1
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial⁷⁹

Año	Expedientes ingresados	Absoluciones	Amonestaciones	Suspensiones	Declaratoria de Responsabilidad Disciplinaria	Amonestación y Suspensión	Destituciones	Total de Sanciones
2009	149	6	13	13	12		46	84
2010	125	9	23	13	31		40	97
Total	274	15	36	26	33		86	181

Fuente: Informe de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial

[257] Sobre el particular, durante la visita *in situ*, el Estado analizado proporcionó información estadística adicional de las funciones disciplinarias de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, desagregando la naturaleza de las decisiones y especificando las conductas corruptas que fueron procesadas, la cual se resume a continuación:⁸⁰

Cuadro No. 2
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial

AÑO	ILÍCITO DISCIPLINARIO	SANCIÓN	TOTAL (9)
2009	Conducta censurable art. 39,5 LCJ	Amonestada	2
	Conducta censurable art. 39,5 LCJ	Destituida	
2010	Hechos que hacen desmerecer en el concepto publico ART. 40,2 LCJ	Destituida	7
	Falta de probidad art. 33.12 CEJVJV	Destituida	
	Conducta censurable art. 39.5 LCJ	Absuelto	
	Falta de probidad art. 33.12	Destituida	

Jueza Venezolana, por lo que la Inspectoría General de Tribunales (IGT), conforme lo prevé el artículo 267 de la CRBV, asume las atribuciones de la Oficina de Sustanciación, correspondiendo a la IGT investigar y sustanciar las denuncias e igualmente, presentar actos conclusivos (acusación) ante la Jurisdicción Disciplinaria Judicial (JDJ), la cual está integrada por el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial”.

⁷⁶ Ver presentación en PowerPoint en http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_lam_pan_10.pdf

⁷⁷ Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_anexo_1-8.pdf

⁷⁸ Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf

⁷⁹ Ver Anexo 6 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_anexo_1-8.pdf

⁸⁰ Ver presentación PowerPoint http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf, pp. 52.

	CEJVJV		
	Conducta censurable art. 39.5 LCJ	Destituida	
	Conducta censurable art. 39.5 LCJ	Amonestado	
	Atentar contra la respetabilidad del Poder Judicial art. 40,2 LCJ y por haber sido condenada penalmente por tráfico de influencias art. 33,10 CEJVJV	Declaró responsabilidad disciplinaria	
			TOTAL CFRSJ (9)

[258] Sobre el particular, el Comité advierte que las cifras ofrecidas en el Cuadro No. 2, si bien contienen mayor detalle en relación con el tipo de conducta procesada y con el resultado de dicho proceso, no corresponden con las cifras ofrecidas en el Cuadro No. 1. A manera de ejemplo, el Cuadro No. 1 indica que en 2009 hubo 13 amonestaciones, mientras que el Cuadro No.2 muestra que hubo solamente una⁸¹. Asimismo, esta información no permite conocer cuántos expedientes fueron archivados o sobreesidos, cuántas de estas causas mostraron indicios de responsabilidad penal y, de ser el caso, a cuántas se les dio curso al Ministerio Público.

Cuadro No. 3

AÑO	INSTANCIA	OFICINA DE SUSTANCIACIÓN	TRIBUNAL DISCIPLINARIO	CORTE DISCIPLINARIA
2011	SENTENCIAS			
	Asuntos Ingresados	386	244	1
	Sustanciados (Informes)	122		
	Sentencias		110	
	Autos de Admisión e Incidencias		104	
	Inadmisiones		3	
	Litisdependencia		1	
	Suspensión Cautelar		1	
	Admisión de Causa		1	
a.- El 76% son denuncias de las cuales el 98% son contra jueces y el restante 2% contra fiscales del Ministerio Público. b.- Incluye 118 de la CFRSJ. Fuente: Informe de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial				
AÑO	INSTANCIA	OFICINA DE SUSTANCIACIÓN	TRIBUNAL DISCIPLINARIO	CORTE DISCIPLINARIA
2012	SENTENCIAS			
	Asuntos Ingresados	718	718	34
	Sustanciados (Informes)	725		
	Sentencias Definitivas		148	34
	Sentencias Interlocutorias		271	
	Sentencias Interlocutorias con fuerza de definitiva		15	

⁸¹ El Estado analizado en su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar pone de presente lo siguiente: “Venezuela destaca que conforme a las fórmulas empleadas en el Proyecto de informe, no es posible que coincidan las cifras, toda vez que del universo reportado (cuadro N° 1), solo las sanciones identificadas en el cuadro N° 2, se relacionan con los temas de la convención objeto de análisis, tal como se indica en el mismo, igualmente en ese cuadro se especifican las conductas penales establecidas”.

AÑO	INSTANCIA	OFICINA DE SUSTANCIACIÓN	TRIBUNAL DISCIPLINARIO	CORTE DISCIPLINARIA
2013	SENTENCIAS			
	Autos Ingresados	390	273	43
	Sustanciados Informes realizados	273		
	Sentencias			40
	Sentencias Definitivas		129	
	Sentencias Interlocutorias		46	
	Sentencias Interlocutorias con fuerza de definitiva		8	
***Desde el 07 de mayo de 2013 fecha en que fue dictada la sentencia 516 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sólo ingresaron un total de 10 asuntos ⁸² .				
AÑO	INSTANCIA		TRIBUNAL DISCIPLINARIO	CORTE DISCIPLINARIA
2014 (Julio a Septiembre)	SENTENCIAS			
	Denuncias interpuestas por particulares y remitidas a la Inspectoría General de Tribunales (IGT)	94	4	25
	Asuntos ingresados por actuación de la IGT	4	2	
	Expedientes remitidos del TSJ para la ejecución de la sentencia	2		
	Sentencias			14
	Sentencias definitivas		14	
	Sentencias interlocutorias		11	
	Sentencias interlocutorias con fuerza de definitiva		2	
a.- En razón de lo ordenado por las sentencia 516 de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia: a) los 94 asuntos interpuestos por particulares fueron enviados a la Inspectoría General de Tribunales para su sustanciación. b.- Fueron remitidos a la Inspectoría General de Tribunales 512 asuntos que cursaban ante la Oficina de Sustanciación. c.- Fueron remitidos a la Inspectoría General de Tribunales 433 asuntos que cursaban ante el Tribunal Disciplinario Judicial.				

⁸² Ver Sentencia 516 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 7 de mayo de 2013, que como medida cautelar decretó cautelarmente “ 1) La suspensión del único aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. 2) Que el Inspector General de Tribunales será el competente para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra los jueces o juezas, admitir la denuncia y practicar las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos; 3) la suspensión del segundo párrafo del artículo 35 y los cardinales 2; 3; 5; 7 y 8 del artículo 37 (relativos a la competencia de la Oficina de Sustanciación para realizar la “investigación preliminar”), todos del Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.750 del 5 de septiembre de 2011, así como el Manual de Normas y Procedimientos para la Oficina de Sustanciación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.797 del 10 de noviembre de 2011. 4) La suspensión de la referencia que hace el artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana a los jueces y las juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios, que permite la extensión a esta categoría de jueces y juezas del procedimiento disciplinario contemplado en los artículos 51 y siguientes del mencionado Código, correspondiéndole a la Comisión Judicial la competencia para sancionarlos y excluirlos de la función jurisdiccional; y. 5) La suspensión del único aparte del artículo 16 del mismo Código.” Ver <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/516-7513-2013-09-1038.html>

[259] En relación con la información proporcionada en el Cuadro No. 3 anterior, el Comité observa que no permite conocer cuántos casos fueron archivados, cuántos fueron sobreseídos, cuántas de estas causas mostraron indicios de responsabilidad penal y de éstos a cuántos se les dio curso al Ministerio Público.

[260] Adicionalmente, el Comité advierte que la Sentencia No. 516 de mayo de 2013, suspendió varios artículos del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (CEJVJV), mediante lo cual varias de las responsabilidades de la Oficina de Sustanciación, entre ellas la responsabilidad de investigación inicial, fueron transferidas a la Inspectoría General de Tribunales, tal y como puede apreciarse en la sección correspondiente a 2014.

[261] En ese sentido, el Comité advierte que esta transferencia de atribuciones fue tomada como medida cautelar hasta que se dictara sentencia definitiva. Sin embargo, a la fecha de la visita *in situ*, aún no se había resuelto este tema y estas atribuciones continúan bajo la responsabilidad de la Inspectoría General de Tribunales. Teniendo en cuenta que el CEJVJV es una normativa expedida por la Asamblea Nacional, y que la suspensión de los citados artículos del CEJVJV fue una medida cautelar, el Comité estima que sería necesario que el Estado analizado considere resolver definitivamente estos aspectos y decidir si es que la investigación preliminar quedará permanentemente bajo la responsabilidad de la IGT o bajo la Oficina de Sustanciación. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.14. del Capítulo II de este informe).

[262] Por otra parte, el Comité advierte que al final del Cuadro No. 3 se incluye una nota que indica que “a.- En razón de lo ordenado por las sentencia 516 de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia: a) los 94 asuntos interpuestos por particulares fueron enviados a la Inspectoría General de Tribunales para su sustanciación. b.- Fueron remitidos a la Inspectoría General de Tribunales 512 asuntos que cursaban ante la Oficina de Sustanciación. c.- Fueron remitidos a la Inspectoría General de Tribunales 433 asuntos que cursaban ante el Tribunal Disciplinario Judicial”. Sin embargo, no se ofrece ninguna información sobre el estado de estos asuntos, si es que aún están pendientes o si han concluido, y de ser este último el caso, cuáles fueron las decisiones que se tomaron al respecto.

[263] Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, el Comité estima importante que el Estado analizado considere hacer el seguimiento y llevar información estadística sobre el proceso y decisiones finales de estos casos y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.15. del Capítulo II de este informe).

[264] Adicionalmente, durante la visita *in situ*, el Estado analizado proporcionó información estadística complementaria de las funciones del Tribunal Disciplinario Judicial y de la Corte Disciplinaria Judicial puestas de presente en el Cuadro No. 3 anterior, desagregando la naturaleza de las decisiones y especificando las conductas corruptas que fueron procesadas, la cual se resume a continuación:⁸³

Cuadro No. 4

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL			
AÑO	ILÍCITO DISCIPLINARIO	SANCIÓN	TOTAL TDJ (10)
2011	NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS (VER CUADRO 1)		0
2012	Abuso de autoridad art. 40.16	Absuelto	4

⁸³ Ver presentación PowerPoint http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_org_sup_jus.pdf, pp. 52.

	LCJ		
	Conducta censurable art. 39.5 LCJ	Absuelta	
	Conducta impropia art. 33.13 CEJVJV	Absuelto	
	Falta de probidad art. 33.12 CEJVJV	Destituido	
2013	Conducta censurable art. 39.5 LCJ	Declarada responsabilidad (fuera PJ)	6
	Conducta censurable art. 39.5 LCJ	Amonestada	
	Conducta impropia art. 33.13 CEJVJV	Absuelta	
	Abuso de autoridad art. 40.16 LCJ y 33.14 CEJV	Destituida	
	Falta de probidad art. 33.12 CEJVJV	Destituida	
	Conducta censurable art. 39.5 LCJ	Absuelta)	
2014	NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS		0
TOTAL			10

Cuadro No. 5

CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL		
AÑO	SANCIÓN	TOTAL CDJ (6)
2011	NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS (VER CUADRO 1)	0
2012	Anuló sentencia TDJ: Destituido art. 40.16 LCJ y se ordenó remitir al Ministerio Público copia de actuaciones para inicio de investigación por presunto delito penal	1
2013	Confirmó absolución (conducta censurable art. 33.12 CEJVJV)	2
	Confirmó destitución (falta de probidad art. 33.12 CEJVJV)	
2014	Confirmó destitución (falta de probidad art. 33.12 CEJVJV)	3
	Confirmó destitución (Abuso de autoridad art. 40.16 LCJ)	
	Suspendida causa Sent. 516 del 7/5/13	
TOTAL		6

[265] Sobre el particular, el Comité advierte que las cifras ofrecidas en los Cuadros No. 4 y No. 5, si bien contienen mayor detalle en relación con el tipo de conducta procesada y con el resultado de dicho proceso, no corresponden con las cifras ofrecidas en el Cuadro No. 3. Por ejemplo, el cuadro No 3. en la sección relativa a las sentencias del Tribunal Disciplinario correspondiente a 2012 se indica que se dictaron 148 sentencias definitivas, 271 sentencias interlocutorias y 15 sentencias interlocutorias con fuerza de definitiva, mientras que el Cuadro No. 4 en la misma sección indica que se dictaron únicamente 4 (3 absoluciones y una destitución), lo que dificulta el análisis integral de la información.

[266] En virtud de lo anterior, el Comité considera que sería beneficioso para el Estado analizado considerar llevar información estadística integral y desagregada sobre su proceso disciplinario, de manera que pueda conocerse cuántas causas relativas a actos de corrupción fueron archivadas, cuántas resultaron en sobreseimiento, cuántas se encuentran pendientes por cualquier razón, cuántas decisiones resultaron imputación de la responsabilidad, cuántas resultaron en absoluciones, en cuántas se encontraron indicios de responsabilidad penal, el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad

por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos; y cuántas fueron transmitidas al Ministerio Público. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.16. del Capítulo II de este informe).

[267] Finalmente, el Comité toma nota de que el Cuadro No. 5 muestra que en 2012 se remitió copia de las actuaciones al Ministerio Público para inicio de investigación por presunto delito penal. Sobre el particular, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes del TSJ pusieron de presente que no existe un mecanismo que permita dar seguimiento al destino final de las causas remitidas al Ministerio Público para investigación por presunta responsabilidad penal. Sobre el particular, el Comité considera que sería de utilidad para el Estado analizado considerar la implementación de un mecanismo de coordinación interinstitucional a los fines de que pueda conocerse cuál es el destino final de estas causas y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.17. del Capítulo II de este informe).

3.4. Conclusiones y recomendaciones

[268] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[269] **La República Bolivariana de Venezuela ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.**

[270] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 3.4.1. Considerar armonizar el artículo 64 de la LOTSJ con el artículo 270 Constitucional, correspondiente a la naturaleza del Comité de Postulaciones Judiciales (ver sección 3.2. del Capítulo II de este Informe).
- 3.4.2. Tomar las medidas necesarias a los fines de implementar el sistema “Agenda Única” en todos los Estados (ver sección 3.2. del Capítulo II de este Informe).
- 3.4.3. Llevar a cabo un estudio a los fines de identificar la causa por la cual la ciudadanía no está utilizando el formulario informático de la página de Internet del TSJ para denunciar actos de corrupción, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 3.2. del Capítulo II de este Informe).
- 3.4.4. Aprobar el Manual de Organización de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del TSJ a la brevedad posible (ver sección 3.2. del Capítulo II de este Informe).
- 3.4.5. Aprobar el Manual de Organización de la Gerencia de Participación Social e Institucional a la brevedad posible (ver sección 3.2. del Capítulo II de este Informe).
- 3.4.6. Tomar las medidas que sean del caso a los efectos de diseminar más ampliamente la información sobre el funcionamiento de los servicios que presta el TSJ a los usuarios del sistema judicial, ya sea a través la página de Internet del TSJ u otros medios que considere conveniente (ver sección 3.2. del Capítulo II de este Informe).

- 3.4.7. Hacer públicos los informes anuales de gestión del Poder Judicial en la página de Internet del TSJ y a través de otros medios que estime conveniente, de manera que la ciudadanía pueda conocer esta información. (ver sección 3.2. del Capítulo II de este Informe).
- 3.4.8. Complementar la normativa pertinente al Poder Judicial que aparece en la página de Internet del TSJ, de manera que toda ella se encuentre fácilmente a la disposición de la ciudadanía (ver sección 3.2. del Capítulo II de este Informe).
- 3.4.9. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer al TSJ la cooperación técnica necesaria para facilitar el intercambio de experiencias entre este órgano de control con los Poderes Judiciales de otros Estados Parte del MESICIC, sobre temas comunes anticorrupción (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.10. Fortalecer los controles internos y/o de seguimiento del sistema judicial, a los fines de evitar oportunidades de corrupción (ver sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.11. Llevar estadísticas detalladas y desagregadas por año sobre las actividades de prevención de la corrupción que el TSJ lleva a cabo, de manera que esta información pueda ser utilizada para identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 3.3. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.12. Realizar un estudio para determinar las razones de la tendencia a la baja en el número de sentencias de los Tribunales Penales Ordinarios en función de control, particularmente sobre aquéllos delitos derivados de la Ley contra la Corrupción, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.13. Llevar información estadística con respecto a su función jurisdiccional de sanción de actos de corrupción, que permita conocer cuántos de los casos investigados se encuentran listos para su decisión, cuántas de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en relación con actos de corrupción resultaron en imputación de la responsabilidad o absolución, y el número de casos que resultaron en la prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 3.3. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.14. Resolver de manera definitiva el tema de la suspensión de los artículos del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (CCJVJV) como medida cautelar resultante de la Sentencia 516 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 7 de mayo de 2013, de manera que pueda decidirse de manera definitiva si que las funciones contempladas en los artículos suspendidos de la referencia competen a la Oficina de Sustanciación o a la Inspectoría General de Tribunales y, de ser así, considerar la revisión del CCJVJV de manera que refleje esta decisión (ver sección 3.3. del Capítulo II de este informe).
- 3.4.15. Compilar información estadística relativa a las causas remitidas a la Inspectoría General de Tribunales como resultado de la sentencia 516 de la Sala Constitucional del TSJ, de manera que pueda conocerse cuántos de estos casos fueron archivados,

cuántos fueron sobreseídos, en cuántos se encontró indicios de responsabilidad y cuántos fueron transmitidos a la autoridad competente (ver sección 3.3. del Capítulo II de este informe).

3.4.16. Compilar información estadística relativa a las funciones de investigación y sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria del TSJ, de manera que permita conocer el número total de casos que fueron receptados; el número de casos que fueron archivados o sobreseídos, el número de casos que se encuentran suspendidos por cualquier razón; el número de casos investigados que se encuentran listos para su decisión; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos; el número de casos en los cuales se encontraron indicios de responsabilidad penal; y el número de casos transmitidos al Ministerio Público para su investigación penal a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, (ver sección 3.3. del Capítulo II de este informe).

3.4.17. Implementar un mecanismo de coordinación interinstitucional con el Ministerio Público a los fines de que pueda conocerse cuál es el destino final de las causas del procedimiento disciplinario que son remitidas a dicho órgano de control para su investigación y procesamiento por haberse encontrado indicios de responsabilidad penal (ver sección 3.3. del Capítulo II de este informe).

4. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.

[271] La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[272] En relación con la naturaleza, de la SUNAI, el artículo 137 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) dispone que: *“Se crea la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, como órgano rector del Sistema de Control Interno, Integrado a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, con autonomía funcional y administrativa, y la estructura organizativa que determine el reglamento respectivo”*.

[273] Por otra parte, el Artículo 138 de la LOAFSP determina que *“La Superintendencia nacional de Auditoría Interna es el órgano a cargo de la supervisión, orientación y coordinación del control interno, así como de la dirección de la auditoría interna en los organismos que integran la administración central y descentralizada funcionalmente, enumerados en el artículo 6 de esta Ley, excluido el Banco Central de Venezuela”*.⁸⁴

⁸⁴ El artículo 6 de la LOAFSP establece que *“Están sujetos a las regulaciones de esta Ley, con las especificidades que la misma establece, los entes u organismos que conforman el sector público, enumerados seguidamente: 1. La República. 2. Los estados. 3. El Distrito Metropolitano de Caracas y el Distrito Alto Apure. 4 Los distritos. 5. Los municipios. 6. Los institutos autónomos. 7. Las personas jurídicas estatales de derecho público. 8. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que*

[274] En relación con la atribuciones de la SUNAI, éstas se encuentran contempladas en el artículo 139 de la LOAFSP que dispone que serán las siguientes: “1. *Orientar el control interno y facilitar el control externo, de acuerdo con las normas de coordinación dictadas por la Contraloría General de la República.* 2. *Dictar pautas de control interno y promover y verificar su aplicación.* 3. *Prescribir normas de auditoría interna y dirigir su aplicación por las unidades de auditoría interna.* 4. *Realizar o coordinar las auditorías que estime necesarias, para evaluar el sistema de control interno en los entes y órganos a que se refiere el artículo 138, así como orientar la evaluación de proyectos, programas y operaciones. Eventualmente, podrá realizar auditorías financieras, de legalidad y de gestión, en los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia.* 5. *Vigilar la aplicación de las normas que dicten los órganos rectores de los sistemas de administración financiera del sector público nacional e informarles los incumplimientos observados.* 6. *Ejercer la supervisión técnica de las unidades de auditoría interna, aprobar sus planes de trabajo y orientar y vigilar su ejecución, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República.* 7. *Comprobar la ejecución de las recomendaciones de las unidades de auditoría interna, adoptadas por las autoridades competentes.* 8. *Proponer las medidas necesarias para lograr el mejoramiento continuo de la organización, estructura y procedimientos operativos de las unidades de auditoría interna, considerando las particularidades de cada organismo.* 9. *Formular directamente a los organismos o entidad es comprendidos en el ámbito de su competencia, las recomendaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficacia y eficiencia.* 10. *Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de auditoría de la administración financiera del sector público, así como de consultores o consultoras especializados o especializadas en las materias vinculadas y mantener un registro de auditores o auditoras y consultores o consultoras.* 11. *Promover la oportuna rendición de cuentas por los funcionarios encargados o funcionarias encargadas de la administración, custodia o manejo de fondos o bienes públicos, de acuerdo con las normas que dicte la Contraloría General de la República.* 12. *Realizar y promover actividades de adiestramiento y capacitación de personal, en materia de control y auditoría.* 13. *Atender las consultas que se le formulen en el área de su competencia.*”

[275] En lo que tiene que ver con funciones en concurrencia con otros órganos o autoridades, el artículo 5 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), establece que “... *El sistema de control interno actuará coordinadamente con el sistema de control externo a cargo de la Contraloría General de la República, tiene por objeto promover la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos, el acatamiento de las normas legales en las operaciones del Estado, la confiabilidad de la información que se genere y divulgue sobre los mismos; así como mejorar la capacidad administrativa para evaluar el manejo de los recursos del Estado y garantizar razonablemente el cumplimiento de la obligación de los funcionarios o funcionarias de rendir cuenta de su gestión*”.

se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional. 9. *Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social.* 10. *Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos o dirigidas por algunas de las personas referidas en este artículo, cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio, efectuados por una o varias de las personas referidas en el presente artículo, represente el cincuenta por ciento o más de su presupuesto*”.

[276] Asimismo, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal⁸⁵ (LOCGRSNCF) señala en su artículo 9 que *“la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna ejercerá la coordinación, supervisión y orientación del control interno que conforman el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada funcionalmente, sin que ello implique el ejercicio de funciones propias de los órganos de control fiscal, y esta sujeta, en su condición de integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, a las directrices, lineamientos e instrucciones que dicte la Contraloría General de la República, como órgano rector de dicho Sistema”*⁸⁶

[277] En relación con los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) dispone que *“Cuando el órgano que esté conociendo de un asunto se considere incompetente deberá remitir las actuaciones al órgano que estime con competencia en la materia, si éste se considera a su vez incompetente; o si ambos se consideran competentes, el asunto será resuelto por el órgano superior jerárquico común. Los conflictos a los que se refiere el presente artículo sólo podrán suscitarse entre unidades administrativas sobre los cuales no haya recaído decisión administrativa definitiva o finalizado el procedimiento administrativo”*.⁸⁷

[278] Respecto de los mecanismos de coordinación interinstitucional, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que *“La SUNAI mantiene excelentes relaciones con la C.G.R y demás órganos de control fiscal dentro del marco del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como con las máximas autoridades de los órganos y entes del Ejecutivo Nacional y de los otros Poderes Públicos. Estos mecanismos se llevan a cabo en unos casos, a través de solicitudes de apoyo e información; en otros casos, mediante la suscripción de convenios interinstitucionales y la ejecución de mesas o equipos de trabajo sobre casos particulares que redunden en la solución de algunos de nuestros cometidos.”*⁸⁸

[279] En relación con la manera en la que se adoptan las decisiones, el Estado analizado en su respuesta manifiesta que: *“Las decisiones adoptadas por la SUNAI son de carácter unipersonal, y son tomadas por su máxima autoridad, el o la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, quien dará cuenta de su gestión al Presidente o Presidenta de la República, al Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y a la Contraloría General de la República, sobre los asuntos comprendidos en el ámbito de su competencia.”*⁸⁹

[280] Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI informaron que estas decisiones son recurribles mediante la potestad de autotutela, así como los recursos de reconsideración, de revisión, jerárquico, y contencioso-administrativo.⁹⁰

[281] En relación con la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, el Estado analizado en su respuesta informa que el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), señala que, la *“Superintendencia Nacional de Auditoría Interna estará a cargo de un funcionario o funcionaria denominada*

⁸⁵ Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial N° 39.240, de fecha 12/08/2009. Información disponible en: <http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=052>

⁸⁶ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 88.

⁸⁷ LOAP <http://www.inapymi.gob.ve/documentos/5890E%20Supresion%20FONCREI.pdf>

⁸⁸ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 94.

⁸⁹ *Ídem*, pp. 89.

⁹⁰ Ver presentación en PowerPoint http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ana_sun.pdf

*Superintendente Nacional de Auditoría Interna, quien será designado (a) por el Presidente (a) de la República y dará cuenta de su gestión a este (a) y al Vicepresidente (a) Ejecutiva. Dicho cargo será de libre nombramiento y remoción del o la Presidente de la República”.*⁹¹

[282] Respecto a la manera en que se determinan los recursos humanos para su funcionamiento y la manera en que son provistos los mismos, el Estado analizado en su respuesta informa que *“La Ley del Estatuto de la Función Pública regula las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estatales y municipales, por lo que aplica a la SUNAI.*

[283] *“En tal sentido, el sistema de administración de personal de la SUNAI, incluye entre otros, la planificación de los recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingresos, inducción, capacitación y régimen disciplinario y se rige por las disposiciones legales contenidas en la citada Ley.”*⁹²

[284] Asimismo, el régimen de responsabilidad y disciplinario del personal de la SUNAI se rige por la Ley del Estatuto de la Función Pública y el Reglamento de la Carrera Administrativa.

[285] Por otra parte, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional (LOAPN), dispone que *“Cada ente u órgano de la administración Pública Nacional tendrá una unidad de auditoría interna...”*

[286] Asimismo, el artículo 25 de la misma LOAPN dispone que los titulares de los órganos de auditoría interna serán designados mediante concurso organizado y celebrado de conformidad con lo previsto en las bases dictadas al efecto por el Contralor General de la República, con participación de un representante de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna en el jurado calificador. El mismo artículo dispone que el período de ejercicio del cargo de titular de órgano de auditoría interna es de cinco años y que concluido este período, los titulares podrán participar, por una sola vez, en un nuevo concurso.

[287] De conformidad con el artículo citado en el párrafo anterior, el nombramiento o designación corresponde a la máxima autoridad jerárquica del respectivo órgano o ente, y los titulares así designados no podrán ser despedidos sin la autorización del Contralor General de la República, a cuyo efecto la máxima autoridad del organismo le remitirá el expediente respectivo.

[288] En relación con la existencia de manuales u otros documentos para el desarrollo de las tareas, en los que se describan las funciones del personal a su servicio, y sobre si se les imparte capacitación periódica sobre dichas funciones, el Estado analizado en su respuesta informa que cuenta el Manual Descriptivo de Cargos/Estructura de Cargos y que realiza actividades de capacitación para sus funcionarios sobre las diversas áreas de auditoría y de control interno.⁹³

[289] Por otra parte, el Estado analizado informa que cuenta con procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, así como de manuales de procedimientos e instructivos, tales como los manuales e instructivos de procedimiento entre los cuales se destacan el Modelo Organizativo y Manual de Organización de la SUNAI, así como otros manuales y guías que se encuentran listados en la respuesta al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda.⁹⁴

⁹¹ *Ídem.*

⁹² *Ídem* pp. 89.

⁹³ *Ídem*, pp. 92.

⁹⁴ *Ídem* pp. 89-90.

[290] En lo que tiene que ver con acciones de fortalecimiento institucional, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que se han llevado a cabo jornadas de sensibilización y capacitación de las Unidades de Auditoría Interna en el Sistema de Registro y Seguimiento de Planes de Trabajo, así como pruebas pilotos del Sistema de Información Gerencial de Fortalecimiento en las UAI (SIGEFUAI). Todo ello con el fin de proveer las herramientas tecnológicas que permitan mejorar la gestión de control interno, auditoría interna y contraloría social en la APN. De igual manera, se realizaron actualizaciones y validaciones del Sistema de Evaluación del Sistema de Control Interno y se fortaleció con Tecnología de Información el Área de Auditoría, Control Interno y Unidades de Apoyo de la SUNAI.⁹⁵

[291] En lo concerniente a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores el Estado analizado tanto en su respuesta al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda como en la visita *in situ*, puso de presente que entre otras cosas la SUNAI, a través de la Oficina de Consultoría Jurídica, ha suscrito convenios con el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) y el Sistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos de la República Bolivariana de Venezuela (VENCERT), con la finalidad de facilitar el desarrollo de las actividades tecnológicas del organismo.⁹⁶

[292] En relación con la difusión de sus objetivos y funciones, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que la SUNAI cuenta con una página de Internet, en la cual se publican todos los aspectos referidos a la estructura organizativa de la misma, su base legal, filosofía de gestión, ejecución presupuestaria, así como las actividades realizadas en ejecución de sus competencias. Asimismo, informaron que la institución con una Oficina de Atención al Ciudadano donde se da orientación al público; y que además cuentan con una serie de trípticos y material de información pertinente que son distribuidos entre la ciudadanía y los servidores públicos.⁹⁷

[293] En lo que tiene que ver con los mecanismos de control interno, la SUNAI, dentro de su estructura organizativa, cuenta con una Unidad de Auditoría Interna (UAI)⁹⁸. En ese sentido, durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI pusieron de presente que corresponde a la Vicepresidencia de la República y a la CGR velar por el control interno de éste organismo. Adicionalmente, el control interno del ente se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento; Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público; Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional; las Normas Generales de Control Interno; habiendo expedido además el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente.⁹⁹

[294] Por lo que respecta a la manera en que se da atención a los reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Estado analizado en su respuesta puso de presente que la ciudadanía puede presentar sus denuncias a través de la Oficina de Atención al Ciudadano.¹⁰⁰ Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI manifestaron que los reclamos, quejas y denuncias pueden

⁹⁵ *Ídem*, pp. 93.

⁹⁶ *Ídem*, pp. 93. Ver también presentación en PowerPoint
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_sunai_pres_pan_14.pdf

⁹⁷ *Ídem*, pp. 93.

⁹⁸ Ver <http://www.sunai.gob.ve/index.php/estrategia-institucional/estructura-organizativa>

⁹⁹ Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ana_sun.pdf

¹⁰⁰ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 94.

también presentarse a través de la UAI o a través del buzón electrónico que aparece en la página de Internet de la SUNAI dentro del espacio dedicado a la Oficina de Atención al Ciudadano, y que además contaban con las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana y con la Resolución No. 01-00-55, que dicta el Instructivo en Materia de Denuncias.¹⁰¹

[295] En relación con la manera en que se garantizan los recursos presupuestarios para el funcionamiento de la SUNAI, el Estado analizado en su respuesta ofrece la siguiente información: *“Los recursos presupuestarios para el funcionamiento de la SUNAI se solicitan a través del proceso de formulación presupuestaria, cuyos lineamientos son emanados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y normados por instructivos emitidos de la Oficina Nacional de Presupuesto...”*¹⁰²

[296] En lo relativo a la obligación de rendir cuentas, el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera (LOAF) dispone que *“La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna deberá informar: 1. Al Presidente o Presidenta de la República, al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, así como al Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, acerca de la gestión, financiera y operativa de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia...”*

[297] En ese sentido, el Estado analizado en su respuesta informa que la información para la preparación de las memorias anuales se recopila *“a través del seguimiento que se realiza a todos los proyectos de la SUNAI por la Gerencia de Planificación Estratégica y los reportes de Ejecución Presupuestaria y Financiera que emite el Sistema de Gestión y Administración de las Finanzas Públicas, con los cuales se elabora trimestralmente el informe de ejecución físico-financiera.”*¹⁰³

[298] Igualmente, en relación con la manera en que esta información se hace pública de manera que la ciudadanía pueda tener acceso a ella, en la misma respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente que *“La memoria y cuenta, luego de ser aprobada por las autoridades competentes y presentada a la Asamblea Nacional, es publicada en la página Web de la Institución a disposición de los ciudadanos, y puede ser consultada físicamente en las instancias de la Superintendencia.”*¹⁰⁴

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[299] La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) tiene un conjunto de disposiciones y/u otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1. de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[300] En primer lugar, en lo que se refiere al tema de los recursos humanos, el Comité toma nota que el Estado analizado en su respuesta pone de presente que el Manual Descriptivo de

¹⁰¹ Ver presentación en PowerPoint

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_sunai_pres_pan_15.pdf y la Resolución No. 01-00-055 “Instructivo en Materia de Denuncias”

<http://www.cgr.gob.ve/pdf/leyes/CGRINSTRUCTIVODENUNCIAS.pdf>

¹⁰² Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 94.

¹⁰³ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 95.

¹⁰⁴ *Ídem.*

Cargos/Estructura de Cargos se encuentra en proceso de revisión por ajustes en la estructura de la SUNAI.¹⁰⁵

[301] Sobre el particular, durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI explicaron que esto se debía a que al momento el ente se encontraba en proceso de reestructuración y que por consiguiente el Manual Descriptivo de Cargos se encontraba siendo revisado por el Ministerio de Planificación ya que existía la necesidad de hacer una homologación para que el trabajo y la escala salarial sean unificados a través de toda la administración nacional, sobre todo teniendo en consideración de que había funcionarios que estaban debajo de los niveles de la escala.

[302] En ese sentido, explicaron que hasta tanto no se concluyera con esta revisión, el Ministerio de Planificación no podría autorizar se llevaran a cabo concursos ya que la descripción de funciones de los puestos vacantes tendría que armonizar con la nueva estructura y Manual Descriptivo de Cargos.

[303] Al respecto, el Comité estima oportuno que el Estado analizado considere concluir a la brevedad con la revisión de la estructura y Manual Descriptivo de Cargos de la SUNAI, y reanudar los concursos para el reclutamiento del personal necesario, sobre todo teniendo en cuenta que los representantes de la SUNAI informaron que al momento de la visita tenían 72 cargos vacantes que era necesario llenar y que el último concurso había tenido lugar en 2005. En ese sentido, el Comité también advierte que el Estado analizado en su respuesta señala como una de sus dificultades la “*Omisión de las disposiciones legales y sublegales para el reclutamiento y selección del Talento Humano*”.¹⁰⁶ El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 4.4.1. y 4.4.2. del Capítulo II de este informe).

[304] En ese mismo orden de ideas, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta también pone de presente que tanto el Modelo Organizativo y Manual de Organización de la SUNAI, como la mayoría de sus manuales y normas de procedimientos se encuentran también en proceso de revisión por ajustes en la estructura del ente. Al respecto, el Comité estima oportuno que el Estado analizado concluya a la brevedad con la revisión de estos manuales y la estructura del ente, a los efectos de que pueda cumplir a cabalidad con sus funciones.¹⁰⁷ El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.3. del Capítulo II de este informe).

[305] Por otra parte, el Comité advierte que cada ente u órgano de la administración pública cuenta con una unidad de auditoría interna (UAI), y que la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAPN) dispone que sus titulares deberán ser designados por concurso organizado y previsto en las bases dictadas al efecto por el Contralor General de la República, con la participación de un representante de la SUNAI en el jurado calificador¹⁰⁸.

[306] No obstante lo anterior, durante la visita *in situ* los representantes de la SUNAI pusieron de presente que en la actualidad no todos los auditores internos están siendo nombrados por concurso y que la SUNAI se encuentra haciendo campaña para que estos reclutamientos sean llevados a cabo mediante el debido concurso, lo cual ayudaría además a evitar conflictos de intereses sobre todo en aquéllos casos en los cuales el puesto del auditor interno depende enteramente del supervisor quien lo nombra y lo remueve de acuerdo a su propia discreción. El Comité estima aconsejable que el Estado analizado considere tomar las medidas pertinentes a los efectos de asegurar que los nombramientos de todos los auditores internos sean llevados a cabo a

¹⁰⁵ *Ídem*, pp. 90.

¹⁰⁶ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 96.

¹⁰⁷ *Ídem*, pp. 90-91.

¹⁰⁸ Artículo 25 de la LOAPN.

través del respectivo concurso de méritos y oposición, observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.4. del Capítulo II de este informe).

[307] En segundo lugar, durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI expresaron entre sus dificultades la falta de remisión oportuna a la autoridad competente, por parte de las UIA, de los expedientes en los cuales se ha encontrado indicios de responsabilidad penal, ya que en muchas ocasiones esta información es remitida a los medios de comunicación antes o en lugar de darles curso a la CGR o el Ministerio Público, en violación de los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas necesarias a los fines de asegurar que todas las UAI den curso a la autoridad competente de manera oportuna de aquéllos expedientes en los que se ha encontrado indicios de responsabilidad penal como resultado de sus actuaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación vigente. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.5. del Capítulo II de este informe).

[308] En tercer lugar, en relación con los mecanismos de control interno de la SUNAI, el Comité toma nota de que si bien ha expedido el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, el cual en su sección titulada “1. Presentación”, dispone que el mismo *“contiene las normas mínimas de control interno que deben ser adoptadas por los funcionarios responsables del manejo y control de los recursos y bienes de la administración central y descentralizada funcionalmente”*, y que su propósito principal es *“servir de guía para el establecimiento de los sistemas de control interno en los entes públicos”*.¹⁰⁹

[309] Sobre el particular, el Comité advierte que si bien el citado el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente ha sido expedido por la SUNAI para servir de guía para el establecimiento de los sistemas de control interno de los entes públicos, aún no ha expedido un Manual de Normas de Control Interno específico para sí mismo, con base en el modelo genérico de la referencia. Adicionalmente, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que entre sus dificultades se encuentra la *“Carencia de políticas, normas y procedimientos dentro de la organización, destacando las áreas de Administración y Finanzas”*.¹¹⁰ En ese sentido, el Comité estima que sería de gran utilidad al Estado analizado expedir un Manual de Normas de Control Interno específicamente para la SUNAI, con base en el modelo expedido por el ente, que contemple políticas, normas y procedimientos adecuados, así como los mecanismos para su efectiva implementación, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.6. del Capítulo II de este informe).

[310] En cuarto lugar, en lo que respecta a la manera en que se da atención a los reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Comité toma nota de que la SUNAI cuenta con varios mecanismos de recepción de denuncias, tales como la Oficina de Atención al Ciudadano y su UAI. Por otra parte, cuentan con las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana y el Instructivo en Materia de Denuncias, ambos expedidos por la CGR.

[311] Sin embargo, el Comité advierte que las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, si bien regulan la recepción de denuncias a través de las Oficinas de Participación Ciudadana, no

¹⁰⁹ Ver Manual de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, 1. Presentación, pp. 3

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_man_con_int_sun.pdf

¹¹⁰ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 96.

regulan el procedimiento interno atención de las mismas una vez que son remitidas a la SUNAI¹¹¹. De la misma manera, el Instructivo en Materia de Denuncias, si bien se refiere a la recepción de denuncias y la admisibilidad de las mismas; las consecuencias de denuncias falsas e infundadas, o que versen sobre hechos que no ameriten averiguación o cuya sustanciación no corresponda a la CGR; la devolución de documentos originales y la no admisibilidad de denuncias anónimas, no establece el curso que se le dará a las denuncias una vez receptadas por la SUNAI. Por todo lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere la expedición de un manual de procedimientos para quejas y denuncias específico para la SUNAI y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.7. del Capítulo II de este informe).

[312] En ese mismo orden de ideas, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI manifestaron que una de las maneras en que la ciudadanía puede presentar sus quejas y denuncias es a través del buzón que aparece en el enlace de la Oficina de Atención al Ciudadano en la página de Internet de la SUNAI. Sobre el particular, el Comité nota que antes de poder acceder al citado buzón electrónico, el usuario debe pasar por varias pantallas. En efecto, primero hay que entrar al enlace llamado “*Directorio*” y después acceder al enlace “*Ofic. de Preven., Atención a la Ciud. y Aud Social*”, tras lo cual aparece el correo electrónico de esta Oficina. Sin embargo, no se ofrece ninguna explicación de que dicha dirección de Internet esté dedicada específicamente a la recepción de quejas y denuncias ni se ofrece ninguna instrucción. Por otra parte, en la página de entrada de la SUNAI aparece un enlace para comunicarse directamente con este ente, pero el usuario debe tener una cuenta y clave para poder accederlo.

[313] Sobre el particular, el Comité estima que sería de utilidad para el Estado analizado considerar colocar un buzón dedicado a la recepción de quejas y denuncias directamente en la página de entrada del portal de Internet de la SUNAI, que contenga instrucciones concerniente al proceso de dichas quejas y denuncias, de manera de que la ciudadanía pueda fácilmente hacer uso de esta herramienta, así como una línea telefónica gratuita para que las personas que no tengan acceso a la Internet puedan denunciar los actos de corrupción que lleguen a su conocimiento o formular reclamaciones contra los presuntos autores de los actos de corrupción de los que ellas sean víctimas. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 4.4.8. y 4.4.9. del Capítulo II de este informe).

[314] En quinto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI expresaron que entre sus dificultades se encontraba la insuficiencia del presupuesto asignado al ente para poder llevar a cabo sus funciones y para fortalecer el sistema de control interno y hacerlo más eficiente; así como la necesidad de contar más personal para poder cumplir cabalmente con sus funciones como puede evidenciarse de los 72 cargos adicionales solicitados y pendientes de aprobación por el Ministerio de Planificación mencionados en párrafos anteriores. En ese sentido, agregaron que están haciendo una solicitud para un incremento en la asignación presupuestaria. Sobre el particular, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado considerar el fortalecimiento de la SUNAI, proveyéndole de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para el cabal funcionamiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.10. del Capítulo II de este informe).

[315] En sexto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI pusieron de presente entre sus dificultades que existía una necesidad de unificar y actualizar los criterios en materia de control interno utilizados por las UAI a los efectos de hacer el proceso de evaluaciones más eficiente y poder enfrentar mejor el reto de la corrupción. Cabe agregar, que la actualización pertinente de criterios en materia de control interno fue también mencionado entre las

¹¹¹ Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_norm_part_ciud.pdf y <http://www.cgev.gov.ve/normativas/18%20NFPC.pdf>

necesidades específicas de cooperación técnica¹¹². Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas que considere necesarias para la actualización pertinente de criterios en materia de control interno utilizados por las UIA, para hacer más efectiva la evaluación y enfrentar mejor el reto de la corrupción, para lo cual podría tomar varias medidas tales como mapas de riesgo, mesas técnicas de trabajo, conversatorios y otros. y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.11. del Capítulo II de este informe).

[316] En séptimo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI pusieron de presente como una dificultad en la labor preventiva del sistema de control interno que la metodología de trabajo de los auditores internos había sido enfocada hacia la evaluación posterior de los procesos, dejando de lado la evaluación preventiva de los mismos. Al respecto, expresaron que existía una necesidad de *“Realizar con más frecuencia evaluaciones preventivas, las cuales permitan diagnosticar con antelación las posibles debilidades y así se elaboren los respectivos planes de acciones correctivas”*. Cabe agregar, que ambos temas fueron también mencionados por los representantes de la SUNAI entre sus necesidades de cooperación técnica¹¹³. El Comité, teniendo en consideración la importancia de la labor preventiva en la lucha contra la corrupción, formulará recomendaciones (ver recomendaciones 4.4.12. del Capítulo II de este informe).

[317] En octavo lugar, el Comité también toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI también expusieron entre sus dificultades que existía una necesidad de establecer una política comunicacional divulgativa adecuada para dar a conocer las competencias y funciones del ente dentro de la dinámica de la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada funcionalmente, así como los recursos necesarios para su implementación. En ese sentido, el Estado analizado también pone de presente entre sus necesidades de cooperación técnica que necesitan fortalecer el área comunicacional de la SUNAI para consolidar sus competencias y funciones dentro de la Dinámica Nacional Central y Descentralizada funcionalmente. Teniendo en consideración la importancia que tiene el control interno y su consolidación dentro de la estructura de la administración pública, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.13. del Capítulo II de este informe).

[318] Igualmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI manifestaron como una dificultad que no todos los auditores internos conocen los lineamientos y políticas emanados por el gobierno, lo que dificulta la tarea de control interno. Teniendo en consideración la importancia que tiene el contar con UAI eficaces y eficientes, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado considerar proveer a la SUNAI con los recursos necesarios a los efectos de capacitar a todos los auditores internos, dentro de los recursos disponibles, y formular estrategias de comunicación que les permitan estar al día con los lineamientos y políticas de control interno emanados por el Estado y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.14. del Capítulo II de este informe).

[319] En ese mismo orden de ideas, durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI expresaron que en muchos casos las UAI no reciben el apoyo y reconocimiento por parte de los organismos de los que forman parte, lo que hace que se dilaten los procesos. En ese sentido, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado considerara tomar las medidas pertinentes a los fines de apoyar y fortalecer las UAI dentro de los organismos de que forman parte a los fines de optimizar la eficiencia de los procesos de control interno. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.15. del Capítulo II de este informe).

¹¹² Ver documento suministrado por la SUNAI, pp. 14

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ana_sun.pdf

¹¹³ *Ídem*.

[320] Adicionalmente, manifestaron que los canales de comunicación con los órganos bajo su control no son lo más apropiados en ciertas áreas, lo que limita el flujo de información resultando entre otras cosas en demoras en la entrega de la información solicitada a los organismos. En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado optimizar los canales de comunicación entre la SUNAI y los entes bajo su control y establecer mecanismos encaminados a asegurar que la información solicitada sea remitida en tiempo y en forma a la SUNAI y a las UAI. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.16. del Capítulo II de este informe).

[321] Finalmente, durante la visita *in situ* los representantes de la SUNAI pusieron de presente que sus necesidades de cooperación técnica están enfocadas en compartir experiencias y conocer con antelación la creación de nuevos procesos económicos, administrativos y productivos; la actualización pertinente en materia de control interno para hacer más efectiva la evaluación, mediante mesas técnicas de trabajo, debates, conversatorios, entre otros; la realización más frecuente de evaluaciones preventivas que permitan diagnosticar con antelación las posibles debilidades y así se elaboren los respectivos planes de acciones correctivas; el seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el organismo para atender a las observaciones reflejadas en la evaluación del control interno; el fortalecimiento en el área comunicacional de la SUNAI para consolidar sus competencias y funciones dentro de la dinámica de la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada funcionalmente, la capacitación y sensibilización a las máximas autoridades y a los servidores públicos en materia de gestión pública y control interno; la evaluación del Sistema de Control Interno de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional; y asesoría técnica en materia de control interno. Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por la CGR, de la necesidad de que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, especialmente a sus Instituciones de Auditoría Interna, así como a otras organizaciones de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.17. del Capítulo II de este informe).

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[322] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), de la cual se destaca la siguiente:

[323] En primer lugar, en lo que se refiere a actividades de prevención de las prácticas corruptas, el Estado analizado en su respuesta presenta información de la cual se destaca la siguiente:

[324] Durante la visita *in situ*, los representantes de la SUNAI informaron que de 2011 a octubre de 2014, se había capacitado a 7,894 personas y proporcionó el siguiente cuadro estadístico:¹¹⁴

CUADRO No. 1

¹¹⁴ Ver presentación en PowerPoint, pp.13 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ana_sun.pdf

Temática	2011	2012	2013	2014	Total Asistentes
Control Interno	1556	763	288	0	2607
Examen de la Cuenta	150	131	67	72	420
Contrataciones Publicas	162	578	114	56	910
Gestión Pública	0	0	276	296	572
Audidores de Estado	92	484	417	188	1181
Potestad Investigativa	427	249	139	25	840
Valoración Jurídica	0	0	437	58	495
Ley de Procedimientos Administrativos	0	62	109	128	299
Responsabilidad supervisora y régimen disciplinario	0	0	14	0	14
Fortalecimiento de las UAI en la APN	189	0	0	0	189
Concursos para la designación de los titulares de las UAI de la APN	175	27	56	0	258

[325] Sobre el particular, el Comité observa que en este cuadro no aparecen estadísticas correspondientes a los años 2009 y 2010. Sin embargo, el Comité estima que la anterior información sirve para demostrar que en la SUNAI ha desarrollado acciones de prevención de actos de corrupción, en cumplimiento de las funciones que les corresponden en esta materia.

[326] No obstante lo anterior, de la información estadística anterior puede apreciarse que el número de personas capacitadas ha ido disminuyendo gradualmente, en algunos casos a cero, en las materias correspondientes a control interno, examen de la cuenta, contrataciones públicas, auditores del Estado, potestad investigativa, valoración jurídica, responsabilidad supervisora y régimen disciplinario, fortalecimiento de las UAI en la Administración Pública Nacional (APN), y concursos para la designación de los titulares de las APN. En ese sentido, el Comité advierte que el Estado analizado en su respuesta señala como una de sus dificultades el “*Desconocimiento de las herramientas, mecanismos e indicaciones por parte de los servidores públicos en la implementación y aplicación del control interno en las actividades que realizan*”.¹¹⁵

[327] En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas necesarias a los fines de proporcionar las capacitaciones adecuadas sobre prevención de la corrupción y fortalecimiento de los controles internos a los funcionarios de la APN, además de completar las estadísticas sobre los resultados de la gestión preventiva de actos de corrupción de la SUNAI, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 4.4.18. y 4.4.19. del Capítulo II de este informe).

¹¹⁵ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 96.

[328] En segundo lugar, durante la visita *in situ* los representantes de la SUNAI manifestaron que “La SUNAI desde el año 2010 hasta fecha, ha realizado 165 evaluaciones de Sistema de Control Interno, desglosadas de la siguiente forma”:

CUADRO No. 2

Año	Evaluaciones SCI	Porcentaje	Clasificación
2010	25	70 %	Débil
2011	30	27 %	Moderado
2012	48	3%	Satisfactorio
2013	50		
2014	12		

[329] Sobre el particular, el Comité advierte que de la información estadística ofrecida en el Cuadro No. 2, puede apreciarse que el número de evaluaciones del Sistema de Control Interno hechas por la SUNAI aumentó de 2010 a 2013, teniendo en cuenta que 2014 solamente ofrece información a octubre de ese año. Sin embargo, falta la información correspondiente a 2008-2009, que habría que complementar para poder hacer una evaluación más completa de los datos.

[330] Igualmente, de la información disponible no es posible dilucidar si es que se han realizado evaluaciones en 165 órganos de la Administración Pública Nacional (APN), o si es que se han efectuado 165 evaluaciones en un número total menor de órganos de la APN, como tampoco indica qué es exactamente lo que se está evaluando, lo que dificulta la evaluación integral de la información. Por otra parte, el cuadro estadístico de la derecha indica que únicamente el 3% de las evaluaciones han sido satisfactorias, con un 27% clasificadas como “Moderado” y 70% “Débil”.

[331] Teniendo eso en consideración, el Comité considera que la implementación de las recomendaciones formuladas por la SUNAI a los órganos evaluados resultantes de estos ejercicios revisten la mayor importancia para el fortalecimiento de los controles internos de los órganos de la APN, en la prevención y lucha contra la corrupción. Sin embargo, no se ofrece información alguna sobre el estado de implementación de estas recomendaciones.

[332] Aunado a ello, el Comité toma nota que el Estado analizado en su respuesta señala entre sus dificultades la “Escasa supervisión y seguimiento a los proyectos, actividades y tareas establecidas en los Planes Operativos, así como la carencia de Indicadores de Gestión”.¹¹⁶

[333] Al respecto, durante la visita *in situ* los representantes de la SUNAI pusieron de presente entre sus dificultades que la institución no cuenta con facultades coercitivas suficientes para que las recomendaciones que formulan a los órganos y entes de la APN bajo su control sean implementadas de una manera más expedita. En ese sentido, agregaron que se encuentran haciendo sugerencias a nivel legal de manera que se lleve a cabo una modificación a la Ley de Administración Financiera del Sector público que contemple otorgar a la SUNAI facultades coercitivas encaminadas a estos fines.

¹¹⁶ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 96.

[334] En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere desarrollar estadísticas de para dar seguimiento a los proyectos, actividades y tareas establecidas en los Planes Operativos, conocerse cuántos órganos fueron evaluados, cuántas recomendaciones se formularon a cada uno de ellos, así como el nivel de implementación de las mismas. De la misma manera, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado considerar tomar las medidas legislativas pertinentes para revestir a la SUNAI con las facultades coercitivas necesarias para hacer cumplir las recomendaciones que formula a los órganos de la APN, dentro de las atribuciones que le concede la ley como órgano rector del Sistema de Control Interno. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 4.4.20. y 4.4.21. del Capítulo II de este informe).

[335] En tercer lugar, el Comité toma nota de que la SUNAI no tiene facultades de investigación y sanción de actos corruptos que generan responsabilidad penal, y que durante la visita *in situ* los representantes de la SUNAI explicaron que si bien la institución coordina la labor de las UAI, en realidad son estas unidades las que conducen las auditorías de cada órgano y las que tienen la capacidad para detectar indicios de hechos punibles como resultado de sus actuaciones. Igualmente, informaron que si bien las UAI tienen la obligación de dar curso a la autoridad competente para su investigación y posible sanción de los expedientes en los cuales se ha encontrado indicios de responsabilidad penal, no tienen obligación de notificar a la SUNAI de estos hechos y por lo tanto no les es posible compilar información estadística que muestre cuántos casos fueron remitidos a estas autoridades ni cuál fue su destino.

[336] Sobre el particular, el Comité considera que si bien la SUNAI no tiene funciones de investigación y sanción de actos de corrupción que generan responsabilidad penal, sí es la autoridad responsable del control interno de los órganos y entes del Estado y que convendría al Estado analizado considerar la posibilidad de establecer la obligación de las UIT de informar a la SUNAI sobre el número de casos en los que se han encontrado indicios de hechos punibles que generan responsabilidad penal y se ha dado curso a la CGR o al MP para su investigación y sanción. así como establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional con la CGR y el MP a los fines de dar seguimiento a estos casos, de manera que la SUNAI pueda llevar estadísticas con el objeto de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. Al respecto, el Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 4.4.22. y 4.4.23 del Capítulo II de este informe).

[337] Finalmente, el Comité advierte que el Estado analizado no ofreció ninguna información respecto de los resultados de los procedimientos disciplinarios internos resultantes de conductas corruptas de los funcionarios de la SUNAI, ni en la respuesta al cuestionario ni durante la visita *in situ*. Sobre el particular, el Comité estima que el Estado analizado podría considerar compilar la información estadística respecto de los procesos disciplinarios en la SUNAI relacionados con prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, de manera de que pueda conocerse el número total de casos investigados en los últimos cinco años, el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, a los fines de identificar retos y recomendar la adopción de medidas correctivas, de ser necesario (ver recomendación 4.4.24 del Capítulo II de este informe).

4.4. Conclusiones y recomendaciones

[338] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[339] La República Bolivariana de Venezuela ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este informe.

[340] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 4.4.1. Concluir a la brevedad la revisión del Manual Descriptivo de Cargos de la SUNAI, asegurando que la clasificación y escala de sueldos estén armonizados con el sistema nacional (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.2. Reanudar a la brevedad la celebración de concursos de méritos y oposición para reclutar al personal de la SUNAI, asegurando que sean llevados a cabo con base en los principios de publicidad, equidad y eficiencia (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.3. Concluir a la brevedad la revisión del Modelo Organizativo y Manual de Organización de la SUNAI, así como de aquéllos otros de sus manuales y normas de procedimientos internos que se encuentran bajo actualmente bajo este proceso (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.4. Tomar las medidas pertinentes a los efectos de asegurar que los nombramientos de todos los auditores internos sean llevados a cabo a través del respectivo concurso de méritos y oposición, observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.5. Tomar las medidas que considere necesarias a los fines de asegurar que todas las Unidades de Auditoría Interna (UAI) cumplan en todos los casos con la obligación de dar curso oportunamente a la autoridad competente de los expedientes en que se ha encontrado indicios de responsabilidad penal como resultado sus actuaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en su legislación vigente (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.6. Expedir un manual de normas de control interno específico para la SUNAI, con base en el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente que contemple políticas, normas y procedimientos adecuados, así como los mecanismos para su efectiva implementación (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.7. Expedir un manual de procedimientos para quejas y denuncias específico para la SUNAI que contemple no solamente el procedimiento de recepción, pero también el curso que se dará internamente a estas quejas y denuncias una vez receptadas por el ente (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.8. Colocar un buzón electrónico dedicado a la recepción de quejas y denuncias concernientes al cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, directamente en la página de entrada del portal de Internet de la

SUNAI, que contenga instrucciones claras, de manera de que la ciudadanía pueda fácilmente hacer uso de esta herramienta (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).

- 4.4.9. Poner a disposición de la SUNAI una línea telefónica gratuita para que las personas que no tengan acceso a la Internet puedan denunciar los actos de corrupción que lleguen a su conocimiento o formular reclamaciones contra los presuntos autores de los actos de corrupción de los que ellas sean víctimas (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.10. Fortalecer a la SUNAI dotándola de los recursos humanos y presupuestarios que se requieran para asegurar el cabal cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles (ver sección 4.2 del Capítulo II de este informe).
- 4.4.11. Tomar las medidas necesarias para actualizar y unificar los criterios utilizados por las UIA en materia de control interno, a los fines de hacer más efectiva la evaluación de los entes bajo su control y enfrentar más eficazmente el reto de la corrupción (ver sección 4.2 del Capítulo II de este informe).
- 4.4.12. Tomar las medidas pertinentes para fortalecer la labor preventiva del sistema de control interno bajo el control de la SUNAI, de manera que pueda diagnosticarse con antelación las posibles debilidades de los entes evaluados y elaborarse los planes de acciones correctivas que correspondan (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.13. Establecer una política comunicacional divulgativa adecuada para dar a conocer las competencias y funciones de la SUNAI dentro de la dinámica de la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada funcionalmente a los efectos de consolidar sus competencias y funciones en este entorno, dotándole de los recursos humanos y presupuestarios que se requiera para su implementación, dentro de los recursos disponibles (ver sección 4.2. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.14. Proveer a la SUNAI con los recursos humanos y presupuestarios que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los efectos de capacitar a todos los auditores internos y formular estrategias de comunicación que les permitan estar al día con los lineamientos y políticas de control interno emanados por el Estado (ver sección 4.2 del Capítulo II de este informe).
- 4.4.15. Tomar las medidas pertinentes a los fines de apoyar y fortalecer las UAI dentro de los organismos de que forman parte (ver sección 4.2 del Capítulo II de este informe).
- 4.4.16. Optimizar los canales de comunicación entre la SUNAI y los entes bajo su control y establecer mecanismos encaminados a asegurar que la información solicitada sea remitida en tiempo y en forma a la SUNAI y a las UAI (ver sección 4.2 del Capítulo II de este informe).
- 4.4.17. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para proveer a la SUNAI, como órgano rector del Sistema de Control Interno (SCI), con la cooperación técnica necesaria para garantizar el funcionamiento eficiente y eficaz de los entes que conforman el SCI (ver sección 4.2 del Capítulo II de este informe).

- 4.4.18. Tomar las medidas necesarias a los fines de proporcionar las capacitaciones adecuadas para la prevención de la corrupción y fortalecimiento de los controles internos a los funcionarios de la Administración Pública Nacional bajo el ámbito de su control (ver sección 4.3. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.19. Complementar las estadísticas sobre resultados relativos a sus funciones de prevención de la corrupción, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 4.3. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.20. Desarrollar estadísticas para dar seguimiento a los proyectos, actividades y tareas establecidas en los Planes Operativos, de manera que pueda conocerse cuántos órganos fueron evaluados, cuántas recomendaciones se formularon a cada uno de ellos, así como el nivel de implementación de dichas recomendaciones, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver sección 4.3. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.21. Considerar tomar las medidas legislativas pertinentes a los fines de revestir a la SUNAI con las facultades coercitivas necesarias a los fines de hacer cumplir las recomendaciones que formula a los órganos de la Administración Pública Nacional, dentro de las atribuciones que le concede la ley como órgano rector del Sistema de Control Interno (ver sección 4.3. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.22. Establecer la obligación de las UIT de informar a la SUNAI de aquéllos casos en los que se ha dado curso a la CGR o al MP para su investigación y procesamiento por haberse encontrado indicios de responsabilidad penal, de manera que la SUNAI pueda llevar las estadísticas correspondientes para identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario (ver sección 4.3. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.23. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con la CGR y con el MP, con el objeto de dar seguimiento a las causas transmitidas a estas autoridades por las UAI para su investigación y/o eventual sanción y conocer su destino final, de manera que la SUNAI pueda llevar las estadísticas correspondientes con el objeto de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (ver sección 4.3. del Capítulo II de este informe).
- 4.4.24. Compilar la información estadística respecto de los procesos disciplinarios en la SUNAI relacionados con prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, de manera de que pueda conocerse el número total de casos investigados, el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolucón; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, a los fines de identificar retos y recomendar la adopción de medidas correctivas, de ser necesario (ver Sección 4.3. del capítulo II de este informe).

5. DEFENSORÍA DEL PUEBLO (DP)

5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas.

[341] La Defensoría del Pueblo (DP) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[342] El artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) dispone que *“La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.”*

[343] En cuanto a sus objetivos, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (LODP), estos serán *“la promoción, defensa y vigilancia de: 1. Los derechos humanos. 2. Los derechos, garantías e intereses de todas las personas en relación con los servicios administrativos prestados por el sector público. 3. Los derechos, garantías e intereses de todas las personas en relación con los servicios públicos, sea que fueren prestados por personas jurídicas públicas o privadas.”*

[344] El artículo 281 de la CRBV establece las atribuciones del la DP, las cuales son las siguientes: *“1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento. 2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos. 3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data y las demás acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad con la ley. 4. Instar al Fiscal o a la Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos. 5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto a los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos. 6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del público consumidor y usuario, de conformidad con la ley. 7. Presentar ante los órganos legislativos municipales, estatales o nacionales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos. 8. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección. 9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos. 10. Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos, en virtud de lo cual desarrollará mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, de protección y defensa de los derechos humanos. 11. Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos. 12. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.”*

[345] Por cuanto a la autonomía de la DP, el artículo 5 de la LODP dispone que *“La Defensoría del Pueblo, como órgano integrante del Poder Ciudadano, es independiente de los demás poderes del Estado, y goza de autonomía organizativa, funcional, financiera y administrativa.”*

[346] El artículo 7 de la LODP define el ámbito de actuación de la DP, y establece que *“La actividad de la Defensoría del Pueblo abarca las actuaciones de cualquier órgano y funcionario o funcionaria perteneciente al Poder Público Nacional, Estatal o Municipal, en sus ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Militar y demás órganos del Poder Ciudadano. Abarca igualmente la actuación de particulares que presten servicios públicos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.”*

[347] En relación con la coordinación interinstitucional, el numeral 10 del artículo 281 de la CRBV establece entre las atribuciones de la DP *“Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protección de los derechos humanos, en virtud de lo cual desarrollará mecanismos de comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, de protección y defensa de los derechos humanos.”* Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la DP manifestaron que cuentan con un convenio formal de cooperación con la Contraloría General de la República (CGR).

[348] En lo concerniente al ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otras autoridades, el artículo 69 de la LODP establece que: *“En el ejercicio de sus funciones, la Defensoría del Pueblo actuará en colaboración con otras autoridades públicas, a través de los siguientes procedimientos, entre otros: 1. Cuando un asunto esté siendo conocido por otra autoridad, la Defensoría del Pueblo tendrá acceso a las informaciones y documentos pertinentes, y podrá aportarles los elementos provenientes de su investigación. 2. Cuando la Defensoría del Pueblo requiera a otras autoridades, asumir determinadas actuaciones de su competencia, éstas la mantendrán informada de los trámites sobre dichos asuntos y, en su defecto, la Defensoría del Pueblo podrá solicitar la información correspondiente. 3. Cuando la Defensoría del Pueblo siga procedimientos vinculados a la administración de justicia pondrá en conocimiento al Tribunal Supremo de Justicia; y podrá ejercer acciones ante los tribunales competentes de la jurisdicción disciplinaria judicial. 4. Cuando en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría del Pueblo conozca de hechos que son competencia de la Fiscalía General de la República y de la Contraloría General de la República, solicitará la intervención de éstos según corresponda. 5. Cuando en ejercicio de sus funciones, los órganos del Poder Público conozcan de hechos que sean competencia de la Defensoría del Pueblo, informarán y solicitarán la intervención de ésta.”*

[349] En lo correspondiente a la manera en que se adoptan las decisiones de la DP se encuentra consagrada en el artículo 10 de la LODP, que dispone que *“La actuación de la Defensoría del Pueblo tiene una naturaleza no coercitiva, por lo que no constituye instancia judicial y carece de competencia ejecutiva para dictar, modificar o anular autos, sentencias o actos emanados de cualquier rama del Poder Público. La Defensoría del Pueblo podrá utilizar mecanismos alternativos de resolución de conflictos cuando así lo aconsejen las circunstancias del caso.”*

[350] El artículo 13 de la LODP dispone que *“Contra las recomendaciones y observaciones dictadas por el Defensor del Pueblo no podrá interponerse recurso alguno en vía judicial. Cuando nuevos hechos o circunstancias así lo requieran, éste podrá reconsiderarlas.”*

[351] En lo correspondiente a las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas las decisiones de la DP, el artículo 12 de la LODP establece que *“Todo funcionario o funcionaria o persona a quienes se refiere el artículo 7 de esta Ley, que sea requerida por la Defensoría del Pueblo, debe colaborar, auxiliar, facilitar y suministrar los informes, expedientes, documentos, informaciones y explicaciones solicitadas. Asimismo, se debe permitir el libre acceso a los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo a lugares y documentos para el*

cumplimiento de su misión. El incumplimiento a lo contenido en el presente artículo hará incurrir a la persona en las responsabilidades previstas en el Título IV de esta Ley.”

[352] En lo referente a la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, el artículo 17 de la LODP dispone que *“El Defensor o Defensora del Pueblo será designado o designada por un único período de siete años por la Asamblea Nacional, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, según lo establecido en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”*.

[353] Asimismo, el artículo 25 de la LODP establece que *“El Defensor o Defensora del Pueblo cesará en sus funciones por cualquiera de las siguientes causales: 1. Por renuncia al cargo o muerte del titular. 2. Por incapacidad sobrevenida certificada por junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia. 3. Por expiración del período constitucional de su designación. 4. Por haber incurrido en cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta Ley. 5. Por haber sido condenado o condenada, en sentencia definitivamente firme, con excepción de delitos políticos.”*

[354] Las condiciones de elegibilidad del Defensor del Pueblo se encuentran establecidas en el artículo 19 de la LODP mientras que las incompatibilidades para ocupar el cargo se encuentran consagradas en el artículo 20 de la LODP y las incompatibilidades por parentesco en el artículo 22 de la misma normativa.

[355] En lo que respecta a la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, la DP cuenta con un Estatuto de Personal de la Defensoría del Pueblo (EPDP), expedido en enero 22 de 2014, que regula los procesos de ingreso, egreso, sanciones disciplinarias, incompatibilidades y demás normas relativas a su personal, así como el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la DP.¹¹⁷

[356] Sobre el particular, el artículo 13 del EPDP establece que los funcionarios al servicio de la DP serán de carrera o de libre nombramiento y remoción por parte del Defensor del Pueblo.

[357] Por otra parte, el artículo 14 del EPDP dispone que serán funcionarios de carrera quienes ingresen a la DP mediante el concurso público correspondiente, superado satisfactoriamente el período de prueba previsto en el mismo Estatuto, y en virtud de nombramiento, desempeñen funciones de carácter permanente en cargos que no sean de alto nivel o de confianza.

[358] La DP cuenta también con el Manual Descriptivo de Cargos, que es un *“Documento que recopila el compendio de los cargos vigentes, clasificados por grupos ocupacionales, así como la información de cada una de las características específicas y los factores que componen cada uno de los cargos, que permiten describirlo como tal, y determinar su grado de ubicación en la escala de sueldos y salarios correspondiente”*¹¹⁸, y durante la visita *in situ*, los representantes de la DP manifestaron que se imparte al personal capacitación periódica en relación con dichas funciones.

[359] En relación con los procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, como se señaló en párrafos anteriores, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado informó que la DP cuenta con un Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento *“en el cual se*

¹¹⁷ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 77.

¹¹⁸ Ver presentación en PowerPoint

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_pres_final_def_pue.pdf

*establecen los procesos, competencias y demás aspectos relacionados con su organización y funcionamiento, respecto de sus funcionarios y los ciudadanos en general”.*¹¹⁹

[360] En lo que tiene que ver con acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de la calidad implementadas, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que cuenta con *“La Defensoría del Pueblo cuenta con el “Plan Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos”. En el marco de este Plan se ejecutan los siguientes programas: 1. Programas de Defensores y Defensoras Escolares. 2. Programa de Divulgación de Derechos Sexuales y Reproductivos. 3. Programa de Divulgación Derecho al Buen Trato. 4. Programa de Jurisdicción Especial Indígena 5. Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos para Personas Privadas de Libertad.”*

[361] Asimismo, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado informa que a partir de 2009 se llevaron adelante *“una serie de actividades, destinadas al mantenimiento correctivo, perfectivo, adaptativo y preventivo de los sistemas de información que se encuentran en funcionamiento, así como la coordinación de tareas relativas a la seguridad e integridad de los datos y de la plataforma informática instalada”.*¹²⁰

[362] Con respecto a la manera en que se suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones y se les orienta sobre cómo realizar gestiones ante la institución, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que lo hace a través de los siguientes mecanismos: Defensorías Delegadas Estadales, Defensores y Defensoras Voluntarios, Defensorías Móviles, Consejos Comunales, Correo Postal (para recibir denuncias), Defensoría en Línea en su página de Internet, y la línea gratuita telefónica 0800 Pueblo.¹²¹

[363] En lo que tiene que ver con los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Estado analizado en su respuesta informa que los procedimientos se encuentran contemplados en el referido Reglamento Interno de la Organización y Funcionamiento de la DP, y que las personas interesadas pueden denunciar ante la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento, cualquier actuación realizada por los funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo que afecten sus derechos e intereses.¹²²

[364] Al respecto, el Estado analizado también informa en la respuesta que la Dirección de Fiscalización, Disciplina y Seguimiento tiene la responsabilidad de sustanciar los procedimientos disciplinarios de su competencia, que se inicien como consecuencia de las faltas en que incurran los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo previsto en la Ley y el Estatuto de Personal de la Institución (artículos 24 y 25 del Reglamento Interno de la Organización y Funcionamiento de la Defensoría del Pueblo).¹²³

[365] Por cuanto a la manera en que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el artículo 76 de la LODP establece que *“La Defensoría del Pueblo deberá elaborar cada año su proyecto de presupuesto de gastos, el cual será remitido al Poder Ciudadano para su presentación al Ejecutivo Nacional e incorporación sin modificaciones al*

¹¹⁹ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 80.

¹²⁰ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 80-82.

¹²¹ *Ídem*, pp. 82-83.

¹²² *Ídem*, pp. 83.

¹²³ *Ídem*.

respectivo proyecto de Ley del Presupuesto que se someterá a la consideración de la Asamblea Nacional”.

[366] En relación con la obligación de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía, y la manera en que esta información se hace pública para que los ciudadanos puedan tener acceso a la misma, de conformidad con el numeral 5 del artículo 29 de la LODP, el Defensor del Pueblo deberá *“Presentar el informe anual institucional, informes especiales y los demás informes que de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, le sean requeridos, con la finalidad de corregir situaciones que entorpecen el logro de los objetivos de esta Ley.”*

5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[367] La Defensoría del Pueblo (DP) tiene un conjunto de disposiciones y/u otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 5.1. de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[368] En primer lugar, en lo que tiene que ver con el régimen de recursos humanos de la DP, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la institución pusieron de presente que hasta 2013, el concurso de méritos y oposición no era un requisito para acceder a la carrera en la DP ya que no estaba contemplado en el Estatuto de Personal de la DP (EPDP). Esto cambió en enero 22 de 2014, fecha en que se publicó el nuevo EPDP, cuyo artículo 14 establece el concurso de méritos como un requisito de elegibilidad para entrar al servicio del DP.

[369] En ese sentido, los representantes de la DP indicaron que en este momento se encontraban diseñando el subsistema de reclutamiento a los fines de poder llevar a cabo los concursos y dar cumplimiento a lo dispuesto en el nuevo EPDP respecto a la provisión de los cargos en la institución.

[370] Sobre el particular, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado concluir a la brevedad el diseño del subsistema de reclutamiento de los funcionarios del DP, asegurando que este subsistema esté basado en los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención, a los fines de implementar los concursos de méritos y oposición para el acceso al servicio del DP. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 5.4.1. del Capítulo II de este informe).

[371] En segundo lugar, en relación con la rendición de cuentas y la manera de hacer pública la información de manera que la ciudadanía pueda tener acceso a ella, el Comité advierte que si bien la mayoría de los informes anuales del DP se encuentran colocados en su página de Internet, falta todavía la información correspondiente al año 2013. Sobre el particular, el Comité estima que sería de utilidad que el Estado analizado publicara todos los informes de gestión del DP en su página de Internet, a los fines de facilitar el acceso a la ciudadanía de dicha información. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 5.4.2. del Capítulo II de este informe).

5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[372] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), de la cual se destaca la siguiente:

[373] En relación con sus labores de prevención, los representantes de la DP, durante la visita *in situ*, informaron que habían llevado a cabo las siguientes actividades:

Cuadro No. 1

Año	Actividad	Actividades	Personas capacitadas
2009	Contraloría Social	8 Talleres	400
2011	Ciudadano Auditor para la Defensa de los Derechos Humanos	8 Cursos	477
2013	Contraloría Social	8 Cursos	307

[374] Al respecto, el Estado analizado expresó que estas eran “*actividades divulgativas orientadas a establecer una cultura de respeto y protección del patrimonio público y los intereses generales*”.

[375] Sin embargo, el Comité advierte que en la ampliación de la explicación del contenido de estos cursos, el Estado analizado aclara que el curso de Contraloría Social comprende “*Explicar los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos necesarios para un efectivo ejercicio de la contraloría social, a través de acciones de control, seguimiento, vigilancia y evaluación de manera individual, colectiva u orgánica, considerando la visión crítica de derechos humanos*”, y el de Ciudadano Auditor para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como objetivo “*Generar herramientas para el ejercicio del control social sustentado en un marco teórico, legal, metodológico y técnico, en aras de promover la convivencia en garantía de los derechos humanos*”.¹²⁴

[376] Sobre el particular, si bien el Comité considera que estos temas son muy importantes debido a la naturaleza de las funciones de la DP, también estima que sería de utilidad que estas actividades divulgativas, cursos y talleres, incluyeran temas orientados a la prevención de la corrupción tales como la protección del patrimonio público, la naturaleza de los actos de corrupción, la protección de los denunciantes de buena fe de actos de corrupción, y demás principios consagrados en la Convención. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 5.4.3. del Capítulo II de este informe).

[377] En relación con las estadísticas correspondientes a la atención de denuncias, quejas o peticiones relacionadas con actos de corrupción, durante la visita *in situ*, los representantes de la DP presentaron la siguiente información:

Cuadro No. 2
Estadísticas Casos de Corrupción

¹²⁴ Ver presentación en PowerPoint

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_pres_final_def_pue.pdf

Año	Total Registros	Conocimiento Previo de la autoridad competente	Remitida Autoridad Competente	Se brindó orientación
2009	4	3		1
2012	14	5	3	6

[378] Sobre el particular, el Comité advierte que falta la información correspondiente a los años 2010, 2011 y 2013, y que no se indica si la autoridad competente fue la CGR o el MP. Al respecto, el Comité estima que sería de utilidad que el Estado analizado considerara completar la información de la referencia, y llevar estadísticas consistentes respecto de las denuncias y quejas relacionadas con actos de corrupción y a qué autoridad competente se remitieron.

[379] Asimismo, convendría que el Estado analizado considerara implementar un mecanismo de coordinación interinstitucional con la CGR y el MP, de manera que la DP pueda dar seguimiento al destino final de estos casos. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 5.4.4. y 5.4.5. del Capítulo II de este informe)

[380] En relación con las funciones de sanción de conductas corruptas de funcionarios del DP dentro del ámbito disciplinario de la institución, el Comité advierte que no se incluyó ninguna información ni en la respuesta al cuestionario ni durante la visita *in situ*. Sobre el particular, el Comité estima que el Estado analizado podría considerar compilar la información estadística respecto de los procesos disciplinarios en la DP relacionados con prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, de manera de que pueda conocerse el número total de casos investigados, el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, a los fines de identificar retos y recomendar la adopción de medidas correctivas, de ser necesario (ver recomendación 5.4.6.)

5.4. Conclusiones y recomendaciones

[381] Con base en el análisis integral realizado con respecto a Defensoría del Pueblo (DP), en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[382] **La República Bolivariana de Venezuela ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la Defensoría del Pueblo (DP), como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este informe.**

[383] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 5.4.1. Concluir a la brevedad el diseño del subsistema de reclutamiento de los funcionarios del DP, asegurando que esté basado en los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención, e implementar los concursos de méritos y oposición para el acceso al servicio del DP (ver Sección 5.2. del Capítulo II de este informe).

- 5.4.2. Publicar todos los informes anuales del DP en la página de Internet de la institución, a los fines de facilitar el acceso a la ciudadanía de dicha información (ver Sección 5.2. del Capítulo II de este informe).
- 5.4.3. Incluir en las capacitaciones, talleres y otras actividades divulgativas de la DP, temas orientados a la prevención de la corrupción, así como la difusión de los principios consagrados en la Convención (ver Sección 5.3. del Capítulo II de este informe).
- 5.4.4. Complementar la información estadística relativa a la atención de quejas y denuncias relacionadas con actos de corrupción, de manera que pueda conocerse cuántos casos fueron registrados, en cuántos se brindó orientación y cuántos fueron remitidos a la autoridad competente y cuál fue ésta, en orden a identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario (ver Sección 5.3. del Capítulo II de este informe).
- 5.4.5. Implementar un mecanismo de coordinación interinstitucional con la CGR y el MP, de manera que la DP pueda dar seguimiento al destino final de estos casos (ver Sección 5.3. del Capítulo II de este informe).
- 5.4.6. Compilar la información estadística respecto de los procesos disciplinarios en la DP relacionados con prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial o civil, de manera de que pueda conocerse el número total de casos investigados, el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, a los fines de identificar retos y recomendar la adopción de medidas correctivas, de ser necesario (ver Sección 5.3. del capítulo II de este informe).

III. BUENAS PRÁCTICAS

[384] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada para la Cuarta Ronda* y en la *Estructura* adoptada por el Comité para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado, las cuales ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio para los mismos:

- En relación con la Contraloría General de la República (CGR):

[385] La Declaración Jurada de Patrimonio en Línea, que consiste en el desarrollo de un mecanismo que permite a los ciudadanos cumplir de forma remota, segura, rápida y sencilla con la obligación de declarar su situación patrimonial en las oportunidades previstas por la ley, coadyuvando además al propósito de hacer efectivo el proceso de registro, almacenamiento,

custodia y análisis de esa información. Representa uno de los principales mecanismos preventivos que contempla la Ley Contra la Corrupción¹²⁵.

- En relación con el Ministerio Público:

- En relación con el Ministerio Público (MP):

[386] En el marco del Plan Nacional de Prevención del Delito, impartió capacitación en materia contra la corrupción mediante charlas relacionadas con los delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción, a funcionarios adscritos a distintos órganos de control y prevención, tales como el Instituto Nacional de Prevención; Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel); el propio Ministerio Público; el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONAC) y la Contraloría del Municipio Sucre y miembros de Consejos Comunales del mismo Municipio. Este mismo proceso de capacitación se desarrolló también en el interior del país.¹²⁶

- En relación con el Tribunal Supremo de Justicia:

[387] La implementación de los Tribunales Móviles Itinerantes *“cuyo programa fortalece la gestión institucional y la acción de los grupos a través de la generación, manejo y uso de la información y conocimiento para consolidar el acceso a la justicia, sin ningún tipo de exclusión y bajo la premisa de equidad, siendo su objetivo coadyuvar al fortalecimiento progresivo del Estado Democrático y Social, de Derecho y Justicia”*.¹²⁷

[388] Asimismo, la implementación del Sistema de Control Automatizado de Expedientes Judiciales, para el control y seguimiento de todos los expedientes que cursan el cada Sala, desde su ingreso hasta el cierre.¹²⁸

- En relación con la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

[389] Formación y Capacitación en materia de participación ciudadana y control social a la ciudadanía y a los servidores públicos, creando conciencia de la importancia que tienen sus actuaciones desde el plano personal e individual en la esfera colectiva, para que actúen responsablemente ejerciendo su deber y derecho, realizando participación ciudadana mediante la contraloría social, coadyuvando de esta manera a una mejor gestión comunitaria y pública.¹²⁹

- En relación con la Defensoría del Pueblo (DP)

[390] El programa “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos”, que es una propuesta para el desarrollo de políticas públicas en materia de derechos humanos, basada en el principio constitucional de la democracia participativa y protagónica.¹³⁰

¹²⁵ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 69-73. Para mayor información ver también: <http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=047> y <http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=051>

¹²⁶ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 47-48.

¹²⁷ *Ídem*, pp. 27-28.

¹²⁸ *Ídem*, pp. 28-29.

¹²⁹ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 97.

Ver también www.sunai.gob.ve

¹³⁰ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 86-87.

Ver también www.defensoria.gob.ve

IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS¹³¹

[391] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por la República Bolivariana de Venezuela en relación con las recomendaciones formuladas y las Medidas sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas¹³², y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[392] El Comité también tomará nota en este apartado del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación 1.1.1.

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Revisar y analizar la posibilidad de reglamentar el régimen de prevención de conflictos de intereses, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con los altos cargos del Estado, teniendo en cuenta las particularidades e importancia de los mismos, así como los mecanismos para hacerlos efectivos. Considerando, entre otros aspectos, la previsión de una incompatibilidad en el ejercicio de las funciones públicas, respecto a otras actividades que pudiera afectar su imparcialidad; el fortalecimiento del régimen de sanciones; y la previsión de un órgano, dotado de plena autonomía, que vele por el debido cumplimiento de esta reglamentación.

[393] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de esta medida. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

¹³¹. El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el Anexo I de este Informe.

¹³². Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/ven.htm>

Revisar y analizar la posibilidad de ampliar y fortalecer el régimen de implicancias, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades contemplado en las leyes sectoriales relacionadas con los conflictos de intereses privados con el interés público. Considerando para ello, la previsión y ampliación de ciertos supuestos que podrían configurar conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de una manera más detallada y específica; la determinación de las instancias o funcionarios responsables de vigilar dicho cumplimiento; y la aplicación de medidas y sanciones en caso de incumplimiento.

[394] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida¹³³, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, los siguientes:

[395] - La incorporación de diversos instrumentos legales y sub-legales (regímenes estatutarios dictados por entes y organismos dotados por la Ley de autonomía organizativa y funcional), diez de los cuales aparecen listados en la sección correspondiente de la respuesta al cuestionario.¹³⁴

[396] - El Proyecto de Ley sobre Conflictos de Intereses que se encuentra en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

[397] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de anterior, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, toda vez que el Proyecto de Ley de Conflictos de Intereses aún no ha sido aprobado; y que el origen de esta medida se remonta al análisis de la primera ronda, en donde Comité observó que *“En la legislación sectorial, el Comité observa que, en su mayoría, las normas que la integran podrían perfeccionarse, fortaleciéndolas y complementándolas, a través de disposiciones que integren un catálogo más amplio y comprensivo de las prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades que puedan surgir en el ejercicio de la función pública y que por su importancia convendría tratar de una manera más detallada y específica. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Ministerio Público se limita a establecer en su artículo 70 la incompatibilidad que tienen funcionarios de ese Ministerio en relación con el libre ejercicio de la abogacía y la prohibición de ocupar más de un cargo público...”*¹³⁵, y que si bien se han efectuado reformas en ciertas legislaciones y que se han emitido nuevas normativas que contemplan diversas prohibiciones y restricciones relativas a conflictos de intereses, aún no se han efectuado las revisiones sugeridas en la medida b) de la referencia.

[398] Por ejemplo, la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente aún contempla únicamente la incompatibilidad de los funcionarios que anteriormente se encontraba prevista en el artículo 70 a la cual se aludió en la parte analítica del informe de la primera ronda, y la única diferencia es que hoy día está contemplada en el artículo 87 de la LOMP, sin que se hayan agregado en la revisión otros supuestos que podrían dar lugar a conflictos de intereses como se sugirió en la primera ronda.¹³⁶

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

¹³³. Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 98-100.

¹³⁴ *Ídem*, pp. 99-100.

¹³⁵ Informe de Venezuela correspondiente a la Primera Ronda, pp.6-7.

¹³⁶ *Ídem*.

[399] *Asegurar la vigencia y aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación de las normas que regulan los conflictos de intereses, incluyendo, entre otras disposiciones, los supuestos que regula el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Hacienda pública*

[400] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de esta medida. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

[401] *Ampliar el lapso de caducidad que establece el artículo 88 de la Ley del Estatuto de la Función Pública tomando en cuenta, la importancia que merece el fortalecimiento de los instrumentos que existen al servicio de la Administración de tal manera, que no constituyan un obstáculo en la determinación de la responsabilidad disciplinaria individual del funcionario público infractor y la necesidad de que dicho lapso sea establecido en concordancia y unidad de propósito con otros existentes, de acuerdo con lo expresado en la sección 1.1.2 de este informe.*

[402] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información:

[403] *“La República Bolivariana de Venezuela no considera pertinente, como lo señaló en su informe de avance de la XV reunión, la modificación de la norma expuesta en esta observación del Comité en razón de la prescripción establecida en el referido artículo 88 de la Ley del Estatuto de la Función Pública que, citado a la letra, es del siguiente tenor:”*

[404] *“Artículo 88. Las faltas de los funcionarios o funcionarias públicos sancionadas con la destitución, prescribirán a los ocho meses, a partir del momento en que el funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad tuvo conocimiento, y no hubiere solicitado la apertura de la correspondiente averiguación administrativa.”*

[405] *“La disposición transcrita sirve de base para la aplicación de la sanción al funcionario público que estando obligado a sancionar no lo hubiere hecho y hubiere dejado así que prescribiera la acción. Esto, a su vez, se concatena con lo establecido en el último párrafo del artículo 79 de la citada Ley, que establece lo siguiente:”*

[406] *“Artículo 79. Los funcionarios o funcionarias públicos responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderles por efecto de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas.”*

“Aquel funcionario o funcionaria público que estando en la obligación de sancionar, no cumpla con su deber, será sancionado por la autoridad correspondiente conforme a lo establecido en la presente Ley, sus reglamentos y demás leyes que rijan la materia. Esta responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderles por efecto de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas. (Subrayado nuestro)”

[407] *“En tal sentido, y con fundamento en lo anteriormente expuesto, la República Bolivariana de Venezuela no considera menester la ampliación del plazo de prescripción previsto en el artículo 88 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.”*

[408] Sobre el particular, el Comité observa que si bien el establecimiento de sanciones para el funcionario público que estando en la obligación de sancionar no cumpla con su deber contribuye a los propósitos de la Convención en la lucha contra la corrupción, no soluciona la dificultad de que una conducta corrupta sancionable con destitución sea objeto de prescripción.

[409] En efecto, el artículo 86 del Estatuto de la Función Pública lista entre las causales de destitución conductas tales como la falta de probidad (numeral 6), la condena penal o auto de responsabilidad administrativa dictado por la CGR (numeral 10), Solicitar o recibir dinero o cualquier otro beneficio, valiéndose de su condición de funcionario o funcionaria público (numeral 11) y tener participación por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades que estén relacionadas con el respectivo órgano o ente cuando estas relaciones estén vinculadas directa o indirectamente con el cargo que se desempeña (numeral 13). Este artículo también cita entre estas causales conductas que causan daño al patrimonio del Estado (numerales 3 y 8), así como la arbitrariedad en el uso de la autoridad (numeral 7).

[410] Al respecto, el Comité observa que ya en la primera ronda se había tomado nota que el artículo 271 de la Constitución de la República establece la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, criterio que fue ratificado en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 2001, lo cual soluciona el problema de la prescripción de conductas corruptas que resultan en un daño al patrimonio público contempladas en artículo 86 de la LEFP.

[411] Sin embargo, no soluciona la dificultad de la prescripción de conductas corruptas establecidas en otros numerales del citado artículo 86 de la LEFP, que no necesariamente constituyen un delito contra el patrimonio público.

[412] En vista de lo anterior, la medida d) de la recomendación anterior, se replantea de la siguiente manera:

- Considerar tomar las medidas legislativas que sean necesarias a los fines de que no prescriban los actos de corrupción que no necesariamente resultan en un daño contra el patrimonio público.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Asegurar que el registro de funcionarios al servicio de la Administración Pública Nacional, previsto en el artículo 9 Ley del Estatuto de la Función Pública, sea utilizado en la prevención y sanción de conflictos de intereses.

[413] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, un pasos que contribuyen a la consideración satisfactoria de la misma, la siguiente¹³⁷:

[414] *“El Gobierno venezolano con el fin de dar cumplimiento a esta medida incorporó al sistema de Declaración Jurada de Patrimonio en Línea un registro de funcionarios públicos a cargo de la Contraloría General de la República. Asimismo, se creó un sistema de registro de órganos y entes del sector público con el objeto de garantizar el control y el seguimiento de la obligación de declarar los bienes y establecer la organización necesaria al respecto. Estos dos*

¹³⁷ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 101.

sistemas están integrados con el sistema de registros de funcionarios públicos, lo que facilita su utilización en la prevención y sanción de conflictos de intereses.”

[415] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de la consideración satisfactoria de la medida e) de la recomendación 1.1.1. anterior.

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Revisar y analizar la posibilidad de incorporar una normativa que limite o prohíba la participación de ex funcionarios en la gestión de ciertos actos y en general referida a situaciones que puedan conllevar al aprovechamiento indebido de la condición de ex servidor público

[416] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de esta medida. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

1.2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación 1.2.1.

Continuar ajustando su legislación vigente en especial su Código Penal a lo dispuesto en el artículo 271 de la Constitución de la República que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público.

[417] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida¹³⁸, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la misma, los siguientes:

[418] - La revisión de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) en octubre de 2010, cuyo artículo 95 dispone *“la improcedencia de la perención de la instancia en los procesos cuyas pretensiones se encuentren dirigidas a sancionar, entre otros, delitos contra el patrimonio público”*.

[419] - La promulgación de una serie de leyes que *“buscan entre otras cosas, asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos”*.

[420] - El Proyecto de Reforma al Código Penal Venezolano que en los actuales momentos se discute en la Asamblea Nacional.

[421] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de anterior, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, toda vez que esta medida sugerida se refiere a la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público consagrada en la Constitución, y *“la necesidad de desarrollar este principio en el Código Penal, en la Ley contra la Corrupción y otras leyes y normas jurídicas relacionadas con la materia, a fin de asegurar su efectividad y aplicabilidad”*.¹³⁹

¹³⁸ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 101-102.

¹³⁹ Informe de Venezuela correspondiente a la Primera Ronda, pp. 10-11.

Recomendación 1.2.2.:

Considerar la posibilidad de extender el plazo de cinco años de inhabilitación en el ejercicio de la función pública, establecido en el artículo 96 de la LCC, a cualquier funcionario o empleado público que sea sancionado por alguno de los delitos que establece esa Ley al lapso de hasta 15 años, previsto en el artículo 105 de la LOCGRSNC.

[422] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de esta recomendación. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Recomendación 1.2.3.:

Fortalecer que el Poder Judicial mantenga el poder de determinar la responsabilidad de los servidores públicos por los actos de corrupción, sin perjuicio de leyes que permitan a otros órganos tomar acciones administrativas o de otra naturaleza.

Se sugiere revisar y analizar la posibilidad de desarrollar una normativa que establezca con claridad el alcance de la expresión “a fin de evitar la paralización del servicio” contenida en el artículo 59 de la LCC, con el objeto de restringir los márgenes de discrecionalidad en la aplicación de dicha norma y el procedimiento a seguir, especificando el momento en que debe producirse dicha autorización.

[423] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de esta recomendación. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Recomendación 1.2.4.:

Tomar las medidas que considere pertinentes a fin de asegurar que la discrecionalidad permitida en algunas disposiciones, relacionadas con la contratación pública, y que el artículo 59 de la LCC no constituya un elemento que afecte o incentive la conducta ilícita o arbitraria del funcionario público en la toma de decisiones, relacionado con la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con lo expresado en la sección 1.2.3.

[424] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de esta recomendación. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Recomendación 1.2.5.:

Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre las normas de conducta aludidas en esta sección y para responder las consultas de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas.

[425] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, los siguientes pasos que contribuyen a la consideración satisfactoria de la misma, la siguiente¹⁴⁰:

[426] “Los órganos del Estado venezolano, en cumplimiento de la aludida recomendación, han implementado una serie de cursos orientados a capacitar a los funcionarios en relación con las

¹⁴⁰ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 102-107.

normas de conducta expresadas en el Estatuto de la Función Pública, la Ley Contra la Corrupción, entre otros, así como los señalados en sus normativas internas como códigos de conductas. En este sentido, se incluyen temas de conflictos de intereses, ética, responsabilidad de los funcionarios públicos, administración, manejo y custodia de recursos, plasmados en distintas normativas y procedimientos...”

[427] Al respecto, el Estado analizado presenta información pertinente y comprensiva de estas capacitaciones en la respuesta, de la cual se destaca los programas en los siguientes órganos:

[428] - Contraloría General de la República (CGR), a través del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE), además del Programa Ejecutivo de Formación Integral a distancia de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

[429] - Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Escuela Nacional de la Magistratura.

[430] - Fiscalía General de la República a través de la Escuela Nacional de Fiscales.

[431] - Ministerio Público a través de la Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal.

[432] - Administración Pública Nacional a través de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública.

[433] - Consejo Nacional Electoral a través de la Fundación de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE).

[434] - Defensoría del Pueblo a través de la Escuela de Derechos Humanos.

[435] - Asamblea Nacional a través de la Escuela de Formación Integral “Dr. Carlos Escarrá Malavé”.

[436] - Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a través del Centro de Estudios Fiscales.

[437] - Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), en el marco del plan de capacitación que lleva a cabo, realiza en su sede una serie de cursos y talleres dirigidos a mejorar los procesos del Control Interno y la Auditoría.

[438] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de la consideración satisfactoria de la recomendación 1.2.5. anterior.

1.3 Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación 1.3.1.

Desarrollar regulaciones y mecanismos para facilitar y promover la presentación de denuncias sobre actos de corrupción. Ello debiera complementarse con medidas que protejan a los

servidores públicos que denuncien estos actos, en particular cuando involucre a directivos y funcionarios superiores.

Asegurar que la normativa y disposiciones vigentes, entre las cuales se encuentra el artículo 2 del Instructivo Presidencial por medio del cual se dicta el Código de Conducta de los Servidores Públicos, expresamente permitan la presentación de denuncias por actos ilícitos ante los órganos de control superior que corresponda, eliminando la obligación de informar solo a los directivos de la institución en la cual labora el servidor público denunciado.

[439] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la recomendación anterior, la siguiente¹⁴¹:

[440] *“El Consejo Moral Republicano en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 5 y 10, numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y la Disposición Transitoria Única de la Ley Contra la Corrupción, emitió a través de la Resolución N° CMR-016-2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.314 de fecha 12 de diciembre del año 2013, el Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos. Este Código toma en consideración en su contenido, la recomendación del Comité señalada en el segundo párrafo, que en su artículo 7 sobre la “Obligación de Denunciar” dispone que: “Las servidoras y servidores públicos deben denunciar ante el Poder Ciudadano, su superior jerárquico o ante los órganos de control fiscal competentes, aquellos actos de los tuvieren conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones que pudieran atentar, amenazar o lesionar la ética pública y la moral administrativa”.*

[441] - La creación por parte del Ministerio Público de la Coordinación Nacional para la Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales que tiene como función garantizar la defensa y protección de los derechos que asisten a toda víctima de delito, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.935 de fecha 1 de junio del año 2012.

[442] Sobre el particular, el Comité toma nota de que el tema de las medidas que protejan a los servidores públicos que denuncien estos actos, en particular cuando involucre a directivos y funcionarios superiores, fue objeto de análisis específico de la segunda ronda y que en esa ocasión se formularon recomendaciones a Venezuela, cuyo seguimiento a su implementación está previsto para la quinta ronda. Por todo lo anteriormente expuesto, el Comité remite el tema a la quinta ronda y se reserva el derecho de pronunciarse sobre ello en esa ocasión.

[443] Asimismo, en lo que tiene que ver con el desarrollo de regulaciones y mecanismos para facilitar y promover la presentación de denuncias sobre actos de corrupción, el Estado analizado en su respuesta no se refirió a ello. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité, durante la visita *in situ*, al efectuar el análisis de los mecanismos de recepción y trámite de denuncias de los órganos de control superior, que los mecanismos existentes podrían optimizarse ya que en la práctica no siempre funcionan con la eficiencia esperada, en detrimento de las metas del Estado en sus esfuerzos de lucha contra la corrupción, y la motivación de la ciudadanía de presentar sus denuncias.

[444] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria del segundo párrafo de la recomendación 1.3.1. anterior, así como de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de los elementos del primer párrafo relativos a la protección de los

¹⁴¹ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 101.

denunciantes de actos de corrupción, y como resultado de ello la recomendación se replantea de la siguiente manera:

[445] - *Desarrollar regulaciones y mecanismos para facilitar y promover la presentación de denuncias sobre actos de corrupción y optimizar los mecanismos existentes de recepción y trámite de denuncias.*

[446] Al respecto señalar que durante la visita *in situ*, los representantes de la organización gremial empresarial “Federación Venezolana de Porcicultura (FEDEPORCINA)” pusieron de presente que los mecanismos existentes para la recepción y trámite de denuncias podrían mejorarse, ya que los trámites existentes son en muchos casos engorrosos y de complicado trámite, lo que no ayuda a que la población se sienta incentivada para consignarlas.

[447] Por otra parte, cabe señalar que en esa misma ocasión, uno de los académicos que participaron en la visita puso de presente otro ejemplo el de los números telefónicos 800 para recepción de denuncias con los que cuentan varias instituciones, en el sentido de que se colapsan las líneas por tanto interés, pero que no hay respuesta después sobre qué trámite se le dio a la denuncia y cuáles fueron los resultados, lo que desmoraliza a la ciudadanía para cumplir con su responsabilidad ciudadana.

[448] En ese mismo sentido, la representante de la asociación gremial empresarial “FEDEINDUSTRIAS”, manifestó que existía una necesidad de que el Estado diera respuesta oportuna para la ciudadanía una vez presentada la denuncia, y por otra parte otro de los académicos puso de presente que habría que buscar mecanismos más flexibles para dar respuesta a la ciudadanía.

Recomendación 1.3.2.:

Considerar la posibilidad de aplicar, al funcionario que omita su obligación de denunciar, sanciones más severas, distintas a la multa prevista, de carácter administrativo y penal, que incluyan, entre otras, la pérdida del cargo, según la gravedad de la falta.

[449] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de esta recomendación. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Recomendación 1.3.3:

Actualizar las sanciones pecuniarias previstas en el Código Penal tomando en cuenta la seriedad de los delitos de corrupción en la función pública.

[450] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de esta recomendación. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, a través de las normas legales que sean pertinentes.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Promulgar las disposiciones legales y otras medidas que considere pertinentes, a fin de establecer, claramente los sujetos a quienes el Contralor General de la República solicitará la presentación periódica de la Declaración Jurada de Patrimonio, asegurando que esas disposiciones incorporen desde los más altos cargos de la Administración Pública y aquellos que, dada su importancia y naturaleza, puedan facilitar o generar enriquecimiento ilícito u otros actos ilícitos contra el patrimonio público, y determinar la periodicidad de la presentación de dichas declaraciones, su contenido y requisitos formales.

[451] En su respuesta, el Estado analizado presenta información respecto de la medida a) de la anterior recomendación, de la cual se destaca la siguiente¹⁴²:

[452] “En torno a ésta medida la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), publicada en la Gaceta Oficial Nro. 6.013 Extraordinario de fecha 23 diciembre del año 2010, establece en su artículo 78 lo siguiente:

[453] “Artículo 78. La Contraloría General de la República podrá solicitar declaraciones juradas de patrimonio a los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, obreros y obreras del sector público, a los particulares que hayan desempeñado tales funciones o empleos, a los contribuyentes o responsables, según el Código Orgánico Tributario, y a quienes en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones relacionadas con el patrimonio público, o reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales...”

[454] “En relación con lo citado anteriormente, la Contraloría General de la República publicó en Gaceta Oficial las siguientes Resoluciones:

[455] “Resolución N° 01-00-057 de la CGR. A partir del 27 de marzo de 2009, todos los altos funcionarios de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal, deben presentar la actualización anual de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), en el lapso comprendido entre el 1° y el 31 de julio de cada año de todos los altos funcionarios de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal, establece la obligación de la presentación anual de la DJP a los altos funcionarios que ocupen cualesquiera de los cargos que en ella se indican: “Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados a la Asamblea Nacional, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de las Cortes 1ra y 2da de lo Contencioso Administrativo, Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la República y Vicefiscal, Defensor del Pueblo y Director Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Contralor General de la República y Subcontralor, Gobernadores y Secretarios de Gobierno, Legisladores de los Consejos Legislativos Estadales, Procuradores de estado, Subprocuradores y Directores generales, Contralores de estado, Alcaldes, Concejales distritales y municipales, Contralores distritales, municipales y directores generales, así como Síndicos procuradores distritales y municipales”. Además de ello, están obligados a presentar anualmente la DJP actualizada los altos funcionarios al servicio de los órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la LOCGRSNCF, que desempeñen funciones permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección popular, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente.

¹⁴² Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 109-110.

[456] “Resolución N° 01-00-0122 de la Contraloría General de la República, a partir del 19 de junio de 2009, se implementó el “Sistema para la Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en formato electrónico” el cual facilita a los altos funcionarios la presentación de su actualización anual de la DJP en formato electrónico desde cualquier computador y lugar del país y del mundo en que se encuentren, a través de la página Web de la CGR www.cgr.gob.ve donde están disponibles las instrucciones para realizar el procedimiento.

[457] Sobre el particular, el Comité toma nota de que durante la tercera ronda ya se había tomado nota de Resolución N° 01-00-057 de la CGR como un paso en la implementación de la medida a) de la recomendación anterior.

[458] Por otra parte, el Comité desea señalar que el origen de la medida a) de la recomendación anterior se remonta a la sección analítica de la primera ronda en la cual el Comité expresó que¹⁴³:

[459] “...Sin embargo, el artículo 78 de la LOCGRSNCF dispone que: ‘La CGR podrá¹⁴⁴ solicitar declaraciones juradas...’ Entiende el Comité que la forma verbal empleada en esta norma implica el establecimiento de una potestad que podría o no ejercer la CGR, según su discrecionalidad, respecto a los funcionarios que de acuerdo con las disposiciones vigentes están obligados a presentar esta declaración. Se observa también, la facultad que se le otorga en la determinación de ‘los funcionarios, empleados o demás sujetos exceptuados de presentarla periódicamente...’”

[460] “...No solo razones de seguridad jurídica aconsejan precisar y delimitar, mediante una ley o reglamento, los sujetos obligados, el contenido y los momentos de la presentación de las declaraciones de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, sino, además, existe la conveniencia de no dejar al libre arbitrio de un solo órgano de la administración o funcionario público la delimitación de aspectos trascendentales, de los cuales depende el buen funcionamiento del sistema. Una ley o reglamentación como la que aquí se sugiere, podría contribuir a cerrar espacios de discrecionalidad que puede permitir, facilitar o promover la comisión de ilícitos contra el patrimonio público. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, el Comité formulará una recomendación”.

[461] El Comité, en vista de lo anteriormente expuesto, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la medida a) de la recomendación anterior.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Considerar la conveniencia de exigir la declaración jurada en momentos distintos a los ya previstos, estableciendo plazos razonables para su actualización o las circunstancias ante las que se aconseje exigir las.

[462] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la medida b) de la recomendación anterior, la siguiente¹⁴⁵:

¹⁴³ Informe de Venezuela correspondiente a la Primera Ronda, pp. 19.

¹⁴⁴ El subrayado es nuestro.

¹⁴⁵ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 101.

[463] “...una vez implementado el registro único de funcionarios públicos obligados a declarar, como se indicó anteriormente, la CGR ha iniciado un proceso de actualización de la DJP de todos los funcionarios, empleados y obreros del sector público, con la idea de solicitar anualmente su actualización.”

[464] - La Resolución N° 01-00-000247 de fecha 14 de diciembre del año 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.821 de fecha 15 de diciembre del año 2011, mediante la cual la CGR solicitó la presentación de la declaración jurada de patrimonio actualizada al personal del Ministerio Público, funcionarios, empleados y obreros, que desempeñen funciones permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas originadas por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente. De este modo, este Máximo Órgano Contralor obligó a todo el personal del Ministerio Público a presentar su declaración jurada de patrimonio, independientemente de que la hubiesen actualizado o presentado durante el ejercicio fiscal del año 2011.

[465] - La Resolución N° 01-00-000248 de fecha 19 de diciembre del año 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.076 de fecha 20 de diciembre del año 2012, dictada por la Contraloría General de la República mediante la cual se solicitó la presentación de la declaración jurada de patrimonio actualizada al personal de los cuerpos de policía a nivel nacional, estatal y municipal dentro del lapso comprendido desde el 1° de enero al 31 de enero de 2013.

[466] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de esta medida se remonta al análisis de la primera ronda, en donde se aconsejó que por razones de seguridad jurídica el momento de la presentación de las declaraciones estos momentos de presentación de las declaraciones de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, fueran precisados y delimitados a través de una ley o reglamento, como se explicó en la sección correspondiente a la medida a) de esta recomendación.

[467] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de anterior, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer el papel que el artículo 26 de la LCC otorga a los responsables del área de recursos humanos estableciendo la obligación de esas dependencias de notificar, de manera inmediata, a la CGR cuando el funcionario obligado a hacerlo no presente el comprobante que es su obligación exigirles, en que conste la presentación de la declaración de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos; y la previsión de las correspondientes acciones que deba tomar la CGR en esas situaciones.

[468] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la medida c) de la recomendación anterior, la siguiente¹⁴⁶:

[469] Implementación del “Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE), mediante Resolución N° 01-00-049 de fecha 09 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.138 de fecha 13 de marzo del año 2009, en el cual obligatoriamente

¹⁴⁶ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 111.

deben registrarse todos los órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con el propósito de simplificar la presentación en formato electrónico de la declaración jurada de patrimonio por parte de todos los obligados a presentarla, así como garantizar el control y seguimiento por parte de las áreas de recursos humanos de los órganos y entes del sector público”.

[470] *“Los responsables del área de recursos humanos de los órganos y entes indicados anteriormente, se encuentran obligados a incorporar en el referido Sistema la información institucional respectiva, así como la información relativa a los movimientos de ingresos y egresos de personal, dentro de los cinco (5) días siguientes a que estos se produzcan. <http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=070>”*

[471] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de anterior, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, toda vez que esta medida c) se remonta al análisis realizado durante la primera ronda, en la cual el Comité expresó que *“...la República Bolivariana de Venezuela podría beneficiarse, mediante el fortalecimiento de la labor que al respecto realizan las áreas de recursos humanos de cada institución, previendo expresamente la obligación de éstas de informar a la CGR en el momento en que se produzca este incumplimiento, a fin de que este órgano tome las acciones que considere prudente”.*

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en relación con la publicidad de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, cuando corresponda.

[472] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la medida d) de la recomendación anterior, la siguiente¹⁴⁷:

[473] *“La Contraloría General de la República publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.066 de fecha 06 de diciembre del año 2012, informes preliminares mediante los cuales se hacen saber los resultados determinados en el procedimiento de verificación patrimonial adelantado por la CGR a los ciudadanos y ciudadanas que en ellos se mencionan. Los mismos contienen los resultados preliminares determinados en el procedimiento de verificación patrimonial, solicitados por el Ministerio Público, y llevados a cabo por la CGR, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción. Dichos informes preliminares de auditoría patrimonial contienen la verificación de las situaciones patrimoniales y su correspondencia con las actividades económicas y financieras, en ocasión al desempeño de las funciones de estos ciudadanos.”*

[474] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida d) de la recomendación de anterior, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, toda vez que esta medida se refiere a la condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en relación con la publicidad de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, cuando corresponda.

¹⁴⁷ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 112.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, para detectar y evitar conflictos de intereses.

[475] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida e) de la anterior recomendación. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida f) sugerida por el Comité:

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Implementar los procedimientos necesarios para realizar el efectivo control del cumplimiento en la presentación de estas declaraciones, de acuerdo con lo mencionado en el punto f) anterior.

[476] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la medida d) de la recomendación anterior, la siguiente¹⁴⁸:

[477] *“Con la implementación del Sistema para la Formulación y Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico, el cual entró en vigor con la publicación de la Resolución N° 01-00-0122 de la Contraloría General de la República, a partir del 19 de junio del año 2009, mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.205, se mantiene un mayor control en el cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de presentar la DJP.”*

[478] *“A su vez, la recepción electrónica de las declaraciones juradas de patrimonio cuenta con la atención de llamadas telefónicas a través del número 0800-Declara, a través del cual se presta atención a las personas por diversos requerimientos, entre los cuales figuran: confirmar su situación patrimonial y la atención de solicitudes de servicios a través de nuestro “Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público” (SISROE). <http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=047>.”*

[479] Al respecto, el Comité toma nota de que durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR manifestaron que el nuevo sistema electrónico de declaraciones juradas ha contribuido en gran manera a un control más eficiente del control de las declaraciones juradas patrimoniales. Sin embargo, pusieron también de presente que no todos los funcionarios obligados se encuentran aún incorporados en el Sistema de Declaración Jurada de Patrimonio en Línea, y que se espera que el número de declaraciones aumente según como se vayan incorporando estos funcionarios.

¹⁴⁸ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 112-113.

[480] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida g) de la recomendación de anterior, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

Medida h) sugerida por el Comité:

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 3.1.:

Fortalecer la labor de fiscalización que realiza la CGR, como órgano de control superior y de vigilancia, sobre las Contralorías Estadales, considerando la posibilidad de efectuar un mayor número de evaluaciones o diagnósticos sobre sus actividades, o emplear los mecanismos o instrumentos que se consideren apropiados que permitan verificar su adecuado funcionamiento.

[481] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la recomendación anterior, la siguiente:¹⁴⁹

[482] “...la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, constantemente realiza evaluaciones, diagnósticos y desarrolla actividades conjuntas con los demás integrantes del Sistema, a objeto de verificar su adecuado funcionamiento, unificar criterios y hacer un uso eficiente de los recursos asignados a los órganos de control fiscal. Como resultado de las evaluaciones practicadas en el marco del artículo 34 de la LOCGRSNC, la Contraloría General de la República ha intervenido contralorías estadales, municipales y unidades de auditoría interna...”

[483] . “...Asimismo, la Contraloría General de la República con el objetivo de seguir fortaleciendo la labor de fiscalización, como órgano de control superior que es” e indica que ha venido realizando las actividades que se resumen a continuación:

[484] - Primera jornada de trabajo del año con los contralores de estado realizada en febrero del año 2011, en la cual se presentó el Proyecto “Encuentro Nacional de Contralores Estadales”, donde se dio el instructivo para la elaboración del Informe de Gestión Anual y los programas de trabajo sobre las nuevas auditorías coordinadas que realizarán las contralorías estadales y municipales.

[485] - La Jornada de Trabajo del Reglamento para el registro, calificación, selección y contratación de auditores, consultores y profesionales independientes en materia de control, en agosto de 2012.

[486] - Lineamientos comunicacionales con la contralorías estadales, a través de las redes sociales.

[487] - Expedición de lineamientos específicos a las contralorías estadales representadas por sus 23 titulares, durante una reunión celebrada el 28 de febrero de 2012, sobre diversas acciones

¹⁴⁹ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 113-115.

que ejecutan los órganos de control regional, con la intención de unificar criterios sobre el proceso de actuaciones de control coordinadas que la CGR desarrolló en ese año.

[488] - Encuentro de contralores estatales para discutir aspectos operativos del trabajo como el examen de la cuenta, así como para recibir orientaciones administrativas y estrategias vinculadas con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal, realizada el 22 de junio de 2012.

[489] - Curso *Examen de la Cuenta*, dirigido a funcionarios de la Dirección de Control de Estados del máximo organismo de control fiscal y a representantes de las 23 contralorías estatales.

[490] - Reactivación en 2013 de las Jornadas Especiales de Trabajo para avanzar en el diseño del plan estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal, organizados por la CGR y la Fundación “Gumersindo Torres” (COFAE).

[491] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación de anterior, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, toda vez que no se presentó información estadística que permitiera comparar número de evaluaciones o diagnósticos sobre las actividades de las Contralorías Estadales o cómo se verificó su adecuado funcionamiento.

Recomendación 3.2.:

Fortalecer la labor de la CGR mediante la puesta en práctica de políticas y acciones concretas que verifiquen el seguimiento e implementación, por parte de los entes que se encuentran bajo su ámbito de competencia, de las acciones correctivas sugeridas durante las auditorías, diagnósticos o evaluaciones.

[492] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la recomendación 3.2. de la anterior recomendación. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 11).

4.1 Mecanismos de participación en general

Recomendación

Analizar la legislación vigente, a fin de detectar la existencia de previsiones que pudieran estar influyendo adversamente en la efectividad de estos derechos, incluyendo las relacionadas con los requisitos sobre las fuentes de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil e introducir los ajustes que se estimen pertinentes que aseguren que, en el régimen jurídico vigente, no existan disposiciones que constituyan una limitación a esta participación en la prevención de la corrupción.

[493] El Estado analizado en su respuesta pone de presente que “*La República Bolivariana de Venezuela ratifica lo mencionado en el Informe de Avances presentado en la XV Reunión del Comité de Expertos del MESICIC...*”¹⁵⁰.

[494] El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la recomendación anterior.

4.2 Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación

Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública, incluyendo la posibilidad de acceder a otro tipo de información, distinta a la ya prevista; y considerar la aplicación de disposiciones que aseguren que el acceso a la misma solo pueda ser denegado por las causales que explícitamente regule y determine la ley.

[495] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida a) de la recomendación 4.2. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Contemplar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que garantizan el acceso a la información pública.

[496] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida b) de la recomendación 4.2. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer un procedimiento específico para la tutela del derecho del ciudadano al acceso a la información pública, previendo con ese fin, entre otros aspectos, los siguientes: i) procedimientos para la recepción de solicitudes y para responder a éstas oportunamente; ii) entidad u oficinas encargadas del mismo y órgano de control superior que debe velar por la aplicación de esta normativa iii) requisitos de admisibilidad y la consecuencia si no se cumple con ellos; iv) razones por las cuales puede rechazarse una solicitud; v) forma de comunicación al administrado; vi) recurso expeditos y especializados que posibiliten, en vía administrativa, recurrir la decisión del servidor público que indebidamente niegue el acceso a la información que se le solicita; y vii) aumento en el número de las sanciones, a fin de cubrir un espectro más amplio de supuestos que

¹⁵⁰ El texto completo de lo expresado por la República Bolivariana de Venezuela en el Informe de Avances presentado en la XV Reunión del Comité de Expertos puede encontrarse en las páginas 115-116 de la Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda.

podrían entorpecer, retardar o imposibilitar el ejercicio de este derecho y que envuelvan la conducta del servidor público.

[497] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida c) de la recomendación 4.2. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Implementar, si aún no lo ha hecho, la disposición del artículo 9 de la LCC que se refiere a la creación de oficinas de atención al público o de atención ciudadana, asegurándose que las mismas tengan recursos suficientes para desempeñar su labor.

[498] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la recomendación anterior, la siguiente¹⁵¹

[499] “...la Contraloría General de la República ha promovido con mucha insistencia la creación de las Oficinas de Atención al Ciudadano en todos los entes de la Administración Pública y estos han respondido satisfactoriamente. La entrada en vigor de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana ha estimulado la creación de las mismas, lo cual es seguido muy de cerca por la CGR. En este sentido, la CGR giró instrucciones para que todos los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, al momento de practicar sus actuaciones de control, en los órganos y entes del sector público, nacional, estatal o municipal, verifiquen la creación de las Oficinas de Atención al Ciudadano, de acuerdo con el citado instrumento legal.”

[500] Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGR pusieron de presente que se había llevado a cabo un censo sobre el cumplimiento de la obligación de los entes y organismos de crear sus oficinas de atención al ciudadano, y que alrededor del 80% de ellos habían ya cumplido con esta obligación.

[501] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación de anterior, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, toda vez que las oficinas de atención al ciudadano aún no han sido implementadas en todos los entes y organismos, y que no se suministró información con respecto a si contaban o no con recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la información pública del Estado, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible para tal efecto.

¹⁵¹ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 116-117.

[502] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida e) de la recomendación 4.2. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación

Fortalecer y continuar implementando procedimientos, cuando correspondan, que permitan realizar consultas públicas.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Celebrar procesos para permitir la consulta a sectores interesados en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.

[503] El Estado analizado en su respuesta presenta la siguiente información, que el Comité estima contribuye a la consideración satisfactoria de la misma:¹⁵²

[504] *La República Bolivariana de Venezuela cuenta con múltiples instrumentos generadores de procesos que permiten la consulta a sectores interesados en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo.*

[505] *El Estado venezolano cuenta con mecanismos de consulta previstos en el sistema jurídico interno como lo son el refrendo consultivo, la consulta popular, el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos, los cuales emanan directamente de la Constitución.*

[506] *Además de ello, el artículo 138 referido a la promoción de la participación ciudadana y el 139 relacionado con el procedimiento para la consulta de regulaciones sectoriales de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establecen lo siguiente:*

[507] **“Artículo 138.** Los órganos y entes de la Administración Pública promoverán la participación ciudadana en la gestión pública.

[508] *Las personas podrán, directamente o a través de las comunidades organizadas, presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestión de los órganos y entes de la Administración Pública, así como participar en la elaboración de los instrumentos de contenido normativo... ”*

[509] **“Artículo 139.** Cuando los órganos o entes públicos, en su rol de regulación sectorial, propongan la adopción de normas reglamentarias o de otra jerarquía, deberán iniciar el correspondiente proceso de consulta pública y remitir el anteproyecto a las comunidades organizadas. En el oficio de remisión del anteproyecto correspondiente se indicará el lapso durante el cual se recibirán por escrito las observaciones, el cual comenzará a correr a partir del décimo día hábil siguiente a la entrega del anteproyecto correspondiente.

¹⁵² Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 117-118.

[510] *Paralelamente a ello, el órgano o ente público correspondiente difundirá a través de cualquier medio de comunicación el inicio del proceso de consulta indicando su duración. De igual manera lo informará a través de su página en internet, en la cual se expondrá el o los documentos sobre los cuales verse la consulta.*

[511] *Durante el proceso de consulta cualquier persona puede presentar por escrito sus observaciones y comentarios sobre el correspondiente anteproyecto.*

[512] *Una vez concluido el lapso de recepción de las observaciones, el órgano o ente público podrá fijar una fecha para que sus funcionarias o funcionarios, especialistas en la materia que sean convocados y las comunidades organizadas intercambien opiniones, hagan preguntas, realicen observaciones y propongan adoptar, desechar o modificar el anteproyecto propuesto o considerar un anteproyecto nuevo.*

[513] *El resultado del proceso de consulta tendrá carácter participativo no vinculante.”*

[514] Sobre el particular, el Comité desea señalar que estos procesos y el contenido de los artículos de la LOAP (que anteriormente eran el 136 y 137 de la LOAP) fueron tenidos en cuenta ya desde la primera ronda y por lo tanto esto no constituye información nueva respecto a la implementación de esta medida.¹⁵³

[515] Cabe recordar también que en la parte analítica del informe correspondiente a la primera ronda, el Comité observó que “*las anteriores disposiciones y mecanismos podrían ser fortalecidos facilitando la consulta de los sectores interesados, en relación con el desarrollo de políticas públicas. Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité formulará una recomendación*”.¹⁵⁴

[516] Por otra parte, durante la visita *in situ*, el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la consideración satisfactoria de la misma la siguiente¹⁵⁵:

[517] - Celebración de procesos de consulta a sectores interesados en relación con el diseño de políticas públicas, como la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación “*en cual 7,2 millones personas, entre padres y representantes, maestros, directores, estudiantes y el poder popular participaron en este debate nacional del se generarán las políticas que regirán el sistema educativo de los próximos 10 años*”;

[518] - Los procesos participativos para la preparación de presupuestos municipales

[519] - Estadísticas pertenecientes a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional mediante el proceso de consulta pública titulada “Parlamentarismo de la Calle”, en los últimos cinco años.

[520] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de la consideración satisfactoria de la medida a) de la recomendación 4.3. anterior.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

¹⁵³ Informe de Venezuela correspondiente a la Primera Ronda, pp. 33.

¹⁵⁴ *Ídem.*

¹⁵⁵ Ver http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_ven.htm .

Desarrollar mecanismos idóneos que permitan realizar consultas públicas en temas relacionados con el desempeño de las funciones administrativas que tienen una naturaleza distinta a la actividad normativa de la Administración, de acuerdo con lo expresado en la sección 4.3.2 de este informe.

[521] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida b) de la recomendación 4.3. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Reglamentar las disposiciones que sean pertinentes a fin de cerrar los espacios de discrecionalidad que pareciera existir en algunas de las disposiciones vigentes, según lo señalado en la sección 4.3.2 de este informe.

[522] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida c) de la recomendación 4.3. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Complementar la reglamentación, cuando sea procedente, de los mecanismos de participación que contempla la legislación nacional, de manera tal que se definan aspectos tales como el valor que se dará a la consulta o a la información y a los resultados que se produzcan y las consecuencias por el incumplimiento de obligaciones relativas a los mecanismos de consulta existentes, tales como sanciones a sus infractores.

[523] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida d) de la recomendación 4.3. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta, y cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la Sociedad Civil, a las Organizaciones no Gubernamentales, como también a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.

[524] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida e) de la recomendación 4.3. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer y continuar implementando normas y mecanismos que alienten la participación, en la gestión pública, de las organizaciones de la sociedad civil incluidas las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción, estableciendo un régimen jurídico que de manera sistemática los cree y promueva, e incluya aspectos tales como otras modalidades de participación, distintas a las ya previstas, y otros mecanismos que promuevan, faciliten, consoliden y aseguren esta participación.

[525] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida a) de la recomendación 4.4. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Adoptar las disposiciones legales y las medidas que considere pertinentes a fin de prevenir que el registro de las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales pueda constituirse en un factor restrictivo que desmotive la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

[526] El Estado analizado en su respuesta presenta la siguiente información:¹⁵⁶

[527] “La República Bolivariana de Venezuela reitera que el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (actualmente Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales), a través del Consejo Presidencial para el Poder Popular, lleva un registro de los consejos comunales constituidos en todo el país, por medio de la consignación de los estatutos y del Acta Constituyente, aprobados por la Asamblea de Ciudadanos, con el fin único de dar cumplimiento a lo pautado en el artículo 20 de la Ley de Consejos Comunales y no con la intención de que dicho registro pueda constituirse en un factor restrictivo que desmotive la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. Por el contrario, el principal objetivo del registro es utilizarlo para llevar el control de los recursos asignados a estas organizaciones, a objeto de que financien proyectos socioproductivos destinados al desarrollo de las áreas comunitarias. <http://www.mppcomunas.gob.ve/contenido.php?id=214>.”

[528] El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la medida b) de la recomendación anterior.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Reglamentar el artículo 76 de la LOCGRSNCF para garantizar a la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales el derecho de postular candidatos a encabezar los órganos de control fiscal de los entes que están sometidos a esa Ley.

¹⁵⁶ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 118.

[529] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida c) de la recomendación 4.4. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Promover la derogación de las denominadas leyes de desacato.

[530] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida d) de la recomendación 4.4. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Diseñar y poner en funcionamiento programas así como para difundir la información para estimular la participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitando y facilitando las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.

[531] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida e) de la recomendación 4.4. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Promover y continuar implementando formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.

[532] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida a) de la recomendación 4.5. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Considerar la implementación de programas de difusión dirigidos a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre los aspectos tratados en las secciones 4.1 a 4.5. [del Informe de la Primera Ronda]

[533] El Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la consideración satisfactoria de la misma la siguiente¹⁵⁷:

[534] *“En virtud de la recomendación realizada por el Comité de Expertos del MESICIC y en aras de dar cumplimiento a la misma, la República Bolivariana de Venezuela manifestó en el informe de avance de la XV reunión del MESICIC, que a través de los diferentes órganos del Estado, se desarrollan programas de difusión dirigidos a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre los aspectos tratados en las secciones 4.1 a 4.5 de este documento, mediante campañas de información pública en los diferentes medios de comunicación social, el diseño de metodologías y materiales educativos, la producción de publicaciones y la organización de espacios de análisis y discusión, como talleres, seminarios, foros, congresos tanto nacionales como internacionales, ejecutados por organismos del Estado y las instituciones educativas, incluidas las universidades del país.”*¹⁵⁸

[535] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de la consideración satisfactoria de la medida b) de la recomendación 4.5. anterior.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 5.1.

Analizar la posibilidad de incluir los actos de corrupción a los que se refiere la CICC, en los tratados bilaterales de cooperación judicial que suscriba en el futuro, en especial en aquellos que efectúe con otros Estados Parte de la CICC.

[536] El Estado analizado en su respuesta reitera la información que presentó durante la Tercera Ronda en el sentido de que *“la Convención Interamericana contra la Corrupción forma parte de la base jurídica para las solicitudes de extradición, en relación con los delitos que ha tipificado de conformidad con la misma, y del ordenamiento jurídico interno venezolano, especialmente cuando no exista un tratado de extradición con el país solicitante...”*¹⁵⁹

[537] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la anterior recomendación.

Recomendación 5.2

Promover la armonización de la legislación interna con las disposiciones de la CICC en materia de extradición y compilar en un texto las disposiciones o normas relativas a los tratados internacionales sobre asistencia judicial mutua en materia penal.

¹⁵⁷ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 119.

¹⁵⁸ Ver informe de avance de Venezuela de la XV Reunión del Comité de Expertos del MESICIC.

¹⁵⁹ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 119.

[538] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la implementación de la recomendación anterior, la siguiente.¹⁶⁰

[539] - La reforma del Código Orgánico Procesal Penal en fecha 15 junio del año 2012 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario Nro. 6.078, donde se amplía el contenido del artículo 382 sustituyendo al 391 del título VI sobre la Extradición, mencionando lo siguiente: *“La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título”*.

[540] - La membresía del Estado analizado, a través del Ministerio Público de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, IberRed, que es una estructura formada por Autoridades Centrales y por puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

[541] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de esta recomendación se remonta a análisis de la primera ronda, en donde se expresó en la parte analítica *“En este sentido, el Comité considera que la República Bolivariana de Venezuela podría beneficiarse mediante la compilación, en un solo texto, de las disposiciones o normas relativas a los tratados internacionales sobre asistencia judicial mutua en materia penal.”*¹⁶¹

[542] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación de anterior, y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma.

Recomendación 5.3

Considerar la profundización de la coordinación interna entre los diversos organismos responsables de la asistencia jurídica mutua.

[543] El Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la consideración satisfactoria de la misma la siguiente¹⁶²:

[544] - *“...en virtud del proceso de modernización del Estado venezolano, instituciones como el Ministerio Público, la Cancillería y el Tribunal Supremo de Justicia, mantienen un control absoluto en términos de coordinación en materia de asistencia jurídica mutua. Esto permite ser más eficientes y dar respuesta oportuna a las solicitudes que eventualmente pudieran presentarse”*.

[545] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de la consideración satisfactoria de la recomendación 5.3. anterior.

Recomendación 5.4

¹⁶⁰ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 120.

¹⁶¹ Informe de Venezuela correspondiente a la Primera Ronda, pp. 41.

¹⁶² Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 121.

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República Bolivariana de Venezuela considere que necesita la cooperación técnica de otros estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

[546] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida a) de la recomendación 5.4. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Recomendación 5.5

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan las disposiciones de asistencia recíproca y puedan aplicar la colaboración necesaria para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción, prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.

Se recomienda también capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

[547] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida a) de la recomendación 5.4. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Recomendación 5.6

Diseñar e implementar un sistema de información que permita a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela realizar un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia jurídica referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la CICC.

[548] El Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen a la consideración satisfactoria de la misma la siguiente¹⁶³:

[549] “En concordancia con la recomendación realizada por el Comité de Expertos y en aras de dar cumplimiento a la misma, la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio Público y su Dirección Contra la Corrupción implementó, para una efectiva ejecución de sus funciones, la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio Público que posee un sistema de registro, seguimiento y control de los Exhortos, Cartas Rogatorias y Solicitudes de Asistencia Mutua en Materia Penal activas (dirigidas al extranjero) y pasivas (procedentes del extranjero), elaborado por la Dirección de Tecnología. El mencionado sistema funciona desde el año 2010. Allí se registran las solicitudes según la fecha de ingreso, una breve descripción del caso (incluyendo información sobre la investigación), el país requerido o requirente (según se trate de solicitudes pasivas o activas, respectivamente), el estatus en que se encuentra el trámite y el delito.”

¹⁶³ Respuesta de Venezuela al cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, pp. 121-122.

[550] El Comité, en vista de lo anterior, toma nota de la consideración satisfactoria de la recomendación 5.6. anterior.

Recomendación 5.7

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Parte, considerar el intercambio con otros Estados sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

[551] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida a) de la recomendación 5.7. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

[552] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida a) de la recomendación 7.1. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Recomendación 7.2

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el Sistema Interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en "Internet" de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

[553] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida a) de la recomendación 7.2. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

Recomendación 7.3

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos aún no existan, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

[554] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la medida a) de la recomendación 7.3. anterior. El Comité toma nota de la necesidad de que continúe dando atención a la misma.

ANEXO I

RECOMENDACIONES VIGENTES SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCION)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación 1.1.1.

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

Medidas sugeridas por el Comité:

- a) Revisar y analizar la posibilidad de reglamentar el régimen de prevención de conflictos de intereses, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con los altos cargos del Estado, teniendo en cuenta las particularidades e importancia de los mismos, así como los mecanismos para hacerlos efectivos. Considerando, entre otros aspectos, la previsión de una incompatibilidad en el ejercicio de las funciones públicas, respecto a otras actividades que pudiera afectar su imparcialidad; el fortalecimiento del régimen de sanciones; y la previsión de un órgano, dotado de plena autonomía, que vele por el debido cumplimiento de esta reglamentación.
- b) Revisar y analizar la posibilidad de ampliar y fortalecer el régimen de implicancias, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades contemplado en las leyes sectoriales relacionadas con los conflictos de intereses privados con el interés público. Considerando para ello, la previsión y ampliación de ciertos supuestos que podrían configurar conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de una manera más detallada y específica; la determinación de las instancias o funcionarios responsables de vigilar dicho cumplimiento; y la aplicación de medidas y sanciones en caso de incumplimiento.
- c) Asegurar la vigencia y aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación de las normas que regulan los conflictos de intereses, incluyendo, entre otras disposiciones, los supuestos que regula el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Hacienda pública.
- d) Considerar tomar las medidas legislativas que sean necesarias a los fines de que no prescriban los actos de corrupción que no necesariamente resultan en un daño contra el patrimonio público.
- e) Esta medida fue considerada satisfactoriamente.

- f) Revisar y analizar la posibilidad de incorporar una normativa que limite o prohíba la participación de ex funcionarios en la gestión de ciertos actos y en general referida a situaciones que puedan conllevar al aprovechamiento indebido de la condición de ex servidor público.

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación 1.2.1.

Continuar ajustando su legislación vigente en especial su Código Penal a lo dispuesto en el artículo 271 de la Constitución de la República que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público.

Recomendación 1.2.2.:

Considerar la posibilidad de extender el plazo de cinco años de inhabilitación en el ejercicio de la función pública, establecido en el artículo 96 de la LCC, a cualquier funcionario o empleado público que sea sancionado por alguno de los delitos que establece esa Ley al lapso de hasta 15 años, previsto en el artículo 105 de la LOCGRSNC.

Recomendación 1.2.3.:

Fortalecer que el Poder Judicial mantenga el poder de determinar la responsabilidad de los servidores públicos por los actos de corrupción, sin perjuicio de leyes que permitan a otros órganos tomar acciones administrativas o de otra naturaleza.

Se sugiere revisar y analizar la posibilidad de desarrollar una normativa que establezca con claridad el alcance de la expresión “a fin de evitar la paralización del servicio” contenida en el artículo 59 de la LCC, con el objeto de restringir los márgenes de discrecionalidad en la aplicación de dicha norma y el procedimiento a seguir, especificando el momento en que debe producirse dicha autorización.

Recomendación 1.2.4.:

Tomar las medidas que considere pertinentes a fin de asegurar que la discrecionalidad permitida en algunas disposiciones, relacionadas con la contratación pública, y que el artículo 59 de la LCC no constituya un elemento que afecte o incentive la conducta ilícita o arbitraria del funcionario público en la toma de decisiones, relacionado con la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con lo expresado en la sección 1.2.3.

Recomendación 1.2.5.:

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente.

1.3 Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación 1.3.1.

Desarrollar regulaciones y mecanismos para facilitar y promover la presentación de denuncias sobre actos de corrupción y optimizar los mecanismos existentes de recepción y trámite de denuncias

Recomendación 1.3.2.

Considerar la posibilidad de aplicar, al funcionario que omita su obligación de denunciar, sanciones más severas, distintas a la multa prevista, de carácter administrativo y penal, que incluyan, entre otras, la pérdida del cargo, según la gravedad de la falta.

Recomendación 1.3.3:

Actualizar las sanciones pecuniarias previstas en el Código Penal tomando en cuenta la seriedad de los delitos de corrupción en la función pública.

**2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCION)**

Recomendación:

Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, a través de las normas legales que sean pertinentes.

Medidas sugeridas por el Comité:

- a) Promulgar las disposiciones legales y otras medidas que considere pertinentes, a fin de establecer, claramente los sujetos a quienes el Contralor General de la República solicitará la presentación periódica de la Declaración Jurada de Patrimonio, asegurando que esas disposiciones incorporen desde los más altos cargos de la Administración Pública y aquellos que, dada su importancia y naturaleza, puedan facilitar o generar enriquecimiento ilícito u otros actos ilícitos contra el patrimonio público, y determinar la periodicidad de la presentación de dichas declaraciones, su contenido y requisitos formales.
- b) Considerar la conveniencia de exigir la declaración jurada en momentos distintos a los ya previstos, estableciendo plazos razonables para su actualización o las circunstancias ante las que se aconseje exigirles.
- c) Fortalecer el papel que el artículo 26 de la LCC otorga a los responsables del área de recursos humanos estableciendo la obligación de esas dependencias de notificar, de manera inmediata, a la CGR cuando el funcionario obligado a hacerlo no presente el comprobante que es su obligación exigirles, en que conste la presentación de la declaración de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos; y la previsión de las correspondientes acciones que deba tomar la CGR en esas situaciones.
- d) Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en relación con la publicidad de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, cuando corresponda.

- e) Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, para detectar y evitar conflictos de intereses.
- f) Esta medida fue considerada satisfactoriamente.
- g) Implementar los procedimientos necesarios para realizar el efectivo control del cumplimiento en la presentación de estas declaraciones, de acuerdo con lo mencionado en el punto f) anterior.
- h) Esta medida fue considerada satisfactoriamente.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 3.1.

Fortalecer la labor de fiscalización que realiza la CGR, como órgano de control superior y de vigilancia, sobre las Contralorías Estadales, considerando la posibilidad de efectuar un mayor número de evaluaciones o diagnósticos sobre sus actividades, o emplear los mecanismos o instrumentos que se consideren apropiados que permitan verificar su adecuado funcionamiento.

Recomendación 3.2.

Fortalecer la labor de la CGR mediante la puesta en práctica de políticas y acciones concretas que verifiquen el seguimiento e implementación, por parte de los entes que se encuentran bajo su ámbito de competencia, de las acciones correctivas sugeridas durante las auditorías, diagnósticos o evaluaciones.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 11).

4.1 Mecanismos de participación en general

Recomendación

Analizar la legislación vigente, a fin de detectar la existencia de previsiones que pudieran estar influyendo adversamente en la efectividad de estos derechos, incluyendo las relacionadas con los requisitos sobre las fuentes de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil e introducir los ajustes que se estimen pertinentes que aseguren que, en el régimen jurídico vigente, no existan disposiciones que constituyan una limitación a esta participación en la prevención de la corrupción.

4.2 Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación

Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública.

Medidas sugeridas por el Comité:

- a) Fortalecer las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública, incluyendo la posibilidad de acceder a otro tipo de información, distinta a la ya prevista; y considerar la aplicación de disposiciones que aseguren que el acceso a la misma solo pueda ser denegado por las causales que explícitamente regule y determine la ley.
- b) Contemplar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que garantizan el acceso a la información pública.
- c) Establecer un procedimiento específico para la tutela del derecho del ciudadano al acceso a la información pública, previendo con ese fin, entre otros aspectos, los siguientes: i) procedimientos para la recepción de solicitudes y para responder a éstas oportunamente; ii) entidad u oficinas encargadas del mismo y órgano de control superior que debe velar por la aplicación de esta normativa iii) requisitos de admisibilidad y la consecuencia si no se cumple con ellos; iv) razones por las cuales puede rechazarse una solicitud; v) forma de comunicación al administrado; vi) recurso expedito y especializados que posibiliten, en vía administrativa, recurrir la decisión del servidor público que indebidamente niegue el acceso a la información que se le solicita; y vii) aumento en el número de las sanciones, a fin de cubrir un espectro más amplio de supuestos que podrían entorpecer, retardar o imposibilitar el ejercicio de este derecho y que envuelvan la conducta del servidor público.
- d) Implementar, si aún no lo ha hecho, la disposición del artículo 9 de la LCC que se refiere a la creación de oficinas de atención al público o de atención ciudadana, asegurándose que las mismas tengan recursos suficientes para desempeñar su labor.
- e) Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la información pública del Estado, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible para tal efecto.

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando procedimientos, cuando correspondan, que permitan realizar consultas públicas.

Medidas sugeridas por el Comité:

- a) Esta medida fue considerada satisfactoriamente.
- b) Desarrollar mecanismos idóneos que permitan realizar consultas públicas en temas relacionados con el desempeño de las funciones administrativas que tienen una naturaleza distinta a la actividad normativa de la Administración, de acuerdo con lo expresado en la sección 4.3.2 de este informe.

- c) Reglamentar las disposiciones que sean pertinentes a fin de cerrar los espacios de discrecionalidad que pareciera existir en algunas de las disposiciones vigentes, según lo señalado en la sección 4.3.2 de este informe.
- d) Complementar la reglamentación, cuando sea procedente, de los mecanismos de participación que contempla la legislación nacional, de manera tal que se definan aspectos tales como el valor que se dará a la consulta o a la información y a los resultados que se produzcan y las consecuencias por el incumplimiento de obligaciones relativas a los mecanismos de consulta existentes, tales como sanciones a sus infractores.
- e) Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta, y cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la Sociedad Civil, a las Organizaciones no Gubernamentales, como también a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.

Medidas sugeridas por el Comité:

- a) Fortalecer y continuar implementando normas y mecanismos que alienten la participación, en la gestión pública, de las organizaciones de la sociedad civil incluidas las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción, estableciendo un régimen jurídico que de manera sistemática los cree y promueva, e incluya aspectos tales como otras modalidades de participación, distintas a las ya previstas, y otros mecanismos que promuevan, faciliten, consoliden y aseguren esta participación.
- b) Adoptar las disposiciones legales y las medidas que considere pertinentes a fin de prevenir que el registro de las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales pueda constituirse en un factor restrictivo que desmotive la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
- c) Reglamentar el artículo 76 de la LOCGRSNCF para garantizar a la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales el derecho de postular candidatos a encabezar los órganos de control fiscal de los entes que están sometidos a esa Ley.
- d) Promover la derogación de las denominadas leyes de desacato.
- e) Diseñar y poner en funcionamiento programas así como para difundir la información para estimular la participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitando y facilitando las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.

Medidas sugeridas por el Comité:

- a) Promover y continuar implementando formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.
- b) Esta medida fue considerada satisfactoriamente.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 5.1.

Analizar la posibilidad de incluir los actos de corrupción a los que se refiere la CICC, en los tratados bilaterales de cooperación judicial que suscriba en el futuro, en especial en aquellos que efectúe con otros Estados Parte de la CICC.

Recomendación 5.2.

Promover la armonización de la legislación interna con las disposiciones de la CICC en materia de extradición y compilar en un texto las disposiciones o normas relativas a los tratados internacionales sobre asistencia judicial mutua en materia penal.

Recomendación 5.3

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente.

Recomendación 5.4

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República Bolivariana de Venezuela considere que necesita la cooperación técnica de otros estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

Recomendación 5.5

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan las disposiciones de asistencia recíproca y puedan aplicar la colaboración necesaria para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción, prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.

Se recomienda también capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más amplia cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

Recomendación 5.6

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente.

Recomendación 5.7

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Parte, considerar el intercambio con otros Estados sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

Recomendación 7.2

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el Sistema Interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

Recomendación 7.3

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos aún no existan, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

ANEXO II

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CUARTA RONDA DE ANÁLISIS

AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* EN VENEZUELA

Lunes, 29 de septiembre de 2014	
16:00 hrs. – 17:30 hrs. <i>Hotel</i>	Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
17:30 hrs. – 18:30 hrs. <i>Hotel</i>	Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica
Martes, 30 de septiembre de 2012	
08:30 hrs. – 9:45 hrs. <i>CGR</i>	Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.^{164/}
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de participación de la sociedad civil
	<p><u><i>Representantes de la Sociedad Civil Organizada</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr. Juan Camargo. Vocero Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda. 2. Sra. Luisa Castillo y Sr. José Medina, Vocera del Consejo Comunal Matanza y Vocero del Consejo Comunal UCO 3334 3. Gabriela Henríquez Pacheco, Vocera, Movimiento Social “Otro Beta” 4. Karina Ribas y Pablo Arteaga, Directora de la Emisora Comunitaria CRP 91 y Vocero de la Comuna Alicia Benítez, Maca-Petare Sur. <p><u><i>Representantes del Sector industrial</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5.-Dra. Marianela Hernández, Vicepresidenta Financiera (FEDEINDUSTRIAS) 6.- Nelson Quijada, Presidente Cámara Venezolano-Brasileña (Sector Alimentos, Capítulo Venezuela). 7.- Alberto Cudemus, Presidente de la Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina) <p><u><i>Representantes del Sector Académico</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> 8.-Prof. Víctor Álvarez, Prof. Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM)

¹⁶⁴. Se sugiere invitar a participar a diversas organizaciones y personas en virtud de lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la realización de las visitas in situ* adoptada por el Comité de Expertos del MESICIC, que permite invitar a participar en estas reuniones a “organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores”.

	<p>9.-Prof. Javier Biardeau, Universidad Central de Venezuela</p> <p>10.- Prof. Alfredo Sequera, Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estados</p>
9:45 hrs. – 11:00hrs.	<p>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (continuación)</p>
	<p>Tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de acceso a la información
	<p><u>Representantes de la Sociedad Civil Organizada</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr. Juan Camargo. Vocero Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda. 2. Sra. Luisa Castillo y Sr. José Medina, Vocera del Consejo Comunal Matanza y Vocero del Consejo Comunal UCO 3334 3. Gabriela Henríquez P., Vocera, Movimiento Social “Otro Beta” 4. Karina Ribas y Pablo Arteaga, Directora de la Emisora Comunitaria CRP 91 y Vocero de la Comuna Alicia Benítez, Maca-Petare Sur. <p><u>Representantes del Sector industrial</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5.- Dra. Marianela Hernández, Vicepresidente Financiera (FEDEINDUSTRIAS) 6.- Nelson Quijada, Presidente Cámara Venezolano-Brasileña (Sector Alimentos, Capitulo Venezuela) 7.- Alberto Cudemus, Presidente de la Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina) <p><u>Representantes del Sector Académico</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 8.- Prof. Víctor Álvarez, Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM) 9.- Prof. Javier Biardeau, Universidad Central de Venezuela 10.-Prof. Alfredo Sequera, Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estados
11:00 hrs. – 12:30 hrs.	<p>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (continuación)</p>
	<p>Tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La prevención, detección, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción en Venezuela
	<p><u>Representantes de la Sociedad Civil Organizada</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sr. Juan Camargo. Vocero Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda. 2. Sra. Luisa Carrillo y Sr. José Medina, Vocera del Consejo Comunal Matanza y Vocero del Consejo Comunal UCO 3334 3. Gabriela Henríquez P., Vocera, Movimiento Social “Otro Beta” 4. Karina Ribas y Pablo Arteaga, Directora de la Emisora Comunitaria CRP 91 y Vocero de la Comuna Alicia Benítez, Maca-Petare Sur. <p><u>Representantes del Sector industrial</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5.-Dra. Marianela Hernández, Vicepresidenta Financiera (FEDEINDUSTRIAS) 6.- Nelson Quijada, Presidente Cámara Venezolano-Brasileña (Sector Alimentos, Capitulo Venezuela) 7.- Alberto Cudemus, Presidente de la Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina) <p><u>Representantes del Sector Académico</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 8.- Prof. Víctor Álvarez, Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM)

	9.- Prof. Javier Biardeau, Universidad Central de Venezuela 10.- Prof. Alfredo Sequera, Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estados
12:30 hrs. – 14:00 hrs	Almuerzo
14:00 hrs – 15:00 hrs <i>CGR</i>	Panel 1: Contraloría General de la República (CGR)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación inicial (5 min.) • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional • Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Adelina González, Contralora General de la República Bolivariana de Venezuela 2. Dr. Armando E. Guédez, Subcontralor de la República Bolivariana de Venezuela 3. Dra. Ivanova Pacheco, Directora de Recursos Humanos
15:00 hrs – 16:00 hrs	Panel 2: Contraloría General de la República (CGR)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades • Régimen presupuestal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Adelina González, Contralora General de la República Bolivariana de Venezuela 2. Dr. Armando E. Guédez, Subcontralor de la república Bolivariana de Venezuela 3. Lic. Basilio Jáuregui, Director General Técnico
16:00 hrs. –17:00 hrs.	Panel 3: Contraloría General de la República (CGR)
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Adelina González, Contralora General de la República Bolivariana de Venezuela 2. Dr. Armando E. Guédez, Subcontralor de la República Bolivariana de Venezuela 3. Dra. Carmen D. González, Directora de Procedimientos Especiales 4. Dra. Mercedes de Blanco, Directora General de Control de los Poderes Públicos Nacionales

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dr. Félix Zambrano, Director General de Control de Estados y Municipios 6. Ing. Rafael Yoll, Director General de Control de Administración Descentralizada 7. Lic. Basilio Jáuregui, Director General Técnico.
17:00 hrs –18:00hrs	Panel 4: Contraloría General de la República (CGR)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a las recomendaciones formuladas durante la Primera Ronda: <ul style="list-style-type: none"> - Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. - Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Adelina González, Contralora General de la República Bolivariana de Venezuela 2. Dr. Armando E. Guédez, Subcontralor de la República Bolivariana de Venezuela 3. Dra. Carmen D. González, Directora de Procedimientos Especiales 4. Dra. Mercedes de Blanco, Directora General de Control de los Poderes Públicos Nacionales 5. Dr. Félix Zambrano, Director General de Control de Estados y Municipios 6. Ing. Rafael Yoll, Director General de Control de Administración Descentralizada 7. Lic. Basilio Jáuregui, Director General Técnico.
18:00 hrs	Reunión informal^{165/} con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
Miércoles, 1 de octubre de 2014	
8:30 hrs – 9:30 hrs CGR	Panel 5: Ministerio Público
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación inicial (5 min.) • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional • Adopción de decisiones • Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos

¹⁶⁵. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República 2. Dr. Jesús Gerardo Peña Rolando, Director Contra la Corrupción 3.- Dra. Indira León, Sub-Directora Contra la Corrupción.
9:30 hrs –10:30 hrs	Panel 6: Ministerio Público (MP)
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno • Régimen presupuestal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República.
10:30 hrs – 11:30 hrs	Panel 7: Ministerio Público (MP)
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República
11:30 hrs – 12:30 hrs	Panel 8: Ministerio Público
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de las recomendaciones formuladas durante la primera ronda: <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismos para facilitar y promover la presentación de denuncias sobre actos de corrupción - Asistencia y Cooperación
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República.
12:30 hrs. – 14:00 hrs	Almuerzo
14:00 hrs – 15:00 hrs <i>CGR</i>	Panel 9: Poder Judicial
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación inicial (5 min.) • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional • Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos
	Tribunal Superior de Justicia (TSJ) <ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Gladys M. Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia 2. Dr. Arcadio Delgado, Magistrado de la Sala Constitucional 3. Dra. Mónica Misticchio, Magistrada de la Sala Político-Administrativa 4. Dr. Juan José Mendoza, Magistrado de la Sala Constitucional

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dr. Luis Damiani, Magistrado Suplente de la Sala Constitucional 6. Dra. Francia Coello, Magistrada Suplente de la Sala Constitucional 7. Dr. Romer Pacheco, Consultor Jurídico del Tribunal Supremo de Justicia 8. Lic. Lewis Aparicio, Director de Recursos Humanos 9. Dra. Mónica Rodríguez, funcionaria de la Comisión Judicial 10. Ing. Argenis Chávez, Director Ejecutivo de la Magistratura
15:00 hrs – 16:00 hrs	Panel 10: Poder Judicial
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades • Mecanismos de control interno • Régimen presupuestal
	Tribunal Superior de Justicia (TSJ) <ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Gladys M. Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia 2. Dra. Mónica Mistichio, Magistrada de la Sala Político-Administrativa 3. Dr. Luis Damiani, Magistrado Suplente de la Sala Constitucional 4. Dra. Francia Coello, Magistrada Suplente de la Sala Constitucional 5. Dr. Romer Pacheco, Consultor Jurídico 6. Dr. Gerardo Altuve, Auditor Interno 7. Lic. Roy Román, Director de Administración y Servicios (E) 8. Silio Sánchez, Coordinador de la Oficina de Participación Social
16:00 – 17:00 hrs	Panel 11: Poder Judicial
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica
	Tribunal Superior de Justicia (TSJ) <ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Gladys M. Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia 2. Dra. Deyanira Nieves, Magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal 3. Dr. Luis Damiani, Magistrado Suplente de la Sala Constitucional 4. Dr. Romer Pacheco, Consultor Jurídico 5. Dr. Daniel Ramírez, Abogado Asistente – Sala de Casación Penal 6. Dr. Franklin Vezga, abogado Sala de Casación Penal
17:00 – 18:00 hrs	Panel 12: Poder Judicial
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de las recomendaciones formuladas durante la primera ronda: <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia y Cooperación
	Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Gladys M. Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia 2. Dra. Deyanira Nieves, Magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal 3. Dr. Luis Damiani, Magistrado Suplente de la Sala Constitucional 4. Dr. Romer Pacheco, Consultor Jurídico 5. Dr. Daniel Ramírez, Abogado Asistente – Sala de Casación Penal 6. Dr. Franklin Vezga, abogado Sala de Casación Penal
18:00 hrs	Reunión informal^{166/} con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
Jueves, 2 de octubre de 2014	
08:30 hrs – 09:30 hrs <i>CGR</i>	Panel 13: Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación inicial (5 min) • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional • Adopción de decisiones
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Cerecita Olavarrieta A., Superintendente Nacional de Auditoría Interna
9:30 hrs – 10:30 hrs	Panel 14: Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos • Acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de la calidad implementadas
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Cerecita Olavarrieta A., Superintendente Nacional de Auditoría Interna
10:30 hrs – 11:30 hrs	Panel 15: Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno • Régimen presupuestal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Cerecita Olavarrieta A., Superintendente Nacional de Auditoría Interna
11:30 hrs – 12:30 hrs	Panel 16: Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

¹⁶⁶. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”

	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Cerecita Olavarrieta A., Superintendente Nacional de Auditoría Interna
12:30 hrs. – 14:00 hrs	Almuerzo
14:00 hrs – 15:00 hrs <i>CGR</i>	Panel 17: Defensoría del Pueblo (DP)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Presentación inicial (5 min) • Naturaleza, funciones y objetivos • Mecanismos de coordinación interinstitucional • Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo 2. Dra. Ilaria Márquez, Directora Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo
15:00 hrs – 16:00 hrs	Panel 18: Defensoría del Pueblo (DP)
	Temas: <ul style="list-style-type: none"> • Régimen presupuestal • Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades • Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo 2. Dra. Ilaria Márquez, Directora Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo 3. Nombre y Cargo
16:00 hrs – 17:00 hrs	Panel 19: Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda
	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas durante la primera ronda: <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismos de acceso a la información - Mecanismos de consulta
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo 2. Dra. Ilaria Márquez, Directora Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo
17:00 hrs – 18:00 hrs	Panel 20: Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda (continuación)

	Tema: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas durante la primera ronda: <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública - Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo 2. Dra. Ilaria Márquez, Directora Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo
18:00 hrs	Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
19:00 hrs	Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

**AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO
PARA LA COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS
ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA**

ESTADO ANALIZADO:

VENEZUELA

Adelina González

Experta Titular ante Comité de Expertos del MESICIC
Contralora General
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela

Basilio Jáuregui

Experto Alterno ante Comité de Expertos del MESICIC
Director General Técnico
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela

HAITÍ

Antoine Atouriste

Experto Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC
Director General
Unidad para Combatir la Corrupción (ULCC)

Joseph Jean Figaro

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC
Director de Operaciones
Unidad para Combatir la Corrupción (ULCC)

Yvlore Pigeot

Experta Alternante ante el Comité de Expertos del MESICIC
Directora
Departamento Legal
Unidad para Combatir la Corrupción (ULCC)

PERÚ

Víctor Roberto Prado Saldarriaga

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC
Juez Supremo Titular
Corte Suprema de Justicia de la República

Hugo Príncipe Trujillo

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC
Vocal Supremo
Corte Suprema de Justicia de la República

Alfredo Edgar Rebaza Vargas

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC

Fiscal Superior Titular
Fiscalía Superior de Lavado de Activos
Ministerio Público

Rafael Vela Barba
Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC
Fiscal Superior Nacional
Coordinador
Fiscalías contra la Criminalidad Organizada
Ministerio Público

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC

Marta Laura Martínez
Oficial Jurídico Principal
Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA